

95ª REUNION — 9ª SESION EXTRAORDINARIA — MARZO 16 DE 1966

Presidencia de los señores diputados Arturo Mor Roig y Rodolfo José Tecera del Franco

Secretarios: doctores Eduardo T. Oliver y Guillermo González

Prosecretarios: doctor Enrique A. Pardo y señor Sebastián Oreste Cánepa

DIPUTADOS PRESENTES:

ABALO, Raúl
ABDULAJAD, Abraham
AGUINAGA, Carlos
ALEGRE, Carlos Duval
ALETIA DE SYLVAS, Alfonso R.
ALFONSO, Raúl R.
AMURA, Luis
ANTÓN, Luis
ANTUN, Julio
ARANA, Tomás P.
ARBALLO, Enrique Jorge
ARIAS, Luis Osvaldo
ARMESTO, Alberto
ARRASCAETA, Félix de
ARROYO, Ramón F.
BACCAY, Rodolfo D.
BAFFICO, Alejandro O.
BALBI, Isidro G.
BALESTRA (h.), Juan
BARRIONUEVO, Gerardo Eusebio
BELGRANO RAWSON, Guillermo A.
BELNICOFF, Manuel
BERRINI, Emilio
BIANCHI, Manuel Luis
BILBAO, Saturnino
BRAVO, Héctor F.
BUSACCA, Salvador F.
CÁCERES, Roberto M.
CAGGIANO, Ángel R.
CALVO, Carlos Alberto
CASTELLANOS, Ángel Ignacio
CASTILLO, Maximiano
CASTRO, Abel Andrés
CERDEIRO, Alfonso M.
CORAL, Juan Carlos
CORNEJO LINARES, Juan Carlos
CORTELEZZI, Osvaldo
COTTONARO, Carlos Alberto Carmelo
CHRISTE, Jorge J.
D'ANGELO, Eduardo Antonio
DE CARA, José Eduardo
DEL MATTI, Juan José
DEL PERO, Miguel P.
DÍAZ O'KELLY, Felipe F.
DOMÍNGUEZ, Luis C.
FABRIZIO, Luis N.
FERNÁNDEZ, Raúl
FERNÁNDEZ NÚÑEZ, Isidro
FERREIRA, Jorge W.
FIOL, Juan Antonio
FLUJIA, W. Emilio

FREGA, José
GALEANO, Roberto A.
GALLO, Carlos Renato
GARAY, Fermín J.
GARCÍA, Horacio
GARCÍA SOLÁ, Héctor J.
GARIBALDI, Alberto
GARÓFALO, Roberto A.
GHIOLDI, Américo
GONZÁLEZ, Jorge
GONZÁLEZ BERGEZ, Pablo
GUTIÉRREZ, Eduardo O.
HARDY, Emilio J.
HARRINGTON, Luis J. D.
HERRERA, Oscar A.
INSUA, Carlos Raúl
ISLA, Rosaura
JAROSLAVSKY, Manuel
JOFRE, Emilio
JUÁREZ, Carlos Arturo
LAVALLE, Mario
LEÓN, Luis Agustín
LUCCO, Juan A.
LLAVER, Santiago Felipe
LLORENS, Héctor
MAGLIETTI, Alberto E.
MARSICO, Adalberto O.
MARTÍNEZ RAYMONDA, Rafael J.
MASSOLO, Eduardo A.
MAYA, Héctor Domingo
MENDEZ DOYLE, Abel Víctor
MINSK, Hugo E.
MOR ROIG, Arturo
MUNIAGURRIA, Camilo
MUSACCHIO, Vicente M.
MUSTANI, Héctor Francisco
NATIELLO, Roque Oscar Alberto
NIEMBRO, Paulino
NOUGUÉS, Isaías J.
OBREGÓN, Pedro A.
OCAMPO, Carlos E.
ORESTE, Raúl
ORTIZ HERNÁNDEZ, Ángel H.
ORTÚZAR, Juan Carlos Felipe de
OXENFORD, Rodolfo Kitchener
PATLIS, León
PENA, Roberto M.
PÉREZ, Raúl
PÉREZ AZNAR, Ataúlfo
PESSINO, Felipe
PICADO, Estanislao
PIZARRO, Teodosio F.
POSSE, Melchor Silverio

PRAT, Longín Osvaldo
PURICELLI, Amadeo
RASINES, Osvaldo Gregorio
REQUENA, Raúl María
RIANDE, Teresa Noemí
RIOBOO, Raúl Ricardo
RISSO, Carlos Saúl Enrique
RIVA, Raúl Edgardo
ROBERTO, Mario
ROCA, Luis Raúl
RODRÍGUEZ, Eusebio
RODRÍGUEZ DEL REBOLLAR, José
RODRÍGUEZ KESSY, Cristóbal Cleto
RODRÍGUEZ VAGARÍA, Eduardo
RODRÍGUEZ VIGIL, Francisco Rafael
ROMANO, Benito Vicente
ROSITO, M. Oscar
ROUZAUT, Adolfo E.
SA, Edgar
SANUDO FREYRE, Clemente R.
SCHAPIRA, David
SCHIAFFINO, Nicolás Hipólito
SELSER, Jorge José
SIMINI, Jorge Alberto
SOLANA, Jorge D.
SOLARI, Eduardo A.
SPERTINO, Norberto Aldo
STAINOH, Alberto
TECERA DEL FRANCO, Rodolfo José
THEDY, Horacio Ricardo
TORTONESE, Dante Oscar
TRÓCCOLI, Antonio A.
URTEAGA, Benito Florentino
VACA LOBO, Juan Manuel
VACCAREZZA, Eduardo H.
VAZQUEZ POL, José
VEDIA, Enrique de
VIDELA, Roberto
VILLALBA, Mario Ramón
VILLAMAYOR, Roberto A.
VINALS, Fernando J.
ZADOFF, Arón
ZANONI, Juan Claudio
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, CON LICENCIA:

CANTONI, Angel Serafin
FERRARI, Luis

AUSENTES, CON AVISO:

ACHIARY, Juan C.
CALVINO, Nélida Renée

CARO, José Armando
CATALAN, Guillermo
ELENA, Reinaldo
FIGUEROA, Jaime Hernán
HARVEY, Ricardo J. G.
MURATORI, Eduardo D.
PEDRINI, Ferdinando
PERNASETTI, Horacio
RATTI, Luis Carlos
RIERA, Fernando Pedro
SARMIENTO, Néida Marta
SERÚ GARCÍA, Alberto
TARULLI, Pascual

VÁZQUEZ, Aurelio
VINTI, Gerónimo

AUSENTES, SIN AVISO:

AGUIRRE CÁMARA, José
ÁVILA, Eduardo Miguel
BARCAT, Abdo
BAZÁN RIVEROS, Sijifredo Antonio
CASAS, David Jorge
DAMIANI, Salvador
DÍAZ, Diógenes C.
ESPINOZA, Silvano Ramón
GÓMEZ MACHADO, Héctor

IZETTA, Gerónimo Manuel
LILJESTHROM, Eduardo R.
LOZANO, Martín
MASTOLORENZO, Vicente
MERCADO, José Ignacio
MIGNO, Mario
MOLINAS, Ricardo F.
MONTANI, José Jesús Mariano
MONTE, Ricardo Alvaro
ROMEU VERDIER, Gabriel
SALADO, Francisco A.
SIMÓ, Alejo José
TACHELLA, Eliberto S. J.
URANGA, Raúl Lucio

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría. (Pág. 6740.)
- 2.—Apertura de la sesión. (Pág. 6740.)
- 3.—Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Risso. Pasa a comisión. (Pág. 6740.)
- 4.—Información. (Pág. 6741.)
- 5.—Versiones taquigráficas. (Pág. 6741.)
- 6.—Asuntos entrados:

I.—Poder Ejecutivo:

- 1.—Mensaje y proyecto de ley: restitución a la Municipalidad de General Rodríguez, Buenos Aires, del dominio sobre tres fracciones de terreno de propiedad del Estado nacional. (Pág. 6742.)
- 2.—Mensaje: inauguración de la nueva central automática que se está instalando en Ituzaingó, Buenos Aires, dejando sin efecto su desmantelamiento para instalar otra similar en el partido de Merlo, de esa provincia. (Página 6742.)
- 3.—Mensaje: instalación de un conmutador automático telefónico en Malagueño, Santa María, (Córdoba. Página 6742.)
- 4.—Mensaje: causas que originaron los accidentes ferroviarios registrados durante el año 1964 y los seis primeros meses del año 1965. (Pág. 6743.)
- 5.—Mensaje: construcción de una pasarela para peatones sobre la playa de maniobras del Ferrocarril General Belgrano en Deán Funes, Córdoba. (Página 6744.)
- 6.—Mensaje: automatización de la central telefónica que funciona en Río Tercero, Córdoba. (Pág. 6744.)
- 7.—Mensaje: contestación a la resolución comunicada por la Presidencia de la Honorable Cámara con fecha 30 de octubre de 1965, relacionada con la presunta venta del buque factoría «Cruz del Sur». (Pág. 6744.)

- 8.—Mensaje: contestación a la declaración comunicada por la Presidencia de la Honorable Cámara con fecha 23 de septiembre de 1964, relacionada con la instalación de una cabina telefónica pública en Valcheta, Río Negro. (Página 6745.)

II.—Dictámenes observados:

- 1.—El señor diputado Arias observa el dictamen de las comisiones de Energía y Combustibles, de Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales y de Obras Públicas contenido en el orden del día 405. (Pág. 6746.)
- 2.—El señor diputado Aguinaga y otros observan el dictamen de las comisiones de Energía y Combustibles, de Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales y de Obras Públicas contenido en el orden del día 405. (Pág. 6746.)

III.—Comunicaciones oficiales. (Pág. 6747.)

IV.—Peticiones particulares. (Pág. 6748.)

V.—Proyectos de ley:

- 1.—Del señor diputado Viñals y otros: moratoria para las deudas fiscales, bancarias y comerciales contraídas por los sectores industriales, forestales y agropecuarios que desarrollan sus tareas dentro de las zonas afectadas por la inundación. (Pág. 6749.)
- 2.—Del señor diputado Rouzaut: oficialización del Instituto Secundario Comercial José Manuel Estrada C-73, de Santa Teresa, Santa Fe. (Pág. 6749.)
- 3.—Del señor diputado Rodríguez Vagaría: realización de los estudios previos y pavimentación de las rutas nacionales 12 y 14 (Entre Ríos), comprendidas entre Brazo Largo y el límite con la provincia de Corrientes. (Pág. 6749.)
- 4.—Del señor diputado Bravo: subsidio a la Confederación de Maestros de la Capital Federal. (Pág. 6751.)

- 5.—Del señor diputado **Fernández**: donación a la República de la India de una partida de trigo. (Pág. 6752.)
- 6.—Del señor diputado **Christe y otros**: creación de la Comisión de Ayuda Social por inundaciones, y de un fondo de ayuda para los damnificados por las recientes crecidas. (Pág. 6752.)
- 7.—De los señores diputados **Alfonsín y Ortúzar**: donación a la provincia de Buenos Aires de un inmueble sito en la ciudad de La Plata. (Pág. 6753.)
- 8.—Del señor diputado **Bravo**: subsidio a la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal Cosme Argerich, de la Capital Federal. (Pág. 6754.)
- 9.—Del señor diputado **Rodríguez del Rebolgar**: emisión extraordinaria de títulos de renta del Estado, destinados a los damnificados por las inundaciones, condonación de deudas y establecimiento de moratorias fiscales, bancarias y comerciales. (Página 6755.)
- 10.—Del señor diputado **Antún y otros**: pensión vitalicia a Pascual Pérez y Horacio Accavallo. (Pág. 6755.)
- 11.—Del señor diputado **Bravo**: subsidio al Club Gimnasia y Esgrima de Vélez Sarsfield, de Capital Federal. (Página 6756.)
- 12.—De los señores diputados **Selser y Ocampo**: gravamen, a cargo del locador, por el mayor valor locativo de la tierra. (Pág. 6756.)
- 13.—Del señor diputado **Busacca**: derogación del inciso a), artículo 29, de la ley 16.739 (locaciones urbanas). (Página 6756.)
- 14.—De los señores diputados **Selser y Ocampo**: implantación del impuesto especial de emergencia 1966, «Zona de desastre», para auxiliar a los damnificados por las inundaciones. (Página 6757.)
- 15.—Del señor diputado **Elena**: creación de la Comisión Interprovincial de Endicamientos del Valle Aluvial de los ríos Paraná y Paraguay (CIEVAP). (Pág. 6757.)
- 16.—De los señores diputados **Ghioldi y Fabrizio**: subsidio a la Asociación Civil de Educación Diferencial Doctor Aquiles Gareiso, de la Capital Federal. (Pág. 6758.)
- 17.—De los señores diputados **Ghioldi y Fabrizio**: subsidio a las escuelas e institutos filantrópicos argentinos de la Capital Federal. (Pág. 6759.)
- 18.—De los señores diputados **Ghioldi y Fabrizio**: subsidio a la Asociación Obrera de Socorros Mutuos, de la Capital Federal. (Pág. 6759.)
- 19.—De los señores diputados **Ghioldi y Fabrizio**: subsidio al Ateneo Iberoamericano, de la Capital Federal. (Página 6760.)
- 20.—De los señores diputados **Ghioldi y Abalo**: subsidio a la Comisión de Fomento y Turismo de Salsipuedes, Colón, Córdoba. (Pág. 6760.)
- 21.—Del señor diputado **Antún y otros**: incrementación de las remuneraciones que perciben los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el procurador general de la Nación, y modificación del artículo 1º de la ley 16.494. (Pág. 6760.)
- 22.—Del señor diputado **Schiaffino**: exención del impuesto a los réditos a las donaciones destinadas a los damnificados por las inundaciones. (Pág. 6761.)
- 23.—Del señor diputado **Viñals**: realización del censo especial sobre daños materiales ocasionados por la creciente de los ríos Iguazú, Paraguay, Paraná y de la Plata. (Pág. 6761.)
- 24.—Del señor diputado **Viñals**: constitución de un fondo destinado a los damnificados por la creciente de los ríos Iguazú, Paraná, Paraguay, Uruguay y de la Plata. (Pág. 6762.)
- 25.—Del señor diputado **Bravo**: subsidio al Club Sportivo Pereyra de la Capital Federal. (Pág. 6763.)
- 26.—Del señor diputado **Roca y otros**: asignación de una partida a la Secretaría de Comunicaciones destinada al reajuste de los haberes del personal dependiente de ella. (Pág. 6763.)
- 27.—Del señor diputado **Cáceres**: subsidio a los damnificados por el temporal de Chilecito, La Rioja. (Pág. 6763.)
- 28.—Del señor diputado **Harrington**: transferencia a la Secretaría de Marina de una fracción de terreno de propiedad del Estado nacional sita en Punta Alta, Coronel Rosales, Buenos Aires (proyecto reproducido). (Pág. 6764.)
- 29.—Del señor diputado **Casas**: pensión a la señora Carmen Pérez. (Pág. 6764.)
- 30.—De los señores diputados **Gallo y Calviño**: porcentajes de bonificaciones para los agentes de la administración nacional y sus derechohabientes. (Página 6765.)

- 31.—Del señor diputado **Caggiano**: modificación de varios artículos de la ley 11.682, texto ordenado en 1960, y sus modificaciones. (Pág. 6765.)
- 32.—Del señor diputado **Maglietti**: subsidio a la provincia de Formosa para reconstrucción de caminos y rutas provinciales. (Pág. 6768.)
- 33.—Del señor diputado **Nougués**: construcción de un edificio para el Centro de Salud y Maternidad de Villa Graneleros, Tucumán. (Pág. 6768.)
- 34.—De los señores diputados **Pérez Aznar** y **Harrington**: creación de la Comisión Nacional de la Cuenca Argentina del Sistema del Plata. (Pág. 6768.)

VI.—Proyectos de resolución:

- 1.—Del señor diputado **Elena**: adjudicación de una medalla de oro al pugilista Horacio Accavallo por la obtención del título de campeón del mundo. (Pág. 6771.)
- 2.—De los señores diputados **Gómez Machado** y **Galeano**: pedido de informes acerca de las gestiones realizadas por el gobierno de la provincia de Misiones ante las autoridades paraguayas para obtener electricidad de la central hidroeléctrica del Acaray. (Página 6771.)
- 3.—De los señores diputados **Pérez Aznar** y **Monte**: derogación del decreto 8.341/65, que suprime la Bolsa de Trabajo Rural. (Pág. 6772.)
- 4.—Del señor diputado **Rodríguez Vagaría**: llamado a licitación pública para la ejecución de los trabajos de enripiado de la ruta nacional 127 en el tramo comprendido entre Arroyo Burgos y Sauce de Luna, Entre Ríos. (Pág. 6772.)
- 5.—Del señor diputado **Molinas**: pedido de informes acerca del funcionamiento de los hipódromos dependientes de los Jockey Club del interior del país. (Pág. 6772.)
- 6.—Del señor diputado **Vedia**: incorporación de los sobrantes disponibles de la Lotería Nacional y Casinos, por premios no cobrados por sus beneficiarios, con destino a los damnificados por las inundaciones. (Página 6773.)
- 7.—De los señores diputados **Pizarro** y **Vedia**: inclusión en el temario de sesiones extraordinarias del tratamiento de todos los proyectos relacionados con las inundaciones producidas en el Nordeste y Litoral argentinos. (Página 6773.)
- 8.—Del señor diputado **Musitani**: ampliación de las escolleras existentes sobre la avenida Félix U. Camet y reconstrucción de una escalera de descenso a la playa Constitución, en Mar del Plata, Buenos Aires. (Pág. 6774.)
- 9.—Del señor diputado **Nougués**: pedido de informes acerca de la presunta disposición del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública relacionada con el pago de compensaciones por servicios especiales a varios agentes de ese ministerio. (Pág. 6774.)
- 10.—Del señor diputado **Zadoff** y **otros**: contribución de los señores diputados en favor de los damnificados por las inundaciones. (Pág. 6775.)
- 11.—Del señor diputado **Coral** y **otros**: integración de una comisión de expertos para la realización del estudio técnico del problema de las inundaciones y elaboración de un plan integral de control y utilización de las aguas del sistema hidrográfico nacional. (Pág. 6775.)
- 12.—Del señor diputado **Tecera del Franco** y **otros**: pedido de informes acerca del proyecto de reforma a la Carta de la OEA expuesto en Panamá por el embajador argentino, don Carlos Becerra. (Pág. 6775.)
- 13.—Del señor diputado **Nougués**: provisión de materiales a los talleres ferroviarios de Taí Viejo, Tucumán. (Pág. 6776.)
- 14.—De los señores diputados **Salado** y **Pizarro**: cumplimiento de las normas establecidas en la ley 14.473 (Estatuto del Docente). (Pág. 6776.)
- 15.—De los señores diputados **Harrington** y **Pérez Aznar**: adaptación de los programas de enseñanza de historia argentina para dar relevancia al estudio de la Campaña del Desierto. (Pág. 6776.)
- 16.—Del señor diputado **Belgrano Rawson** y **otros**: interpelación al señor ministro de Educación y Justicia acerca de la forma en que se tramitó la escala de sueldos para los docentes dada a publicidad en los órganos periodísticos del 5 de marzo de 1966. (Pág. 6777.)

- 17.—Del señor diputado **De Cara**: pedido de informes acerca de la posibilidad de que se procese al presidente del VIII Festival Cinematográfico por el hecho de no haber sometido a la Comisión Nacional de Cultura las películas exhibidas en ese festival. (Pág. 6777.)
 - 18.—Del señor diputado **Molinas**: pedido de informes sobre la presunta invitación formulada al presidente de la República de Haití para asistir a los actos celebratorios del sesquicentenario de la Independencia argentina. (Pág. 6778.)
 - 19.—Del señor diputado **Tortonese**: pedido de informes acerca de la presunta aparición de un brote de fiebre amarilla en el Litoral argentino. (Página 6778.)
 - 20.—Del señor diputado **Pérez Aznar**: pedido de informes sobre el número de designaciones efectuadas para cargos diplomáticos a partir del 12 de octubre de 1963, y otras cuestiones conexas. (Pág. 6779.)
 - 21.—Del señor diputado **Salado**: pedido de informes acerca del presunto pedido formulado por el gobernador de la provincia de Tucumán para que sea designado un jefe militar que reestructure la policía de esa provincia. (Pág. 6779.)
 - 22.—De los señores diputados **Pérez Aznar** y **Musacchio**: adquisición de la biblioteca y colección de documentos que pertenecieron al doctor Diego Luis Molinari. (Pág. 6780.)
 - 23.—Del señor diputado **Gómez Machado**: interpelación a los señores ministros de Defensa Nacional y de Educación y Justicia acerca de la nota cursada por el señor ministro de Defensa Nacional al segundo, relacionada con las atribuciones del Poder Ejecutivo y la interferencia producida por integrantes del Poder Judicial. (Pág. 6780.)
 - 24.—De los señores diputados **Armesto** y **Natiello**: pedido de informes acerca del anunciado plan de reestructuración ferroviaria, y cuestiones conexas. (Pág. 6781.)
 - 25.—De los señores diputados **Armesto** y **Natiello**: pedido de informes acerca de la electrificación de la línea ferroviaria transandina, zona Mendoza, y otras cuestiones. (Pág. 6782.)
 - 26.—De los señores diputados **Armesto** y **Natiello**: pedido de informes acerca del número de agentes contratados que prestan servicios en los distintos ministerios, secretarías de Estado, entes autárquicos, y otras cuestiones conexas. (Pág. 6783.)
 - 27.—Del señor diputado **Maglietti**: adopción de medidas para la recuperación de la zona afectada por las inundaciones en las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes. (Pág. 6783.)
 - 28.—Del señor diputado **Maglietti**: adopción de medidas para que sea fijado el precio mínimo sostén para la cosecha de algodón de 1966 y de otras tendientes a evitar las consecuencias producidas a los agricultores por las inundaciones. (Pág. 6784.)
 - 29.—Del señor diputado **Molinas**: pedido de informes acerca de la presunta disminución del número de reuniones y carreras en los hipódromos del interior, y otras cuestiones conexas. (Pág. 6785.)
 - 30.—Del señor diputado **Molinas**: pedido de informes acerca de la forma en que aplica la ley 13.235 la Comisión Nacional de Hipódromos. (Pág. 6785.)
 - 31.—Del señor diputado **Busacca**: pedido de informes acerca de las causas que motivaron la necesidad de importar huevos, y otras cuestiones conexas. (Pág. 6786.)
 - 32.—Del señor diputado **Bravo**: interpelación al señor ministro de Educación y Justicia acerca de las remuneraciones y escalafón de docentes. (Página 6786.)
 - 33.—Del señor diputado **Niembro** y otros: designación de una comisión investigadora del destino dado a los restos de Eva Perón. (Pág. 6786.)
- VII.—Proyectos de declaración:**
- 1.—Del señor diputado **Harvey**: pago inmediato de los subsidios acordados anteriormente en favor de las provincias afectadas por las inundaciones. (Pág. 6787.)
 - 2.—De los señores diputados **Pizarro** y **Vedia**: suspensión de la Fiesta Nacional del Tabaco. (Pág. 6788.)
 - 3.—Del señor diputado **León**: adopción por parte del Poder Ejecutivo de medidas tendientes a conjugar los perjuicios ocasionados por las recientes inundaciones. (Pág. 6788.)
 - 4.—Del señor diputado **Nougués**: funcionamiento de las escuelas fábricas instaladas en distintos puntos del interior del país. (Pág. 6788.)

- 5.—Del señor diputado **Tecera del Franco**: aplicación del artículo 62, inciso j), de la ley 11.682, texto ordenado en 1960 (título II - De las deducciones), a las donaciones destinadas a los damnificados por las inundaciones. (Página 6789.)
- 6.—Del señor diputado **Salado**: realización de las obras del dique La Angostura, Catamarca. (Pág. 6789.)
- 7.—Del señor diputado **Salado**: pago de los haberes de enero y febrero a los profesores de enseñanza secundaria de la provincia de Catamarca. (Página 6790.)
- 8.—Del señor diputado **Salado**: construcción del sistema cloacal en la ciudad de Juan Bautista Alberdi, Tucumán. (Pág. 6790.)
- 9.—Del señor diputado **De Cara**: instalación de una cabina pública telefónica permanente en el barrio Santa Rita, Boulogne, Buenos Aires. (Pág. 6790.)
- 10.—Del señor diputado **Salado**: tendido de una red de alta tensión desde Los Ralos hasta Las Cejas, Cruz Alta, Tucumán. (Pág. 6790.)
- 11.—Del señor diputado **Nougués**: provisión de un aparato de radioterapia profunda al leproso Sommer, de General Rodríguez, Buenos Aires, y reparación de ascensores en el Hospital Rivadavia, de la Capital Federal. (Pág. 6791.)
- 12.—Del señor diputado **Harvey**: disminución de las tasas de efectivo mínimo por parte del Banco Central y otorgamiento de redescuentos para los bancos oficiales, mixtos y privados de la zona Nordeste del país. (Pág. 6791.)
- 7.—Giro de asuntos entrados:
 - I.—Indicación del señor diputado **Pizarro**. (Página 6791.)
 - II.—Indicación del señor diputado **Gallo**. (Página 6792.)
 - III.—Nota de la Comisión de Comercio. (Página 6793.)
 - IV.—Nota de la Comisión de Transportes. (Página 6793.)
- 8.—Renuncia. (Pág. 6793.)
- 9.—Licencias. (Pág. 6794.)
- 10.—Homenajes:
 - I.—A la memoria de don **José Peco**. (Pág. 6804.)
 - II.—A la memoria de don **Diego Luis Molinari** (Pág. 6805.)

III.—A la memoria de don **Félix Frías**. (Página 6806.)

IV.—A la memoria de don **Juan Carlos García Tezanos Pinto**. (Pág. 6807.)

- 11.—Plan de labor propuesto por el señor diputado **Alfonsín** en nombre de la Comisión de Labor Parlamentaria. Se aprueba. (Pág. 6807.)
- 12.—Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado **Nougués**. Pasa a comisión. (Pág. 6809.)
- 13.—Contrato de trabajo. Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo en las enmiendas introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre contrato de trabajo (orden del día 404). Se pasa a cuarto intermedio. (Pág. 6810.)
- 14.—Apéndice. (Pág. 6857.)

—En Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo de 1966, a la hora 18:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente (Mor Roig). — Informo a la Honorable Cámara que en este momento hay 60 señores diputados en el recinto y 114 en la casa.

Sr. Garófalo. — Que se pase lista, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si hubiere asentimiento, se procederá en la forma indicada por el señor diputado.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se procederá a pasar lista.

—Mientras se pasa lista, a la hora 18 y 10:

2

APERTURA DE LA SESION

Sr. Presidente (Mor Roig). — Con la presencia de 101 señores diputados, queda abierta la sesión de tablas de la fecha.

3

CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Risso. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — He dicho para una aclaración.

Sr. Nogués. — Entiendo que está vulnerado el prestigio de la Honorable Cámara al haber mantenido silencio ante el pedido formulado por la Corte Suprema de enjuiciamiento político contra los jueces Alfredo Mangano, a cargo del Juzgado de Instrucción N° 1, en nota remitida el 11 de noviembre de 1963, y una ampliación remitida el 18 de diciembre del mismo año; la formación de juicio político contra el juez nacional en lo civil doctor José Manuel Campo, remitida el 18 de marzo de 1964; y la recientemente solicitada contra los jueces Carlos A. Sánchez Clariá y Alberto Zambrano, que tuvieron entrada en la Honorable Cámara el 23 de diciembre de 1965.

El silencio de la Honorable Cámara ante el pedido formulado por el más alto tribunal de justicia y el retardo de la Comisión de Juicio Político en producir dictamen son inexcusables ya que se trata del cumplimiento de un claro y terminante deber que la Constitución Nacional impone a esta Honorable Cámara en virtud de su artículo 45. Mientras los distinguidos abogados —ellos deben ser los más celosos defensores de la justicia— que integran la Comisión de Juicio Político acusan de negligencia e incumplimiento de su deber, dignos ciudadanos, como el doctor Roberto Olejaveska, son juzgados y sancionados por esos jueces, que carecen de toda autoridad moral para administrar justicia. Ese olvido del cumplimiento de nuestros deberes constitucionales no puede prolongarse por más tiempo. Por ello, formulo moción para que esta Honorable Cámara fije el día 23 del corriente para tratar, con despacho de comisión o sin él, los juicios políticos solicitados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Corresponde que la Honorable Cámara se pronuncie, por dos tercios de votos, sobre si acuerda trato preferente a la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Nogués. Se va a votar.

—Resulta negativa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

13

CONTRATO DE TRABAJO

(Orden del día número 404)

I

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación del Trabajo ha considerado, en mayoría, las enmiendas introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que le fuera enviado en revisión, sobre

contrato de trabajo; y, por los fundamentos que se dan en el informe que se acompaña y los que dará el miembro informante, aconseja aceptar las modificaciones introducidas a los siguientes artículos: 19; 29; 11; 18; 21; 22; 23; 27; 35; 39, inciso 2º, apartado B; 39, inciso 3º, apartado A; 39, inciso 6º; 46, y 55, y rechazar las restantes.

Sala de la comisión, 11 de febrero de 1966.

Angel Ignacio Castellanos. — Enrique de Vedia. — Juan A. Luco. — Carlos E. Ocampo. — Benito Vicente Romano.

En disidencia parcial:

Roberto M. Pena. — Oscar A. Herrera. — Ricardo Alvaro Monte. — Carlos Saúl Enrique Risso.

INFORME

Señor presidente:

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Honorable Cámara ha considerado las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley sobre contrato de trabajo, remitido en revisión; y, advirtiendo que la mayoría de ellas se refieren a cuestiones formales que, algunas veces, precisan la redacción sin alterar el fondo de las disposiciones, ha resuelto aceptar las mismas en forma parcial, considerando que así lo admite la interpretación del artículo 71 de la Constitución Nacional, conforme a lo reiteradamente resuelto por la jurisprudencia parlamentaria, todas aquellas que han sido consideradas como meramente formales y que se señalan en el dictamen, no haciendo lugar y rechazando, por lo tanto, otras que, de una u otra manera, vienen a alterar la idea general que presidió la primitiva sanción por este cuerpo. Se trata, entonces, de preservar la unidad que primó desde un principio considerando que, de esa forma, quedan a resguardo los principios y garantías que, desde el comienzo, se trató de tutelar.

Como se podrá advertir, el despacho cuenta con disidencias parciales, pero ello no es óbice para que se pueda destruir la estructura general del despacho, por cuanto las mismas no revisten la calidad de fundamentales y no hacen al fondo de la cuestión ni alteran la finalidad que se tuvo en cuenta.

Con estas breves consideraciones dejo fundado el dictamen de la comisión, no dudando que, sometido a la consideración de la Honorable Cámara, ésta le prestará su aprobación.

Angel Ignacio Castellanos.

CUADRO COMPARATIVO

SANCION DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL HONORABLE
SENADO

I. — Concepto y ámbito de aplicación

Artículo 1º — Habrá contrato de trabajo, cualquiera fuere su denominación, cuando una persona se obligue a prestar servicios, durante un período determinado o indeterminado, en forma permanente, transitoria o accidental, en relación de dependencia, a cambio de un salario.

Art. 2º — El solo hecho de la prestación de servicios por parte del trabajador, hace presumir el mutuo consentimiento y aplicables las disposiciones de esta ley.

Art. 3º — En caso de duda acerca de la duración de un contrato, se interpretará que éste es de duración indeterminada.

Art. 4º — Las disposiciones de la presente ley no serán aplicables:

- a) A los trabajadores que prestan servicios en organismos dependientes de cualquiera de los tres poderes del Estado nacional y a los empleados públicos de las provincias y los municipios, salvo aquellos cuya relación laboral se halle establecida en convenios colectivos de trabajo o se encuentren antes de la fecha de su sanción, amparados por la legislación laboral común;
- b) A los trabajadores comprendidos en el decreto ley 326/56.

Art. 5º — En los casos de actividades regidas por estatutos especiales, serán de aplicación las normas de la presente ley, siempre que:

- a) Se refieran a instituciones o beneficios no previstos en aquéllos; o
- b) Consagren beneficios superiores a los establecidos en los estatutos especiales.

II. — Derechos y obligaciones de los trabajadores y los empleadores

Art. 6º — El trabajador deberá prestar el servicio personalmente, en la forma convenida con el empleador.

Art. 7º — El empleador tendrá derecho, en cuanto no se oponga a disposiciones legales o convencionales o a los usos y costumbres, a establecer reglamentos referentes a la forma en que los trabajadores deberán prestar los servicios y normas sobre disciplina interna.

I. — Concepto y ámbito de aplicación

Artículo 1º — Habrá contrato de trabajo, cualquiera fuere su denominación, cuando una persona se obligue a prestar servicios en relación de dependencia durante un período determinado o indeterminado, en forma permanente, transitoria o accidental, a cambio de un salario.

Art. 2º — El solo hecho de la prestación de servicios por parte del trabajador hace presumir la existencia del contrato de trabajo y aplicables las disposiciones de esta ley.

Art. 3º — Igual.

Art. 4º — Las disposiciones de esta ley no serán aplicables:

- a) A los trabajadores que presten servicios en organismos dependientes de los poderes del Estado nacional, provinciales y municipales, salvo aquellos cuya relación laboral se rija por convenios colectivos de trabajo o se encuentren, antes de la vigencia de esta ley, amparados por la legislación laboral común;
- b) A los trabajadores comprendidos en los decretos leyes 28.169/44 (ley 12.921), 3.750/46 (ley 12.921), 326/56 y ley 13.020;
- c) A los trabajadores sujetos a contratos de ajuste marítimo.

Art. 5º — Igual.

II. — Derechos y obligaciones de los trabajadores y los empleadores

Art. 6º — Igual.

Art. 7º — El empleador tendrá derecho, en cuanto no se oponga a disposiciones legales, o convencionales, a establecer reglamentos referentes a la forma en que los trabajadores deberán prestar los servicios y normas sobre disciplina interna.

SANCION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL HONORABLE
SENADO

Art. 89 — El incumplimiento por el trabajador de los reglamentos y normas sobre disciplina, dará derecho al empleador a la aplicación de sanciones disciplinarias, consistentes en apercibimiento o suspensión. Las sanciones deberán graduarse prudentemente, teniendo en cuenta la gravedad de la falta.

Art. 90 — El trabajador podrá impugnar la aplicación de sanciones disciplinarias. En este caso, si el empleador no acreditare la existencia de causa suficiente, estará obligado a dejar sin efecto la medida y a abonar los salarios que aquél hubiera perdido.

Art. 10. — Toda modificación de las modalidades de prestación del servicio dispuesta por el empleador y no aceptada por el trabajador, dará derecho a éste a considerar rescindido el contrato y, si la medida lo perjudicara material o moralmente, al cobro de las indemnizaciones por despido injustificado.

Art. 11. — El empleador estará obligado a pagar puntual e íntegramente los salarios.

Entiéndese por salario toda remuneración de servicios en dinero, especies, alimentos, uso de habitación, comisiones, habilitaciones y viáticos, excepto, en cuanto a este rubro, la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes.

A igual tarea corresponderá igual salario, cualquiera sea la modalidad de la contratación.

Art. 12. — Los salarios, sin perjuicio de las prestaciones en especie, deberán ser abonados en moneda nacional de curso legal y se considerará nulo sin dar derecho a repetición todo pago hecho en violación de esta norma.

Art. 13. — Los salarios deberán abonarse en los siguientes plazos:

- a) Si la forma de remuneración fuere mensual, cada mes;
- b) Si la forma de remuneración fuere a jornal, por pieza o medida, cada quince días;
- c) En los trabajos eventuales, al terminarse el trabajo, o cada quince días si su duración fuere mayor.

Los pagos correspondientes a cada período deberán hacerse dentro del plazo de una semana desde su vencimiento. El solo transcurso de los plazos constituye en mora al empleador, sin necesidad de intimación.

Todo pago deberá hacerse en días hábiles, durante las horas y en el lugar de trabajo, quedando prohibido efectuarlo en lugares donde se vendan mercaderías o bebidas alcohólicas como negocio principal o accesorio, salvo a las personas en ello ocupadas.

Art. 8º — Igual.

Art. 9º — Igual.

Art. 10. — Igual.

Art. 11. — El empleador estará obligado a pagar puntual e íntegramente los salarios.

Entiéndese por salario toda remuneración de servicios en dinero, especies, alimentos, uso de habitación, comisiones, habilitaciones y viáticos, excepto, en cuanto a este rubro, la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes.

A igual tarea, todos los trabajadores, sin distinción de sexo, percibirán igual salario, cualquiera sea la modalidad de la contratación.

Art. 12. — Igual.

Art. 13. — Los salarios deberán abonarse en los siguientes plazos máximos:

- a) Cuando la remuneración es mensual, cada mes;
- b) Si la remuneración es a jornal, por pieza o medida, cada quince días o dieciséis si corresponde en el período mensual;
- c) En los trabajos o servicios eventuales, a la terminación de los mismos, o cada quince días si su duración fuere mayor.

Los pagos correspondientes a cada período deberán hacerse dentro de un plazo de siete días corridos desde su vencimiento. El solo transcurso de los plazos constituye en mora al empleador, sin necesidad de intimación.

Todo pago deberá hacerse en días hábiles, durante las horas y en el lugar de trabajo, quedando prohibido efectuarlo en lugares donde se vendan mercaderías o bebidas alcohólicas como negocio principal o accesorio, salvo a las personas en ellos ocupadas.

Marzo 16 de 1966

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL HONORABLE
SENADO

SANCION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

Art. 14. — Los créditos por salario no podrán ser objeto de compensación alguna, salvo con adelantos en dinero hechos por el empleador a cuenta de aquéllos, ni sufrirán otros descuentos, que los ordenados por ley o convenio colectivo, sin perjuicio de las normas sobre embargabilidad.

Art. 15. — El empleador deberá abonar, el 31 de diciembre de cada año, un sueldo anual complementario equivalente a la doceava parte del total de los salarios que el trabajador haya percibido durante el año, el que no podrá ser fraccionado en cuotas.

Art. 16. — Si el contrato de trabajo se extinguiere antes de finalizar el año, el empleador deberá abonar la parte proporcional del sueldo anual complementario devengada por el trabajador hasta la fecha de la extinción, juntamente con los salarios que se adeudaren y las indemnizaciones que pudieren corresponderle.

Art. 17. — Cada accidente o enfermedad inculpable que interrumpa la prestación del servicio, no afectará el derecho del trabajador de percibir sus salarios, durante un período de tres meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor de cinco años, y de seis meses, si fuere mayor. Las recidivas de enfermedades crónicas no serán consideradas como nuevas enfermedades.

El salario que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme al que percibía en el momento de la interrupción de los servicios, con más los aumentos que, durante el período de interrupción, fueren acordados a los de su misma categoría, por aplicación de una norma legal, convención colectiva o decisión del empleador. Si el salario estuviere integrado por remuneraciones variables se liquidará, en cuanto a esta parte, según el promedio de lo percibido en el último semestre de prestación de servicios. La prestaciones en especies que el trabajador dejare de percibir como consecuencia del accidente o enfermedad serán valorizadas adecuadamente.

Art. 18. — La falta de aviso de la enfermedad o accidente podrá ser considerada falta de disciplina, pero no enervará el derecho del trabajador al cobro de los salarios, si éste presentare certificado médico.

Art. 14. — Igual.

Art. 15. — El empleador deberá abonar, al 31 de diciembre de cada año, un sueldo anual complementario. El mismo será equivalente a la dozava parte del total de salarios que por cualquier índole el trabajador haya percibido durante el año, en el plazo establecido en el artículo 13, y no podrá ser fraccionado en cuotas.

Art. 16. — Si el contrato de trabajo se extinguiere antes de finalizar el año, el empleador deberá abonar la parte proporcional del sueldo anual complementario devengada por el trabajador hasta la fecha de la extinción, juntamente con los salarios que se le adeudaren y las indemnizaciones que pudieren corresponderle.

Art. 17. — Igual.

Art. 18. — La falta de aviso oportuno de la enfermedad o accidente, podrá ser considerada falta de disciplina, pero no enervará el derecho del trabajador al cobro de los salarios si éste presentare certificado médico.

El trabajador deberá someterse al contralor de la enfermedad o accidente por el médico que designe el empleador. En caso de discrepancia entre el médico del trabajador y el del empleador, éste deberá solicitar a la autoridad de aplicación la designación de un médico oficial, quien decidirá. Si el empleador no realizare este trámite, se estará al certificado presentado por el trabajador.

SANCION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL HONORABLE
SENADO

Art. 19. — El derecho del trabajador a la percepción de salarios en los casos de accidentes o enfermedad inculpables, no excluye el de ser indemnizado por el empleador por los daños o pérdidas patrimoniales que sufra con motivo de la prestación de servicio.

Art. 20. — Vencidos los plazos de interrupción del servicio por causa de accidente o enfermedad inculpable, si el trabajador no estuviere en condiciones de volver a sus tareas, el empleador deberá conservarle el empleo durante el plazo de un año contado desde el vencimiento de aquéllos.

Si el trabajador, vencido el plazo de conservación del empleo, no estuviere en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar, sin disminución de salarios. Si el empleador no pudiere dar cumplimiento a esta última obligación, por causa no imputable, deberá abonar al trabajador una indemnización por despido igual a la prevista en el artículo 39, inciso 3º, apartado B.

Art. 21. — Si el empleador despidiere al trabajador, estando pendientes los plazos durante los cuales éste tiene derecho al cobro de salarios por accidente o enfermedad inculpable o a la conservación del empleo, deberá abonarle, además de las indemnizaciones por despido injustificado, los salarios correspondientes a todo el término que faltare para el vencimiento del último de los plazos mencionados.

Art. 22. — Si el empleador despidiera sin justa causa a la empleada que acreditare mediante certificación médica estar embarazada, deberá abonarle además de las indemnizaciones por despido injustificado, una especial equivalente a tres meses de salarios calculado sobre la base del salario vital mínimo y móvil para el trabajador sin cargas de familia.

Art. 23. — También deberá el empleador conservar el empleo al trabajador cuando éste deba prestar servicio militar obligatorio, por llamado ordinario o movilización o convocatorias especiales, de acuerdo con las leyes que rigen la materia, desde la fecha de su convocación y hasta treinta días después de concluido el servicio.

Art. 24. — El trabajador gozará de un período mínimo y continuado de vacaciones anuales con goce de salarios, por los siguientes términos, conforme su antigüedad en el servicio:

Art. 19. — Igual.

Art. 20. — Vencidos los plazos de interrupción del servicio por causa de accidente o enfermedad inculpable, si el trabajador no estuviere en condiciones de volver a sus tareas, el empleador deberá conservarle el empleo durante el plazo de un año contado desde el vencimiento de aquéllos.

Si el trabajador, vencido el plazo de conservación del empleo, no pudiere realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar. El trabajador podrá negarse a aceptar la tarea ofrecida cuando el salario que corresponda a la misma sea inferior en más del 25 % del que percibía anteriormente, con las eventuales actualizaciones, o configurase una notoria disminución de categoría, y considerar extinguido el contrato con derecho a la indemnización prevista en el artículo 40, inciso 3º, apartado B.

Art. 21. — Si el empleador despidiere al trabajador estando pendientes los plazos durante los cuales éste tiene derecho al cobro de salarios por accidente o enfermedad inculpable o a la conservación del empleo, deberá abonarle, además de las indemnizaciones por despido injustificado, los salarios correspondientes a todo el tiempo que faltare para el vencimiento del último de los plazos mencionados.

Art. 22. — (Artículo nuevo.) Los beneficios previstos en los artículos 17 a 21 no son aplicables a los trabajadores comprendidos en la ley 12.713.

Art. 23. — Si el empleador insistiera en despedir sin justa causa a la trabajadora que acreditare mediante certificación médica estar embarazada, deberá abonarle además de las indemnizaciones por despido injustificado, una especial equivalente a tres meses de salarios, calculados sobre la base del salario vital mínimo y móvil para el trabajador sin cargas de familia.

Art. 24. — El empleador conservará el empleo al trabajador cuando éste deba prestar servicio militar obligatorio, por llamado ordinario o movilización o convocatorias especiales, de acuerdo con las leyes que rigen en la materia, desde la fecha de su convocación y hasta treinta días después de concluido el servicio.

Art. 25. — El trabajador gozará de un período mínimo y continuado de vacaciones anuales con percepción de salarios, por los plazos según su antigüedad en el servicio:

SANCION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

- a) De seis meses a cinco años de antigüedad: diez días hábiles;
- b) De cinco a diez años de antigüedad: quince días hábiles;
- c) De diez a quince años de antigüedad: veinte días hábiles;
- d) De quince a veinte años de antigüedad: veinticinco días hábiles;
- e) De más de veinte años de antigüedad: treinta días hábiles.

Art. 25. — El empleador deberá otorgar las vacaciones dentro del período comprendido entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. La autoridad de aplicación podrá, mediante resolución fundada, autorizar la concesión de vacaciones en períodos distintos, cuando así lo requieran las características especiales de una actividad determinada, o cuando, por disminución o falta de trabajo no estacionales, ello favorezca los intereses del trabajador.

La fecha de iniciación del período de vacaciones deberá ser notificada por escrito al trabajador, con anticipación no menor de quince días.

Art. 26. — El trabajador, para tener derecho a gozar del período completo de vacaciones que le corresponda según su antigüedad, deberá haber prestado servicios durante la mitad, como mínimo, de los días laborables comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año corriente, si se otorgase entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre, y del año inmediato anterior, si se otorgasen entre el 1º de enero y el 30 de abril.

El empleador no podrá otorgar vacaciones dentro del período comprendido en el artículo 25, cuando durante el transcurso del mismo el trabajador adquiriese derecho a gozar de un período completo de vacaciones o, le correspondiere, de acuerdo al artículo 24, un período mayor.

Si el trabajador no hubiera alcanzado a prestar servicios durante la mitad de los días laborables del año, computado en la forma prevista en el párrafo primero, gozará de vacaciones durante un período reducido en proporción al tiempo trabajado.

Art. 27. — Si, vencido el término durante el cual deben concederse las vacaciones, el empleador no las hubiere otorgado, el trabajador podrá hacer uso del período de vacaciones que le corresponda dando aviso al empleador con

- a) De seis meses hasta cinco años: quince días corridos;
- b) De cinco años hasta diez años: veinte días corridos;
- c) De diez años hasta quince años: veinticinco días corridos;
- d) De quince años hasta veinte años: treinta días corridos;
- e) De más de veinte años: treinta y cinco días corridos.

Art. 26. — El empleador deberá otorgar las vacaciones dentro del período comprendido entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente.

La autoridad de aplicación podrá, mediante resolución fundada, autorizar la concesión de vacaciones en períodos distintos:

- a) Cuando el trabajador y el empleador lo solicitaren de común acuerdo;
- b) Si las características especiales de una actividad determine su necesidad;
- c) Por disminución o falta de trabajo no estacionales, si ello favorece los intereses del trabajador.

La fecha de iniciación del período de vacaciones deberá ser notificada por escrito al trabajador, con anticipación no menor de 15 días.

Art. 27. — El trabajador, para tener derecho a gozar del período completo de vacaciones que le corresponda según su antigüedad deberá haber prestado servicio durante la mitad, como mínimo, de los días laborables comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año corriente, si el beneficio se otorgase entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre; y del año inmediato anterior, si se concediese entre el 1º de enero y el 30 de abril. A tal efecto, serán computados como días trabajados los períodos de interrupción de la prestación de servicios, originados por accidentes o enfermedades inculpables.

Art. 28. — Si vencido el plazo durante el cual deben concederse las vacaciones, el empleador no las hubiere otorgado, el trabajador podrá hacer uso de ellas, dando aviso al empleador con tres días de anticipación.

SANCION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL HONORABLE
SENADO

tres días de anticipación. Este derecho se extinguirá el 31 de diciembre del año respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29.

Art. 28. — Los salarios correspondientes al período de vacaciones deberán ser abonados al trabajador al comenzar el mismo. Para su liquidación, se aplicarán las normas establecidas para el supuesto de interrupción de servicios por accidentes o enfermedad inculpable.

Art. 29. — Sólo podrá acumularse a un período de vacaciones los días correspondientes a dos períodos inmediatamente anteriores no gozados, aun cuando hubieren sido compensados mediante el pago de salarios, o indemnizados de otra manera.

Art. 30. — No podrán otorgarse vacaciones durante las interrupciones de servicios debidas a accidentes o enfermedades inculpables, ni durante el plazo de preaviso.

Art. 31. — En caso de extinción del contrato, el trabajador tendrá derecho de percibir una indemnización cuyo monto será el equivalente del importe de los salarios correspondientes a los períodos de vacaciones no gozadas. Igualmente, percibirá el importe de los salarios correspondientes a las vacaciones del año en que se produzca la extinción.

Si no hubiere prestado servicios durante la mitad de los días laborables, percibirá los salarios correspondientes a las vacaciones, proporcionalmente al tiempo trabajado.

Art. 32. — Todo empleador que desarrolle su actividad, total o parcialmente, por intermedio de contratistas o subcontratistas, responderá por todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo, con relación a los trabajadores que fueren contratados por los contratistas y subcontratistas.

El trabajador deberá demandar conjuntamente a ambos. La responsabilidad del empleador principal se hará efectiva ante la sola falta de depósito judicial, por parte del contratista o subcontratista, de la suma a que hubiere sido condenado.

Este derecho se extinguirá el 31 de diciembre del año respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30.

Art. 29. — Igual.

Art. 30. — Sólo podrá acumularse a un período de vacaciones los correspondientes al período inmediato anterior no gozado, aunque hubieren sido compensados mediante el pago de salarios o indemnizados de otra manera.

Art. 31. — No podrán otorgarse vacaciones durante las interrupciones de servicios debidas a accidentes o enfermedades inculpables, ni durante el plazo de preaviso.

El accidente o enfermedad inculpable ocurrido durante el período de vacaciones, determina la suspensión de éstas, las que se completarán al producirse el alta de la causa que originó la interrupción.

Art. 32. — Igual.

Art. 33. — Todo empleador que desarrolle su actividad, total o parcialmente, por intermedio de contratista o subcontratista, responderá por todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que se originen durante el tiempo que estos últimos realicen trabajos para el empleador principal y con relación a los trabajadores utilizados por los contratistas o subcontratistas a ese fin. El trabajador deberá demandar conjuntamente al contratista o subcontratista y al empleador principal. La responsabilidad de éste se hará efectiva ante la sola falta de depósito judicial, por parte del contratista o subcontratista, de la suma a que hubiere sido condenado. Sin embargo, el empleador principal podrá exonerarse de su responsabilidad si probare que, el contratista o subcontratista, han cumplido regularmente durante un período continuado de tres años anteriores al despido, sus obligaciones impositivas y previsionales de empresario.

SANCION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL HONORABLE
SENADOIII. — *Suspensiones del contrato de trabajo*

Art. 33. — Todas las suspensiones dispuestas por el empleador, para ser consideradas válidas, deberán ser notificadas por escrito al trabajador, entregándole constancia, tener plazo fijo y justa causa.

Art. 34. — Se considera que tienen justa causa, las suspensiones que se deban a falta o disminución de trabajo no imputables al empleador, o a razones disciplinarias, o a fuerza mayor, debidamente comprobadas.

Art. 35. — Las suspensiones que sean debidas a falta o disminución de trabajo no imputables al empleador o a razones disciplinarias, no podrán exceder de treinta días en el término de un año, contado a partir de la primera suspensión.

En caso de fuerza mayor debidamente comprobada, se podrán extender a setenta y cinco días en el término de un año contado de la misma manera.

Cuando las suspensiones excedan de dichos plazos, el trabajador podrá considerarse despedido y tendrá derecho a percibir las indemnizaciones por despido injustificado.

Igual derecho tendrá, si la suspensión no le fuere notificada por escrito, o no expresare plazo o causa o ésta fuere falsa, previa intimación al empleador.

También tendrá derecho el trabajador al cobro de los salarios correspondientes al período de suspensión, cuando lo hubiere impugnado oportunamente, si el empleador no acreditare la existencia de la causa invocada.

Art. 36. — El trabajador sometido a proceso penal por hechos sancionados con pena privativa de la libertad, podrá ser suspendido durante el curso de aquél, pero si recayese absolución o sobreseimiento definitivo o provisorio, tendrá derecho a la percepción de los salarios correspondientes al período de suspensión.

Art. 37. — La huelga suspende el contrato de trabajo. El empleador, aun mediando declaración administrativa de ilegalidad, no podrá despedir a los trabajadores por adherir a una huelga, si ésta fue decretada por una asociación profesional reconocida.

IV. — *Transferencia del contrato de trabajo*

Art. 38. — En caso de cambio del titular del establecimiento o empresa, pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo.

III. — *Suspensiones del contrato de trabajo*

Art. 34. — Igual.

Art. 35. — Igual.

Art. 36. — Las suspensiones que sean debidas a razones disciplinarias no podrán exceder de treinta días en el plazo de un año, contado a partir de la primera suspensión.

Las suspensiones que sean debidas a falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, no podrán exceder de treinta días en el plazo de un año, contado a partir de la primera suspensión. En caso de fuerza mayor debidamente comprobada, se podrán extender a setenta y cinco días en el término de un año, contado de la misma manera. Cuando las suspensiones excedan de dichos plazos, el trabajador podrá considerarse despedido y tendrá derecho a percibir las indemnizaciones por despido injustificado. Igual derecho tendrá, si la suspensión no le fuere notificada por escrito o no expresare plazo o causa o ésta fuere falsa, previa intimación al empleador. También tendrá derecho el trabajador al cobro de los salarios correspondientes al período de suspensión, cuando lo hubiere impugnado oportunamente, si el empleador no acreditare la existencia de la causa invocada.

Art. 37. — El trabajador sometido a proceso penal por hechos presuntamente sancionados con pena privativa de la libertad, podrá ser suspendido durante el curso de aquél pero si recayese absolución o sobreseimiento definitivo o provisorio, tendrá derecho a la percepción de los salarios correspondientes al período de suspensión.

Art. 38. — La huelga suspende el contrato de trabajo. El empleador no podrá despedir a los trabajadores por adherir a una huelga decretada por la asociación profesional reconocida. Si el trabajador en el período de huelga cometiese actos que configuren una injuria hacia su empleador, podrá ser despedido sin derecho a indemnización.

IV. — *Transferencia del contrato de trabajo*

Art. 39. — Igual.

SANCION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL HONORABLE
SENADO

Si en razón del cambio de titular, se extingue el contrato de trabajo, tanto el primitivo titular como el nuevo quedarán solidariamente obligados por las consecuencias de la extinción y el trabajador podrá accionar por sus créditos contra cualquiera de ellos o ambos.

V. — *Extinción del contrato de trabajo*

Art. 39. — El contrato de trabajo se extingue:

- 1º Por voluntad de las partes contratantes: el distracto deberá formularse por escrito ante la autoridad judicial o administrativa de la jurisdicción.
- 2º Por voluntad unilateral del trabajador:

- A) Por renuncia: sólo se entenderá que es válida cuando se exteriorice mediante telegrama dirigido al empleador o se formule por escrito ante la autoridad judicial o administrativa de la jurisdicción;
- B) Por culpa del empleador: el incumplimiento por el empleador de las obligaciones que la ley, el convenio colectivo de trabajo, o el contrato individual ponen a su cargo, o las injurias contra la seguridad o los intereses morales o materiales del trabajador o su familia, en especial la rebaja injustificada de salarios, autorizan al trabajador a considerar rescindido el contrato por culpa del empleador. En este caso el trabajador tendrá derecho a la percepción de las indemnizaciones por omisión del preaviso y por despido que será igual a la establecida en el inciso 3º, apartado C, de este artículo.

3º Por voluntad unilateral del empleado:

- A) Por culpa del trabajador: el empleador podrá rescindir el contrato de trabajo, sin obligación de preavisar ni abonar indemnización por despido, en los siguientes casos:

- a) Si el trabajador causare daños a los intereses del em-

V. — *Extinción del contrato de trabajo*

Art. 40. — El contrato de trabajo se extingue:

1º Igual.

2º Por voluntad unilateral del trabajador:

- A) Por renuncia: sólo se entenderá que es válida cuando se exteriorice mediante telegrama colacionado dirigido al empleador o se formule por escrito ante la autoridad judicial o administrativa de la jurisdicción o con las formalidades establecidas en el artículo 3.639 del Código Civil;
- B) Por culpa del empleador: el incumplimiento por el empleador de las obligaciones que la ley, el convenio colectivo de trabajo, o el contrato individual ponen a su cargo, o las injurias contra la seguridad o los intereses morales o materiales del trabajador o su familia, en especial la rebaja injustificada de salarios, autorizan al trabajador a considerar rescindido el contrato por culpa del empleador. Estas injurias serán prudentemente apreciadas por los jueces, teniendo en cuenta el carácter de las relaciones entre las partes vinculadas por un contrato de trabajo. En este caso el trabajador tendrá derecho a la percepción de las indemnizaciones por omisión del preaviso y por despido que será igual a la establecida en el inciso 3º, apartado C) de este artículo.

3º Por voluntad unilateral del empleador:

A) Igual.

a) Igual;

SANCION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL HONORABLE
SENADO

- pleador por dolo o negligencias graves o reiteradas en el desempeño de sus tareas;
- b) Si el trabajador cometiere en perjuicio del empleador hechos calificados como delitos por sentencia judicial;
- c) Por incapacidad del trabajador para cumplir con sus obligaciones excepto cuando fuere sobreviniente a la iniciación de la prestación de servicios;
- d) Por las injurias del trabajador a la seguridad o a los intereses morales o materiales del empleador o su familia, que será prudentemente apreciada por los jueces teniendo en cuenta el carácter de las relaciones entre las partes vinculadas por un contrato de trabajo;
- e) Por el abandono voluntario de las tareas, previa intimación telegráfica o por instrumento público a reintegrarse al trabajo, la reiteración de inasistencias injustificadas o los actos de indisciplina graves o reiterados.
- B) Por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador: el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización por despido equivalente a la mitad de su remuneración mensual por cada año de servicios o fracción mayor de tres meses, tomando como base el promedio de los salarios percibidos durante el último año, o durante todo el tiempo de la prestación de servicios, si éste fuere inferior. Dicho promedio no podrá exceder de un importe equivalente a un mes del salario vital mínimo para el trabajador sin carga de familia, sin aplicación de coeficientes, vigente al tiempo de la extinción del contrato. El importe total de la indemnización, en ningún caso, será inferior a un mes normal del último salario del trabajador.
- El empleador deberá comenzar los despidos por el personal menos antiguo del establecimiento y sección. Los despidos en violación
- b) Igual;
- c) Igual;
- d) Igual;
- e) Por el abandono voluntario de las tareas, previa intimación telegráfica o por instrumento público a reintegrarse al trabajo, la reiteración de inasistencias injustificadas, o los actos de indisciplina graves o reiterados o la inhabilitación especial dictada por sentencia judicial.
- B) Por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador: el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización por despido equivalente a la mitad de su remuneración mensual por cada año de servicios o fracción mayor de tres meses, tomando como base el promedio de los salarios percibidos durante el último año, o durante todo el tiempo de la prestación de servicios, si ésta fuere inferior.
- Dicho promedio no podrá exceder de un importe equivalente a un mes del salario vital mínimo para el trabajador sin cargas de familia, sin aplicación de coeficientes, vigente al tiempo de la extinción del contrato. El importe total de la indemnización, en ningún caso, será inferior a un mes normal del último salario del trabajador.
- El empleador deberá comenzar los despidos por el personal menos antiguo del establecimiento y

SANCION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL HONORABLE
SENADO

del orden de antigüedad serán considerados sin causa justificada.

- C) Sin causa justificada: el empleador que despidiera sin expresión de causa o no probare la que hubiere invocado, deberá abonar al trabajador una indemnización por despido equivalente al importe de su remuneración mensual por cada año de servicios o fracción mayor de tres meses, tomando como base el promedio de los salarios percibidos durante el último año o durante todo el tiempo de la prestación de servicios, si éste fuere inferior. La indemnización no será superior a tres veces el importe mensual del salario vital mínimo para el trabajador sin cargas de familia, vigente al tiempo de la extinción, por cada año de servicios; cualquiera fuere la antigüedad, dicha indemnización nunca será inferior a dos meses normales del último salario. Dicho promedio no podrá exceder del equivalente a tres veces el importe mensual del salario vital mínimo para el trabajador sin cargas de familia, sin aplicación de coeficientes, vigente al tiempo de la extinción del contrato. El importe total de la indemnización, en ningún caso, será inferior a dos meses del último salario normal del trabajador. En los contratos a plazo fijo o por obra determinada el despido sin causa justificada antes del vencimiento del plazo o terminación de la obra, importará, además, el pago total de los salarios que el trabajador hubiera percibido en el caso de cumplirse el contrato.

- 4º Por vencimiento del plazo o terminación de la obra: el empleador deberá otorgar el preaviso por el plazo que corresponda y abonar al trabajador una indemnización igual a la establecida en el inciso 3º, apartado B de este artículo.
- 5º Por muerte del trabajador: el empleador deberá abonar a los derechohabientes del trabajador una indemnización igual a la establecida en el inciso 3º,

sección. Los despidos en violación del orden de antigüedad serán considerados sin causa justificada, salvo que el empleador demostrara la necesidad de mantener personal menos antiguo a los efectos de facilitar la reanudación del trabajo en el establecimiento.

- C) Sin causa justificada: el empleador que despidiera sin expresión de causa, o no probare la que hubiere invocado, deberá abonar al trabajador una indemnización por despido equivalente al importe de su remuneración mensual por cada año de servicios o fracción mayor de tres meses, tomando como base el promedio de los salarios percibidos durante el último año o durante todo el tiempo de la prestación de servicios, si éste fuere inferior.

Dicho promedio no podrá exceder del equivalente a tres veces el importe mensual del salario vital mínimo para el trabajador sin cargas de familia, sin aplicación de coeficientes, vigente al tiempo de la extinción del contrato. El importe total de la indemnización en ningún caso será inferior a dos meses del último salario normal del trabajador.

En los contratos a plazo fijo o por obra determinada, el despido sin causa justificada antes del vencimiento del plazo o terminación de la obra, importará, además, el derecho al pago de los daños y perjuicios que puedan corresponder al trabajador por la rescisión anticipada del contrato de trabajo.

4º Igual.

5º Igual.

SANCION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL HONORABLE
SENADO

apartado B, de este artículo, entendiéndose por derechohabientes a las personas enumeradas en el artículo 17 de la ley 14.370, en orden excluyente, a quienes bastará para obtener su cobro la simple acreditación del vínculo. Se deducirá del monto de esta indemnización lo que los derechohabientes perciban por seguros constituidos y tomados exclusivamente a su cargo por el empleador, salvo aquellos impuestos por norma legal o convención colectiva.

6º Por quiebra del empleador: el trabajador tendrá derecho al cobro de la indemnización por antigüedad establecida en el inciso 3º, apartado B, de este artículo. Si la quiebra fuere calificada judicialmente como culpable o fraudulenta, la indemnización será igual a la establecida en el inciso 3º, apartado C, de este artículo.

7º Por cesación o liquidación de la empresa:

- a) Por causa no imputable al empleador: el trabajador percibirá la indemnización por despido prevista en el inciso 3º, apartado B de este artículo;
- b) Por causa imputable al empleador: el trabajador percibirá la indemnización por despido prevista en el inciso 3º, apartado C de este artículo.

8º Por jubilación del trabajador: cuando el trabajador cumpliera los extremos exigidos por las leyes de previsión para obtener jubilación ordinaria, el empleador podrá intimarlo a iniciar los trámites respectivos y le extenderá las certificaciones de servicios y aportes que correspondan. A partir de este momento, el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el organismo previsional otorgue el beneficio por el plazo máximo de un año.

Otorgado el beneficio o cumplido el plazo de un año, se extingue el contrato.

Art. 40. — Cuando el trabajador se hubiere desempeñado en el servicio por un término menor de tres meses y fuere despedido sin causa justificada, percibirá como indemnización por despido, el equivalente al tercio de los salarios que haya percibido durante el tiempo de prestación de servicios.

6º Por quiebra o concurso civil del empleador: el trabajador tendrá derecho al cobro de la indemnización por despido establecida en el inciso 3º, apartado B de este artículo. Si éstas fueren calificadas judicialmente como culpables o fraudulentas, la indemnización será igual a la establecida en el inciso 3º, apartado C de este artículo.

7º Por cesación o liquidación de la empresa.

a) Igual;

b) Igual;

8º Igual.

Art. 41. — Cuando el trabajador se hubiere desempeñado en el servicio por un plazo menor de tres meses y fuere despedido sin causa justificada, percibirá, como indemnización por despido, el equivalente al tercio de los salarios que haya percibido durante el tiempo de prestación de servicio.

SANCION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL HONORABLE
SENADO

VI. — Preaviso

Art. 41. — En los casos previstos en los incisos 2º, apartado A; 3º, apartados B y C; 4º, 7º y 8º del artículo 39, la parte que decida dar por finalizado el contrato de trabajo deberá preavisar a la otra por los plazos establecidos a continuación:

El trabajador deberá otorgar el preaviso por el plazo de un mes.

El empleador deberá otorgar el preaviso por los siguientes plazos:

- a) Si el trabajador tuviere más de un mes y menos de tres años de antigüedad: un mes;
- b) Si el trabajador tuviere más de tres años de antigüedad: dos meses.

Art. 42. — La parte que omita el preaviso deberá abonar a la otra una indemnización substitutiva que, para el trabajador, será igual al monto de los salarios que hubiera percibido durante el plazo del preaviso, y para el empleador, el doble de los salarios que hubiera debido abonar durante ese plazo.

Art. 43. — Los plazos correrán a partir del primer día del mes siguiente al de la notificación del preaviso, que deberá hacerse por escrito.

Cuando se extinguiere el contrato sin preaviso, en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización substitutiva del preaviso deberá incrementarse con una suma igual a la que el trabajador hubiera debido percibir por salarios, entre la fecha de la extinción y el último día del mes.

Cuando el preaviso hubiere sido otorgado por el empleador, el trabajador podrá considerar extinguido el contrato en cualquier momento, sin perjuicio de su derecho a percibir la indemnización por despido.

Art. 44. — Las indemnizaciones por despido y por falta de preaviso, esta última con el incremento previsto en el artículo 43, tendrán carácter resarcitorio y no estarán sujetas a aportes jubilatorios ni al pago de impuestos ni a ninguna otra contribución.

Tampoco estarán sujetas a embargos y regirá para ellas lo dispuesto en el artículo 14.

Art. 45. — Durante el transcurso del plazo de preaviso subsisten las obligaciones emergentes del contrato de trabajo. El trabajador tendrá derecho, sin reducción de su salario, a gozar de una licencia de tres horas diarias dentro de la jornada legal de trabajo, pudiendo optar por las tres primeras o las tres últimas de la jornada.

Art. 46. — Es nulo el preaviso notificado al trabajador que estuviere cumpliendo una sus-

VI. — Preaviso

Art. 42. — En los casos previstos en los incisos 2º, apartado A; 3º, apartados B y C; 4º, 7º y 8º del artículo 40, la parte que decida dar por finalizado el contrato de trabajo deberá preavisar a la otra por los plazos establecidos a continuación:

El trabajador deberá otorgar el preaviso por el plazo de un mes.

El empleador deberá otorgar el preaviso por los siguientes plazos:

- a) Si el empleador tuviere más de un mes y menos de cinco años de antigüedad: un mes;
- b) Si el trabajador tuviere más de cinco años de antigüedad: dos meses.

Art. 43. — Igual.

Art. 44. — Los plazos correrán a partir del primer día del mes siguiente al de la notificación del preaviso, que deberá hacerse por escrito.

Cuando se extinguiere el contrato sin preaviso, en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización substitutiva del preaviso deberá incrementarse con una suma igual a la que el trabajador hubiera debido percibir por salarios, entre la fecha de la extinción y el último día del mes.

Cuando el preaviso hubiere sido otorgado por el empleador al trabajador podrá considerar extinguido el contrato en cualquier momento, sin perjuicio de su derecho a percibir la indemnización por despido.

Art. 45. — Las indemnizaciones por despido y por falta de preaviso, esta última con el incremento previsto en el artículo 44, tendrán carácter resarcitorio y no estarán sujetas a aportes jubilatorios ni al pago de impuestos ni a ninguna otra contribución. Tampoco estarán sujetas a embargos y regirá para ellas lo dispuesto en el artículo 14.

Art. 46. — Igual.

Art. 47. — Es nulo el preaviso notificado al trabajador que estuviere cumpliendo una sus-

SANCION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL HONORABLE
SENADO

pensión, gozando de sus vacaciones o ausente por accidente, enfermedad inculpable o huelga.

Art. 47. — Los accidentes y las enfermedades inculpables suspenden el período de preaviso dispuesto con anterioridad, el que continuará corriendo nuevamente cuando el trabajador estuviere en condiciones de reintegrarse a sus tareas.

VII. — Disposiciones generales

Art. 48. — A todos los efectos emergentes del contrato de trabajo, la antigüedad se computará desde la fecha en que el trabajador inició la prestación de servicios. En caso de contratos sucesivos entre las mismas partes se acumulará la antigüedad de cada uno de los distintos contratos a todos los efectos. En el supuesto de despido, se deducirá de la indemnización por despido lo que el trabajador hubiere percibido anteriormente por el mismo concepto.

Art. 49. — En los contratos a plazo fijo o por obra determinada, la omisión de otorgar el preaviso con la debida anticipación, opera su conversión en contrato de plazo indeterminado.

Art. 50. — En los trabajos que, por su naturaleza o modalidad, sólo se realizan en determinados períodos del año, el contrato no se extingue por la finalización de cada uno de los períodos o temporadas, pero quedan suspendidas las obligaciones recíprocas de las partes, hasta el comienzo del período o temporada siguiente. Al finalizar cada período o temporada, el empleador deberá otorgar al trabajador las vacaciones y abonarle el sueldo anual complementario correspondiente.

Art. 51. — Los empleadores están obligados a llevar un registro, numerado y rubricado por la autoridad de aplicación, en el que se hará constar los nombres de cada uno de los trabajadores que contraten, la fecha de ingreso y egreso, los salarios percibidos y todos los demás datos que exige la legislación laboral vigente y que permitan una correcta evaluación del cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

En caso de que el empleador no llevara el registro mencionado o lo hiciera en forma deficiente, estará a su cargo la prueba contraria, si el trabajador o sus derechohabientes prestan declaración sobre los hechos que debieron consignarse en él o fueron consignados en forma deficiente.

Art. 52. — En todos los casos de extinción del contrato de trabajo, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado en el que se hará constar las fechas de ingreso y egreso, la naturaleza de las tareas desempeñadas y su número de inscripción en la caja na-

pensión gozando de sus vacaciones o ausente por accidente, enfermedad inculpable, huelga, servicio militar o licencia por maternidad.

Art. 48. — Igual.

VII. — Disposiciones generales

Art. 49. — Igual.

Art. 50. — En los contratos a plazo fijo o por obra determinada la omisión de otorgar el preaviso en los plazos que corresponda dará derecho al trabajador a considerar el contrato como de plazo indeterminado.

Art. 51. — Igual.

Art. 52. — Igual.

Art. 53. — Igual.

SANCION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL HONORABLE
SENADO

cional de previsión social respectiva. También certificará haber efectuado el pago de los aportes jubilatorios y de todo otro del que sea agente de retención.

Art. 53. — Para hacer frente al pago de las indemnizaciones por despido, el empleador podrá constituir una reserva deducible a los efectos del impuesto a los réditos ingresando a ella a su opción los importes que resulten de cualquiera de los siguientes sistemas:

1. El importe resultante de aplicar, sobre los salarios abonados durante el ejercicio al personal en actividad al cierre del mismo, el por ciento que representen, en los tres últimos ejercicios, las indemnizaciones reales pagadas sobre los salarios totales abonados.
2. Un por ciento a fijar por el Poder Ejecutivo nacional a aplicar sobre los salarios totales abonados durante el ejercicio al personal en actividad al cierre del mismo.

Los importes así reservados deberán adicionarse a la reserva ya existente de acuerdo con las disposiciones legales vigentes a la fecha de la promulgación de la presente ley. Al fondo así formado se imputarán las indemnizaciones que efectivamente se paguen por despido.

Art. 54. — Los créditos del trabajador provenientes de obligaciones emergentes del contrato de trabajo gozarán de privilegio sobre los bienes del empleador y tendrán precedencia a todo otro crédito, con excepción de los siguientes:

- a) Los créditos hipotecarios;
- b) Los créditos prendarios;
- c) Los créditos alimentarios;
- d) Los gastos y honorarios necesarios para hacer efectiva la responsabilidad del deudor, en caso de quiebra o concurso civil.

Art. 55. — Todas las acciones emergentes del contrato de trabajo, inclusive las de indemnización por accidentes y enfermedades profesionales, prescribirán por el término de cinco años durante su vigencia. Extinguido el contrato de trabajo, las acciones prescribirán por el término de tres años, aun aquellas que prescribirían por un término distinto por aplicación del párrafo anterior.

Art. 56. — Las intimaciones telegráficas dirigidas al empleador por el trabajador o la organización sindical de su actividad, atribuyéndole incumplimiento de obligaciones a su cargo,

Art. 54. — Igual.

Art. 55. — Igual.

Art. 56. — Todas las acciones emergentes del contrato de trabajo, inclusive las de indemnización por accidentes y enfermedades profesionales, prescribirán en el plazo de cinco años durante su vigencia. Extinguido el contrato de trabajo, las acciones prescribirán en el plazo de tres años, aun aquellas que prescribirán por un término distinto por aplicación del párrafo anterior.

Art. 57. — Igual.

SANCION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL HONORABLE
SENADO

crearán, cuando no fueren contestadas en el plazo razonable fijado en ellas, que no será inferior a tres días hábiles, presunción de veracidad que sólo podrá ser destruida por prueba en contrario.

Art. 57. — En las actuaciones administrativas o judiciales que promuevan, los trabajadores gozarán del beneficio de litigar sin gastos, y en ningún caso les será exigida caución real o personal para el pago de costas u honorarios o para la responsabilidad por medidas cautelares, dando sólo caución juratoria de pagar si llegasen a mejorar de fortuna.

Art. 58. — Deróganse las leyes 11.729, 15.785, los artículos 45, 66 y 67 del decreto ley 33.302-45, y toda otra disposición que se oponga a la presente ley.

VIII. — Interpretación

Art. 59. — Las disposiciones de esta ley son de orden público y establecen el mínimo de garantías irrenunciables para el trabajador, y serán interpretadas teniendo en cuenta su función protectora y su finalidad social.

Art. 60. — En caso de duda respecto del alcance de una norma legal o convencional que regle obligaciones emergentes del contrato de trabajo, se estará a aquella solución que armonice con las fuentes del derecho del trabajo, en especial las leyes de la materia y los convenios colectivos de trabajo y sus principios generales.

En todos los casos deberá estarse a la interpretación que asegure mayores beneficios a los trabajadores.

Art. 61. — Las cláusulas de las convenciones individuales o colectivas que desconozcan o reduzcan derechos garantizados por ley a los trabajadores, se reputarán nulas de pleno derecho.

Son igualmente nulos los actos simulados o en fraude a la ley que tengan ese objeto.

Cuando una convención contenga simultáneamente cláusulas que signifiquen reducciones y ampliaciones de derechos garantizados por ley a los trabajadores, la nulidad alcanzará sólo a las primeras, y las segundas conservarán su validez.

IX. — Disposición transitoria

Art. 62. — Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación a los casos de despido injustificado producidos a partir del 15 de septiembre de 1965.

Art. 63. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 58. — En las actuaciones administrativas o judiciales que promuevan, los trabajadores gozarán del beneficio de litigar sin gastos; y en ningún caso les será exigida caución real o personal para el pago de costas u honorarios o para la responsabilidad por medidas cautelares, dando sólo caución juratoria de pagar si llegasen a mejorar de fortuna.

Art. 59. — Igual.

VIII. — Interpretación

Art. 60. — Igual.

Art. 61. — En caso de duda respecto del alcance de una norma legal o convencional que regle obligaciones emergentes del contrato de trabajo, se estará a aquella solución que armonice con las fuentes del derecho del trabajo, en especial las leyes de la materia y los convenios colectivos de trabajo y sus principios generales.

En tales casos deberá estarse a la interpretación que asegure mayores beneficios a los trabajadores.

Art. 62. — Igual.

IX. — Disposición transitoria

Art. 63. — Igual.

Art. 64. — Igual.

II

Dictamen de minoría

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Legislación del Trabajo ha considerado en minoría las enmiendas introducidas por el Honorable Senado al proyecto de reforma a la ley 11.729; y, por las razones expresadas en el informe adjunto y las que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Acéptanse las enmiendas introducidas por el Honorable Senado que se especifican a continuación:

- a) Al artículo 1º;
- b) Al artículo 2º;
- c) Al artículo 4º;
- d) Al artículo 7º;
- e) Al artículo 11;
- f) Al artículo 13;
- g) Al artículo 18;
- h) Al artículo 20;
- i) La inclusión de un nuevo artículo que en la sanción del Honorable Senado lleva el número 22;
- j) Al artículo 22, que pasa a ser el número 23;
- k) Al artículo 23, que pasa a ser el número 24;
- l) Al artículo 24, que pasa a ser el número 25;
- ll) Al artículo 25, que pasa a ser el número 26;
- m) Al artículo 32, que pasa a ser el número 33;
- n) Al artículo 35, que pasa a ser el número 36;
- ñ) Al artículo 37, que pasa a ser el número 38;
- o) Al artículo 39, que pasa a ser el número 40, inciso 2º), apartado A;
- p) Al artículo 39, que pasa a ser el número 40, inciso 2º), apartado B;
- q) Al artículo 39, que pasa a ser el número 40, inciso 3º), apartado A, punto e;
- r) Al artículo 39, que pasa a ser el número 40, inciso 3º), apartado B, tercer párrafo;
- s) Al artículo 39, que pasa a ser el número 40, inciso 6º);
- t) Al artículo 41, que pasa a ser el número 42;
- u) Al artículo 44, que pasa a ser el número 45;
- v) Al artículo 46, que pasa a ser el número 47;
- w) Al artículo 60, que pasa a ser el número 61.

Art. 2º — Recházanse las demás enmiendas introducidas por el Honorable Senado.

Art. 3º — Comuníquese al Honorable Senado. Sala de la comisión, 11 de febrero de 1966.

Emilio J. Hardoy.

INFORME

La Honorable Cámara de Diputados, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Nacional, sólo puede pronunciarse aceptando o rechazando las enmiendas introducidas por el Honorable Senado. A continuación me referiré a cada una de dichas enmiendas, mencionando las disposiciones del proyecto que fueron modificadas por el Honorable Senado.

Enmiendas que se aceptan

Artículos 1º y 2º: Las enmiendas son de forma y mejoran su redacción.

Artículo 4º: La enmienda del Honorable Senado excluye del ámbito de la ley 11.729 a los trabajadores rurales, que desarrollan tareas muy diferentes a las que cumplen los empleados de comercio o los obreros de la industria. También las respectivas condiciones económicas son muy distintas. Todo ello requiere para los trabajadores rurales un tratamiento adecuado que les conceda la protección a que tienen derecho en las particulares condiciones en que trabajan.

Artículo 7º: Estimo conveniente la supresión de las palabras «usos o costumbres» que contenía la sanción de la Honorable Cámara de Diputados. Se elimina así una causa de incertidumbre y dificultades en las relaciones entre patronos y trabajadores. Estos no podrán ser perjudicados si aquéllos cumplen las disposiciones legales y convencionales que rigen la actividad laboral.

Artículo 11: Estimo conveniente la redacción dada por el Honorable Senado a este artículo, pues lo aclara eliminando cualquier duda que pudiera suscitar su interpretación.

Artículo 13: Considero más precisa y completa la redacción dada por el Honorable Senado a este artículo.

Artículo 18: La inclusión de este artículo en la sanción de la Honorable Cámara de Diputados dio origen a críticas, porque según la interpretación que cundió se estimaba que podía dar lugar a abusos por parte de los trabajadores. Sin perjudicarlos en lo más mínimo, el agregado del Honorable Senado confiere garantías a los patronos.

Artículo 20: La enmienda del Honorable Senado reglamenta los derechos y obligaciones de las partes con mayor precisión.

Artículo 22 (nuevo): En la discusión en la Honorable Cámara de Diputados hubo acuerdo respecto de que los trabajadores de la ley 12.713 requerían un régimen especial. Sin embargo, el proyecto se aprobó igualmente. El nuevo ar-

título del Honorable Senado tiende a que no se apliquen disposiciones que son incompatibles con las condiciones en que desarrollan su actividad.

Artículo 22, que pasa a ser el número 23: La enmienda del Honorable Senado se propone evitar que se aplique una sanción al patrono que podía ignorar el estado de la trabajadora.

Artículo 23, que pasa a ser el número 24: Considero mejor la redacción del Honorable Senado, puesto que la palabra «también», empleada en la sanción de la Honorable Cámara, no aparece claramente referida al correspondiente antecedente.

Artículo 24, que pasa a ser el número 25: Estimo más simple y práctico el criterio del Honorable Senado, que es el seguido hasta ahora.

Artículo 25, que pasa a ser el número 26: Considero más práctica y justa la autorización que concede la sanción del Honorable Senado, para que las partes puedan convenir de común acuerdo lo que les convenga respecto de las vacaciones. El temor de las presiones que pueda ejercer el patrono sobre el empleado no corresponde a la situación actual, por el control que las autoridades y los sindicatos ejercen sobre las empresas y, sobre todo, por el progreso de las costumbres y la conciencia que de sus derechos y obligaciones han adquirido trabajadores y patronos.

Artículo 32, que pasa a ser el número 33: La disposición del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados ha sido criticada, pues agrega graves y costosas responsabilidades a los patronos. La limitación que se establece en la enmienda del Honorable Senado es conveniente, pues los libera de consecuencias de actos que no cometieron, sin perjuicio de garantizar los derechos de los trabajadores.

Artículo 35, que pasa a ser el número 36: La enmienda del Honorable Senado es de mera forma y mejora la redacción.

Artículo 37, que pasa a ser el número 38: La redacción de la Honorable Cámara de Diputados podía prestarse a la interpretación de que la legalidad de una huelga no podía ser apreciada ni por la autoridad administrativa ni por los jueces, lo cual hubiera significado tanto como reconocer la existencia de derechos absolutos, que vulneran las garantías otorgadas por la Constitución Nacional y los superiores intereses de la sociedad. Esto también hubiera contrariado la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y repetida por todos los tribunales del país (agosto 9/1961, C. S. N. «Vázquez, Alejandro J. c/Banco Hipotecario»; octubre 4/1961, C. S. N. «Duarte, Juan P. y otros c/Banco Río de la Plata»; diciembre 19/1961, C. S. N. «Beneduce, Carmen J. y otras c/Casa Augusto»; octubre 15/1962, C. S. N. «Díaz, Miguel A. y otro c/Angel Risso y Cía.»; diciembre 7/1962, «Gatti, Alvaro J. C. c/Destilerías, Bodegas y Viñedos El Globo Ltda. S. A.»). La redacción del Honorable Senado, en cuanto es más amplia y se ajusta mejor a la interpretación que

del derecho de huelga y sus limitaciones ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es más adecuada y evitará dificultades.

Artículo 39, que pasa a ser el número 40, inciso 2º, apartado A): Por las mismas razones que exprese al referirme a la enmienda al artículo 25, que pasa a ser el número 26, considero que debe aceptarse la modificación del Honorable Senado.

Artículo 39, que pasa a ser el número 40, inciso 3º, apartado A), punto e): La enmienda del Honorable Senado prevé un caso que no había sido tenido en cuenta y que hay que legislar.

Artículo 39, que pasa a ser el número 40, inciso 3º, apartado B), tercer párrafo: La enmienda del Honorable Senado completa y perfecciona la redacción de la Honorable Cámara.

Artículo 39, que pasa a ser el número 40, inciso 6º: Prevé el caso del concurso civil que no había sido considerado.

Artículo 41, que pasa a ser el número 42: Aparte de una corrección de forma para adecuar el artículo a la nueva numeración, la modificación de los plazos de la enmienda del Honorable Senado es razonable y equitativa.

Artículo 43, que pasa a ser el número 44: La enmienda es de forma para adecuar el artículo a la nueva numeración.

Artículo 46, que pasa a ser el número 47: La enmienda del Honorable Senado es razonable y prevé casos que deben legislarse.

Artículo 60, que pasa a ser el número 61: Considero más ajustada la sanción del Honorable Senado, pues la regla de interpretación que contiene debe ser aplicada a los casos de duda solamente.

Enmiendas que se rechazan

Artículo 15: Es más precisa y correcta la redacción del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados.

Artículo 21: No se justifica la enmienda, que es de forma.

Artículo 26, que pasa a ser el número 27: Estimo que no se justifica la reforma introducida en la enmienda del Honorable Senado.

Artículo 27, que pasa a ser el número 28: No se justifica la enmienda, que es de forma.

Artículo 39, que pasa a ser el número 40, inciso 3º, apartado C), tercer párrafo: La redacción de la Honorable Cámara de Diputados fija con más precisión los derechos del trabajador y la responsabilidad eventual del patrono.

Artículo 43, que pasa a ser el número 44: Es más ajustada la redacción de la Honorable Cámara de Diputados.

Artículo 49, que pasa a ser el número 50: Es mejor la redacción de la Honorable Cámara de Diputados.

Con la redacción del Honorable Senado podría interpretarse que el trabajador debe fijar su posición ante el patrono optando por la prólongación del contrato por tiempo indeterminado.

Emilio J. Hardoy.

ANTECEDENTE

Sancción del Honorable Senado

Buenos Aires, 28 de enero de 1966.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión sobre contratos de trabajo y ha tenido a bien aprobarlo en la siguiente forma:

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

I.—Concepto y ámbito de aplicación

Artículo 1º.—Habrá contrato de trabajo, cualquiera fuere su denominación, cuando una persona se obligue a prestar servicios en relación de dependencia, durante un período determinado o indeterminado, en forma permanente, transitoria o accidental, a cambio de un salario.

Art. 2º.—El solo hecho de la prestación de servicios por parte del trabajador hace presumir la existencia del contrato de trabajo y aplicables las disposiciones de esta ley.

Art. 3º.—En caso de duda acerca de la duración de un contrato, se interpretará que éste es de duración indeterminada.

Art. 4º.—Las disposiciones de esta ley no serán aplicables:

- A los trabajadores que presten servicios en organismos dependientes de los poderes del Estado nacional, provinciales y municipales, salvo aquellos cuya relación laboral se rija por convenios colectivos de trabajo, o se encuentren, antes de la vigencia de esta ley, amparados por la legislación laboral común;
- A los trabajadores comprendidos en los decretos leyes: 28.169/44 (ley 12.921); 3.750/46 (ley 12.921); 326/56, y ley 13.020;
- A los trabajadores sujetos a contratos de ajuste marítimo.

Art. 5º.—En los casos de actividades regidas por estatutos especiales, serán de aplicación las normas de la presente ley, siempre que:

- Se refieran a instituciones o beneficios no previstos en aquéllos; o
- Consagren beneficios superiores a los establecidos en los estatutos especiales.

II.—Derechos y obligaciones de los trabajadores y los empleadores

Art. 6º.—El trabajador deberá prestar el servicio personalmente, en la forma convenida con el empleador.

Art. 7º.—El empleador tendrá derecho, en cuanto no se oponga a disposiciones legales o convencio-

nales, a establecer reglamentos referentes a la forma en que los trabajadores deberán prestar los servicios y normas sobre disciplina interna.

Art. 8º.—El incumplimiento por el trabajador de los reglamentos y normas sobre disciplina, dará derecho al empleador a la aplicación de sanciones disciplinarias, consistentes en apercibimiento o suspensión. Las sanciones deberán graduarse prudentemente, teniendo en cuenta la gravedad de la falta.

Art. 9º.—El trabajador podrá impugnar la aplicación de sanciones disciplinarias. En este caso, si el empleador no acreditare la existencia de causa suficiente, estará obligado a dejar sin efecto la medida y abonar los salarios que aquél hubiera perdido.

Art. 10.—Toda modificación de las modalidades de prestación del servicio dispuesta por el empleador y no aceptada por el trabajador, dará derecho a éste a considerar rescindido el contrato y, si la medida lo perjudicara material o moralmente, al cobro de las indemnizaciones por despido injustificado.

Art. 11.—El empleador estará obligado a pagar puntual e íntegramente los salarios.

Entiéndese por salario toda remuneración de servicios en dinero, especies, alimentos, uso de habitación, comisiones, habilitaciones y viáticos, excepto en cuanto a este rubro, la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes.

A igual tarea, todos los trabajadores sin distinción de sexo percibirán igual salario, cualquiera sea la modalidad de la contratación.

Art. 12.—Los salarios, sin perjuicio de las prestaciones en especie, deberán ser abonados en moneda nacional de curso legal y se considerará nulo sin dar derecho a repetición todo pago hecho en violación de esta norma.

Art. 13.—Los salarios deberán abonarse en los siguientes plazos máximos:

- Cuando la remuneración es mensual, cada mes;
- Si la remuneración es a jornal, por pieza o medida, cada quince días o dieciséis si corresponde en el período mensual;
- En los trabajos o servicios eventuales, a la terminación de los mismos, o cada quince días si su duración fuere mayor.

Los pagos correspondientes a cada período deberán hacerse dentro de un plazo de siete días corridos desde su vencimiento. El solo transcurso de los plazos constituye en mora al empleador, sin necesidad de intimación.

Todo pago deberá hacerse en días hábiles durante las horas y el lugar de trabajo, quedando prohibido efectuarlo en lugares donde se venden mercaderías o bebidas alcohólicas como negocio principal o accesorio, salvo a las personas en ellos ocupadas.

Art. 14.—Los créditos por salarios no podrán ser objeto de compensación alguna, salvo con adelantos en dinero hechos por el empleador a cuenta de aquéllos, ni sufrirán otros descuentos que los ordenados por ley o convenio colectivo, sin perjuicio de las normas sobre embargabilidad.

Art. 15.—El empleador deberá abonar al 31 de diciembre de cada año, un sueldo anual complementario. El mismo será equivalente a la dozava parte del total de salarios que por cualquier índole el trabajador haya percibido durante el año, en el plazo establecido en el artículo 13, y no podrá ser fraccionado en cuotas.

Art. 16.—Si el contrato de trabajo se extinguiese antes de finalizar el año, el empleador deberá abonar la parte proporcional del sueldo anual complementario devengada por el trabajador hasta la fecha de la extinción, juntamente con los salarios que se le adeudaren y las indemnizaciones que pudieren corresponderle.

Art. 17.—Cada accidente o enfermedad inculpable que interrumpa la prestación del servicio, no afectará el derecho del trabajador de percibir sus salarios, durante un período de tres meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor de cinco años y de seis meses, si fuere mayor. Las recidivas de enfermedades crónicas no serán consideradas como nuevas enfermedades.

El salario que en estos casos corresponde abonar al trabajador se liquidará conforme al que percibía en el momento de la interrupción de los servicios, con más los aumentos que, durante el período de interrupción, fueren acordados a los de su misma categoría, por aplicación de una norma legal, convención colectiva o decisión del empleador. Si el salario estuviere integrado por remuneraciones variables se liquidará, en cuanto a esta parte, según el promedio de lo percibido en el último semestre de prestación de servicios.

Las prestaciones en especie que el trabajador dejare de percibir como consecuencia del accidente o enfermedad serán valorizadas adecuadamente.

Art. 18.—La falta de aviso oportuno de la enfermedad o accidente, podrá ser considerada falta de disciplina, pero no enervará el derecho del trabajador al cobro de los salarios si éste presentare certificado médico.

El trabajador deberá someterse al contralor de la enfermedad o accidente por el médico que designe el empleador. En caso de discrepancia entre el médico del trabajador y el del empleador, éste deberá solicitar a la autoridad de aplicación la designación de un médico oficial, quien decidirá. Si el empleador no realizare este trámite, se estará al certificado presentado por el trabajador.

Art. 19.—El derecho del trabajador a la percepción de salarios en los casos de accidentes o enfermedades inculpables, no excluye el de ser indemnizado por el empleador por los daños o pérdidas patrimoniales que sufra con motivo de la prestación de servicios.

Art. 20.—Vencidos los plazos de interrupción del servicio por causa de accidente o enfermedad inculpable, si el trabajador no estuviere en condiciones de volver a sus tareas, el empleador deberá conservarle el empleo durante el plazo de un año contado desde el vencimiento de aquéllos.

Si el trabajador, vencido el plazo de conservación del empleo no pudiese realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar. El trabajador podrá negarse a aceptar la tarea ofrecida cuando el salario que corresponda a la misma sea inferior en más del 25 % del que percibía anteriormente, con las eventuales actualizaciones o configurase una notoria disminución de categoría, y considerar extinguido el contrato con derecho a la indemnización prevista en el artículo 40, inciso 3º, apartado B.

Art. 21.—Si el empleador despidiere al trabajador, estando pendientes los plazos durante los cuales éste tiene derecho al cobro de salarios por accidente o enfermedad inculpable o a la conservación del em-

pleo, deberá abonarle, además de las indemnizaciones por despido injustificado, los salarios correspondientes a todo el tiempo que faltare para el vencimiento del último de los plazos mencionados.

Art. 22.—Los beneficios previstos en los artículos 17 a 21 no son aplicables a los trabajadores comprendidos en la ley 12.713.

Art. 23.—Si el empleador insistiera en despedir sin justa causa a la trabajadora que acreditare mediante certificación médica estar embarazada, deberá abonarle además de las indemnizaciones por despido injustificado, una especial equivalente a tres meses de salarios, calculados sobre la base del salario vital mínimo y móvil para el trabajador sin cargas de familia.

Art. 24.—El empleador conservará el empleo al trabajador cuando éste deba prestar servicio militar obligatorio, por llamado ordinario o movilización o convocatorias especiales, de acuerdo con las leyes que rigen en la materia, desde la fecha de su convocación y hasta treinta días después de concluido el servicio.

Art. 25.—El trabajador gozará de un período mínimo y continuado de vacaciones anuales con percepción de salarios, por los plazos según su antigüedad en el servicio.

- a) De seis meses hasta cinco años, quince días corridos;
- b) De cinco años hasta diez años, veinte días corridos;
- c) De diez años hasta quince años, veinticinco días corridos;
- d) De quince años hasta veinte años, treinta días corridos;
- e) De más de veinte años, treinta y cinco días corridos.

Art. 26.—El empleador deberá otorgar las vacaciones dentro del período comprendido entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente.

La autoridad de aplicación podrá, mediante resolución fundada, autorizar la concesión de vacaciones en períodos distintos:

- a) Cuando el trabajador y el empleador lo solicitaren de común acuerdo;
- b) Si las características especiales de una actividad determine su necesidad;
- c) Por disminución o falta de trabajo no estacionales, si ello favorece los intereses del trabajador.

La fecha de iniciación del período de vacaciones deberá ser notificada por escrito al trabajador, con anticipación no menor de 15 días.

Art. 27.—El trabajador, para tener derecho a gozar del período completo de vacaciones que le corresponda según su antigüedad, deberá haber prestado servicios durante la mitad, como mínimo, de los días laborables comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año corriente, si el beneficio se otorgase entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre; y el año inmediato anterior, si se concediese entre el 1º de enero y el 30 de abril. A tal efecto, serán computados como días trabajados los períodos de interrupción de la prestación de servicios, originados por accidentes o enfermedades inculpables.

Art. 28.—Si, vencido el plazo durante el cual deben concederse las vacaciones, el empleador no las hubiere otorgado, el trabajador podrá hacer uso de ellas, dando aviso al empleador con tres días de anticipación.

Este derecho se extinguirá el 31 de diciembre del año respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30.

Art. 29.—Los salarios correspondientes al período de vacaciones deberán ser abonados al trabajador al comenzar el mismo.

Para su liquidación, se aplicarán las normas establecidas para el supuesto de interrupción de servicios por accidente o enfermedad inculpable.

Art. 30.—Sólo podrá acumularse a un período de vacaciones los días correspondientes al período inmediato anterior no gozado, aunque hubieren sido compensados mediante el pago de salarios, o indemnizados de otra manera.

Art. 31.—No podrán otorgarse vacaciones durante las interrupciones de servicios debidas a accidentes o enfermedades inculpables, ni durante el plazo de preaviso.

El accidente o enfermedad inculpable ocurrido durante el período de vacaciones, determina la suspensión de éstas, las que se completarán al producirse el alta de la causa que originó la interrupción.

Art. 32.—En caso de extinción del contrato, el trabajador tendrá derecho de percibir una indemnización cuyo monto será el equivalente del importe de los salarios correspondientes a los períodos de vacaciones no gozadas. Igualmente, percibirá el importe de los salarios correspondientes a las vacaciones del año en que se produzca la extinción. Si no hubiere prestado servicios durante la mitad de los días laborales percibirá los salarios correspondientes a las vacaciones, proporcionalmente al tiempo trabajado.

Art. 33.—Todo empleador que desarrolle su actividad, total o parcialmente, por intermedio de contratistas o subcontratistas, responderá por todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que se originen durante el tiempo que estos últimos realicen trabajos para el empleador principal y con relación a los trabajadores utilizados por los contratistas o subcontratistas a ese fin. El trabajador deberá demandar conjuntamente, al contratista o subcontratista y al empleador principal. La responsabilidad de éste se hará efectiva ante la sola falta de depósito judicial, por parte del contratista o subcontratista, de la suma a que hubiere sido condenado. Sin embargo, el empleador principal podrá exonerarse de su responsabilidad si probare que el contratista, de la suma a que hubiere sido condenado durante un período continuado de tres años anteriores al despido, sus obligaciones impositivas y previsionales de empresario.

III.—Suspensiones del contrato de trabajo

Art. 34.—Todas las suspensiones dispuestas por el empleador, para ser consideradas válidas, deberán ser notificadas por escrito al trabajador, entregándole constancia, tener plazo fijo y justa causa.

Art. 35.—Se considera que tienen justa causa las suspensiones que se deban a falta o disminución de trabajo no imputables al empleador, o a razones disciplinarias, o a fuerza mayor, debidamente comprobadas.

Art. 36.—Las suspensiones que sean debidas a razones disciplinarias no podrán exceder de treinta días en el plazo de un año, contado a partir de la primera suspensión.

Las suspensiones que sean debidas a falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, no podrán exceder de treinta días en el plazo de un año, contado a partir de la primera suspensión.

En caso de fuerza mayor debidamente comprobada, se podrán extender a setenta y cinco días en el término de un año, contado de la misma manera. Cuando las suspensiones excedan de dichos plazos, el trabajador podrá considerarse despedido y tendrá derecho a percibir las indemnizaciones por despido injustificado. Igual derecho tendrá, si la suspensión no le fuere notificada por escrito o no expresare plazo o causa o ésta fuere falsa, previa intimación al empleador. También tendrá derecho el trabajador al cobro de los salarios correspondientes al período de suspensión, cuando lo hubiere impugnado oportunamente, si el empleador no acreditare la existencia de la causa invocada.

Art. 37.—El trabajador sometido a proceso penal por hechos presuntamente sancionados con pena privativa de la libertad, podrá ser suspendido durante el curso de aquél, pero si recayese absolución o sobreseimiento definitivo o provisorio, tendrá derecho a la percepción de los salarios correspondientes al período de suspensión.

Art. 38.—La huelga suspende el contrato de trabajo. El empleador no podrá despedir a los trabajadores por adherir a una huelga decretada por la asociación profesional reconocida. Si el trabajador, en el período de huelga, cometiere actos que configuren una injuria hacia su empleador, podrá ser despedido sin derecho a indemnización.

IV.—Transferencia del contrato de trabajo

Art. 39.—En caso de cambio del titular del establecimiento o empresa pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo.

Si en razón del cambio de titular se extinguiere el contrato de trabajo, tanto el primitivo titular como el nuevo quedarán solidariamente obligados por las consecuencias de la extinción y el trabajador podrá accionar por sus créditos contra cualquiera de ellos o ambos.

V.—Extinción del contrato de trabajo

Art. 40.—El contrato de trabajo se extingue:

- 1º Por voluntad de las partes contratantes: el distracto deberá formularse por escrito ante la autoridad judicial o administrativa de la jurisdicción.
- 2º Por voluntad unilateral del trabajador:

A) Por renuncia: sólo se entenderá que es válida cuando se exteriorice mediante telegrama colacionado dirigido al empleador o se formule por escrito ante la autoridad judicial o administrativa de la jurisdicción o con las formalidades establecidas en el artículo 3.639 del Código Civil;

- B) Por culpa del empleador: el incumplimiento por el empleador de las obligaciones que la ley, el convenio colectivo de trabajo o el contrato individual ponen a su cargo, o las injurias contra la seguridad o los intereses morales o materiales del trabajador o su familia, en especial la rebaja injustificada de salarios, autorizan al trabajador a considerar rescindido el contrato por culpa del empleador. Estas injurias serán prudentemente apreciadas por los jueces, teniendo en cuenta el carácter de las relaciones entre las partes vinculadas por un contrato de trabajo. En este caso, el trabajador tendrá derecho a la percepción de las indemnizaciones por omisión del preaviso y por despido que será igual a la establecida en el inciso 3º, apartado C), de este artículo.

3º Por voluntad unilateral del empleador:

- A) Por culpa del trabajador: el empleador podrá rescindir el contrato de trabajo, sin obligación de preaviso ni abonar indemnización por despido, en los siguientes casos:
- a) Si el trabajador causare daños a los intereses del empleador por dolo o negligencia grave o reiterada en el desempeño de sus tareas;
 - b) Si el trabajador cometiere, en perjuicio del empleador, hechos calificados como delitos por sentencia judicial;
 - c) Por incapacidad del trabajador para cumplir con sus obligaciones, excepto cuando fuere sobreviniente a la iniciación de la prestación de servicios;
 - d) Por las injurias del trabajador a la seguridad o a los intereses morales o materiales del empleador o su familia, que será prudentemente apreciada por los jueces teniendo en cuenta el carácter de las relaciones entre las partes vinculadas por un contrato de trabajo;
 - e) Por el abandono voluntario de las tareas, previa intimación telegráfica o por instrumento público a reintegrarse al trabajo, la reiteración de inasistencias injustificadas, o los actos de indisciplina graves o reiterados, o la inhabilitación especial dictada por sentencia judicial.
- B) Por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador: el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización por despido equivalente a la mitad de su remuneración mensual por cada año de servicios o fracción mayor de tres meses, tomando como base el promedio de los salarios percibidos durante el último año, o durante todo el tiempo de la prestación de servicios, si ésta fuere inferior. Dicho promedio no podrá exceder de un importe equivalente a un mes del salario

vital mínimo para el trabajador sin cargas de familia, sin aplicación de coeficientes, vigente al tiempo de la extinción del contrato. El importe total de la indemnización en ningún caso será inferior a un mes normal del último salario del trabajador.

El empleador deberá comenzar los despidos por el personal menos antiguo del establecimiento o sección. Los despidos en violación del orden de antigüedad serán considerados sin causa justificada, salvo que el empleador demostrara la necesidad de mantener personal menos antiguo a los efectos de facilitar la reanudación del trabajo en el establecimiento.

- C) Sin causa justificada: el empleador que despidiera sin expresión de causa, o no probare la que hubiere invocado, deberá abonar al trabajador una indemnización por despido, equivalente al importe de su remuneración mensual por cada año de servicios o fracción mayor de tres meses, tomando como base el promedio de los salarios percibidos durante el último año o durante todo el tiempo de la prestación de servicios, si éste fuere inferior.

Dicho promedio no podrá exceder del equivalente a tres veces el importe mensual del salario vital mínimo para el trabajador sin cargas de familia, sin aplicación de coeficientes, vigente al tiempo de la extinción del contrato. El importe total de la indemnización en ningún caso será inferior a dos meses del último salario normal del trabajador.

En los contratos a plazo fijo o por obra determinada el despido sin causa justificada antes del vencimiento del plazo o terminación de la obra, importará, además, el derecho al pago de los daños y perjuicios que puedan corresponder al trabajador por la rescisión anticipada del contrato de trabajo.

- 4º Por vencimiento del plazo o terminación de la obra: el empleador deberá otorgar el preaviso por el plazo que corresponda y abonar al trabajador una indemnización igual a la establecida en el inciso 3º, apartado B), de este artículo.
- 5º Por muerte del trabajador: el empleador deberá abonar a los derechohabientes del trabajador una indemnización igual a la establecida en el inciso 3º, apartado B), de este artículo, entendiéndose por derechohabientes a las personas enumeradas en el artículo 17 de la ley 14.370, en orden excluyente, a quienes bastará para obtener su cobro la simple acreditación del vínculo. Se deducirá del monto de esta indemnización lo que los derechohabientes perciban por seguros constituidos y tomados exclusivamente a su cargo por el empleador, salvo aquellos impuestos por norma legal o convención colectiva.
- 6º Por quiebra o concurso civil del empleador: el trabajador tendrá derecho al cobro de la indemnización por despido establecida en el inciso 3º, apartado B), de este artículo. Si éstas fueren calificadas judicialmente como cul-

pable o fraudulenta, la indemnización será igual a la establecida en el inciso 3º, apartado C), de este artículo.

7º Por cesación o liquidación de la empresa:

- a) Por causa no imputable al empleador: el trabajador percibirá la indemnización por despido previsto en el inciso 3º, apartado B), de este artículo;
- b) Por causa imputable al empleador: el trabajador percibirá la indemnización por despido prevista en el inciso 3º, apartado C), de este artículo.

8º Por jubilación del trabajador: cuando el trabajador cumpliera los extremos exigidos por las leyes de previsión para obtener jubilación ordinaria, el empleador podrá intimarlo a iniciar los trámites respectivos y le extenderá las certificaciones de servicios y aportes que corresponda.

A partir de este momento el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el organismo previsional otorgue el beneficio, por el plazo máximo de un año.

Otorgado el beneficio, o cumplido el plazo de un año, se extingue el contrato.

Art. 41.— Cuando el trabajador se hubiere desempeñado en el servicio por un plazo menor de tres meses y fuere despedido sin causa justificada percibirá, como indemnización por despido, el equivalente al tercio de los salarios que haya percibido durante el tiempo de prestación de servicios.

VI.— Preaviso

Art. 42.— En los casos previstos en los incisos 2º, apartado A); 3º, apartados B) y C); 4º, 7º y 8º del artículo 40, la parte que decida dar por finalizado el contrato de trabajo deberá preavisar a la otra por los plazos establecidos a continuación:

El trabajador deberá otorgar el preaviso por el plazo de un mes.

El empleador deberá otorgar el preaviso por los siguientes plazos:

- a) Si el trabajador tuviere más de un mes y menos de cinco años de antigüedad: un mes;
- b) Si el trabajador tuviere más de cinco años de antigüedad: dos meses.

Art. 43.— La parte que omita el preaviso deberá abonar a la otra una indemnización substitutiva que, para el trabajador, será igual al monto de los salarios que hubiera percibido durante el plazo del preaviso, y para el empleador, el doble de los salarios que hubiera debido abonar durante ese plazo.

Art. 44.— Los plazos correrán a partir del primer día del mes siguiente al de la notificación del preaviso, que deberá hacerse por escrito.

Cuando se extinguiere el contrato sin preaviso, en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización substitutiva del preaviso deberá incrementarse con una suma igual a la que el trabajador hubiera debido percibir por salarios, entre la fecha de la extinción y el último día del mes.

Cuando el preaviso hubiere sido otorgado por el empleador al trabajador podrá considerar extinguido el contrato en cualquier momento, sin perjuicio de su derecho a percibir la indemnización por despido.

Art. 45.— Las indemnizaciones por despido y por falta de preaviso, esta última con el incremento previsto en el artículo 44, tendrán carácter resarcitorio y no estarán sujetas a aportes jubilatorios ni al pago de impuestos ni a ninguna otra contribución.

Tampoco estarán sujetos a embargos y regirá para ellas lo dispuesto en el artículo 14.

Art. 46.— Durante el transcurso del plazo de preaviso subsisten las obligaciones emergentes del contrato de trabajo. El trabajador tendrá derecho, sin reducción de su salario, a gozar de una licencia de tres horas diarias dentro de la jornada legal de trabajo, pudiendo optar por las tres primeras o las tres últimas de la jornada.

Art. 47.— Es nulo el preaviso notificado al trabajador que estuviere cumpliendo una suspensión, gozando de sus vacaciones o ausente por accidente, enfermedad inculpable, huelga, servicio militar o licencia por maternidad.

Art. 48.— Los accidentes y las enfermedades inculpables suspenden el período de preaviso dispuesto con anterioridad, el que continuará corriendo nuevamente cuando el trabajador estuviere en condiciones de reintegrarse a sus tareas.

VII.— Disposiciones generales

Art. 49.— A todos los efectos emergentes del contrato de trabajo, la antigüedad se computará desde la fecha en que el trabajador inició la prestación de servicios.

En caso de contratos sucesivos entre las mismas partes se acumulará la antigüedad de cada uno de los distintos contratos a todos los efectos. En el supuesto de despido, se deducirá de la indemnización por despido lo que el trabajador hubiere percibido anteriormente por el mismo concepto.

Art. 50.— En los contratos a plazo fijo o por obra determinada la omisión de otorgar el preaviso en los plazos que corresponda dará derecho al trabajador a considerar el contrato como de plazo indeterminado.

Art. 51.— En los trabajos, que por su naturaleza o modalidad, sólo se realizan en determinados períodos del año, el contrato no se extingue por la finalización de cada uno de los períodos o temporada pero quedan suspendidas las obligaciones recíprocas de las partes, hasta el comienzo del período o temporada siguiente.

Al finalizar cada período o temporada, el empleador deberá otorgar al trabajador las vacaciones y abonarle el sueldo anual complementario correspondiente.

Art. 52.— Los empleadores están obligados a llevar un registro, numerado y rubricado por la autoridad de aplicación, en el que se hará constar los nombres de cada uno de los trabajadores que contraten, la fecha de ingreso y egreso, los salarios percibidos y todos los demás datos que exige la legislación laboral vigente y que permitan una correcta evaluación del cumplimiento de las obligaciones a su cargo. En caso de que el empleador no llevare el registro mencionado o lo hiciere en forma deficiente, estará a su cargo la prueba contraria, si el trabajador o sus derechohabientes prestan declaración sobre los hechos que debieron consignarse en él o fueron consignados en forma deficiente.

Art. 53.— En todos los casos de extinción del contrato de trabajo el empleador estará obligado a en-

tregar al trabajador un certificado en el que se hará constar las fechas de ingreso y egreso, la naturaleza de las tareas desempeñadas y su número de inscripción en la caja nacional de previsión social respectiva. También certificará haber efectuado el pago de los aportes jubilatorios y de todo otro del que sea agente de retención.

Art. 54.—Para hacer frente al pago de las indemnizaciones por despido el empleador podrá constituir una reserva deducible a los efectos del impuesto a los réditos, ingresando a ella a su opción los importes que resulten de cualquiera de los siguientes sistemas:

1.—El importe resultante de aplicar, sobre los salarios abonados durante el ejercicio al personal en actividad al cierre del mismo, el por ciento que representen, en los tres últimos ejercicios, las indemnizaciones reales pagadas sobre los salarios totales abonados.

2.—Un por ciento a fijar por el Poder Ejecutivo nacional a aplicar sobre los salarios totales abonados durante el ejercicio al personal en actividad al cierre del mismo.

Los importes así reservados deberán adicionarse a la reserva ya existente de acuerdo con las disposiciones legales vigentes a la fecha de la promulgación de la presente ley. Al fondo así formado se imputarán las indemnizaciones que efectivamente se paguen por despidos.

Art. 55.—Los créditos del trabajador provenientes de obligaciones emergentes del contrato de trabajo gozarán de privilegio sobre los bienes del empleador y tendrán precedencia a todo otro crédito, con excepción de los siguientes:

- a) Los créditos hipotecarios;
- b) Los créditos prendarios;
- c) Los créditos alimentarios;
- d) Los gastos y honorarios necesarios para hacer efectiva la responsabilidad del deudor, en caso de quiebra o concurso civil.

Art. 56.—Todas las acciones emergentes del contrato de trabajo, inclusive las de indemnización por accidentes y enfermedades profesionales, prescribirán en el plazo de cinco años durante su vigencia. Extinguido el contrato de trabajo, las acciones prescribirán en el plazo de tres años, aun aquellas que prescribirían por un término distinto por aplicación del párrafo anterior.

Art. 57.—Las intimaciones telegráficas dirigidas al empleador por el trabajador o la organización sindical de su actividad, atribuyéndole incumplimiento de obligaciones a su cargo, crearán, cuando no fueren contestadas en el plazo razonable fijado en ellas, que no será inferior a tres días hábiles, presunción de veracidad que sólo podrá ser destruida por prueba en contrario.

Art. 58.—En las actuaciones administrativas o judiciales que promuevan, los trabajadores gozarán del beneficio de litigar sin gastos; y en ningún caso les será exigida caución real o personal para el pago de costas u honorarios o para la responsabilidad por medidas cautelares, dando sólo caución juratoria de pagar si llegasen a mejorar de fortuna.

Art. 59.—Deróganse las leyes 11.729, 15.785, los artículos 45, 66 y 67 del decreto ley 33.302/45, y toda otra disposición que se oponga a la presente ley.

VIII.—Interpretación

Art. 60.—Las disposiciones de esta ley son de orden público y establecen el mínimo de garantías irrenunciabiles para el trabajador, y serán interpretadas teniendo en cuenta su función protectora y su finalidad social.

Art. 61.—En caso de duda respecto del alcance de una norma legal o convencional que regla obligaciones emergentes del contrato de trabajo, se estará a aquella solución que armonice con las fuentes del derecho del trabajo, en especial las leyes de la materia y los convenios colectivos de trabajo y sus principios generales.

En tales casos deberá estarse a la interpretación que asegure mayores beneficios a los trabajadores.

Art. 62.—Las cláusulas de las convenciones individuales o colectivas que desconozcan o reduzcan derechos garantizados por ley a los trabajadores se reputarán nulas de pleno derecho.

Son igualmente nulos los actos simulados o en fraude a la ley que tengan ese objeto.

Cuando una convención contenga simultáneamente cláusulas que signifiquen reducciones y ampliaciones de derechos garantizados por ley a los trabajadores, la nulidad alcanzará sólo a las primeras, y las segundas conservarán su validez.

IX.—Disposición transitoria

Art. 63.—Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación a los casos de despido injustificado producidos a partir del 15 de septiembre de 1965.

Art. 64.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CARLOS H. PERETTE.
Claudio A. Maffei.

Sr. Presidente (Mor Roig).—En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado Castellanos.

Sr. Castellanos.—Señor presidente: en nombre de la mayoría de la Comisión de Legislación del Trabajo produciré un breve informe sobre este tema, poniendo ante todo de manifiesto la preocupación que ha tenido en el estudio de este asunto la comisión, presidida por el distinguido diputado Pena, quien la convocó de inmediato al recibirse la comunicación del Honorable Senado. La comisión, con el concurso de todos los diputados que la integran, se abocó sin demora al estudio minucioso de las modificaciones producidas en el proyecto.

Ese estudio se hizo con serenidad, teniendo en vista sólo la alta finalidad patriótica de una ley laboral, considerando el momento social en que vivimos, sin tener en cuenta los términos duros y agraviantes de solicitudes de la Cámara Industrial, pero recibiendo el apoyo eficaz y sincero de la Confederación General del Trabajo y de la Federación de Empleados de Comercio de la sección Capital, por intermedio del secretario general Morera, sin presiones y cuidadosamente. De ese estudio surgieron conclusiones que deben aceptarse, que son las modificaciones introducidas por el Honorable Senado sólo aquellas de carácter formal, que no alteran

ni la estructura ni el espíritu de la sanción de esta Honorable Cámara. Es así que aconsejamos aceptar las modificaciones a los artículos 19; 29; 11; 18; 21; 22; 23; 27; 35; 39, inciso 2º, apartado b); 39, inciso 3º, apartado a); 39, inciso 6º; 46, y 55. Rechazamos las demás modificaciones, haciendo uso de la facultad constitucional del artículo 71 y de la reiterada jurisprudencia de esta Honorable Cámara.

Ha habido alguna pequeña disidencia parcial, que se refiere a casos de sólo un artículo. Es decir entonces que la inmensa mayoría de la comisión se ha expedido, en un sentido amplio, por la ratificación del proyecto tal como fue aprobado por esta Honorable Cámara.

Con estas consideraciones, y con las que haré al tratar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado, dejo expuesto el informe general de la comisión.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para informar el despacho de la minoría tiene la palabra el señor diputado Hardoy.

Sr. Hardoy. — Señor presidente: es verdad que la casi totalidad de los señores diputados que integran la Comisión de Legislación del Trabajo se han pronunciado de la manera que acaba de exponer el señor diputado preopinante; pero también es cierto...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si me permite el señor diputado, la Presidencia le señala que por inconvenientes producidos en la tensión eléctrica disminuye el rendimiento de los micrófonos, por lo que ruega al señor diputado se sirva hacer un esfuerzo para que pueda ser escuchada su palabra.

Sr. Hardoy. — Trataré de dar más fuerza a las palabras y a las ideas.

Decía que, como acaba de manifestar con verdad el señor diputado que me ha precedido, la gran mayoría de los señores diputados que integran la Comisión de Legislación del Trabajo ha coincidido en el despacho que ahora va a considerar la Honorable Cámara; pero, en cambio, quiero dejar constancia de mi disidencia en general.

Después de meditar sobre los alcances de las observaciones que me merece el despacho, resolví formular otro en disidencia, que voy a tratar de informar muy brevemente.

Simplemente quiero dejar constancia de que las reformas introducidas por el Honorable Senado a la sanción dada por esta Cámara no mejoran substancialmente el despacho. En algunos casos se han introducido reformas útiles, porque precisan mejor la redacción o porque dan una solución más adecuada a algún problema que, generalmente, es de detalle, no de fondo; pero en conjunto el proyecto que ha venido del Senado adolece de las mismas limitaciones, de las mismas imperfecciones y de los mismos defectos que tratamos de poner de manifiesto en oportunidad de debatirse este asunto.

No creo que sea del caso repetir los argumentos que se dieron entonces, entre otros motivos, porque no conduciría a nada práctico, serio y relevante. Además, estamos encerrados en el dilema de aceptar o rechazar las enmiendas introducidas.

Sin duda, en uno u otro caso, la ley saldrá poco más o poco menos mala, pero sin llenar, a mi juicio, los requisitos que un ordenamiento legal de esta naturaleza exige en el momento actual de la evolución de la República.

Con estas salvedades, doy por terminado mi informe en general. En particular daré las razones que abonan cada una de las observaciones que formulo a las enmiendas introducidas por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Señor presidente: en oportunidad de considerarse en la Comisión de Legislación del Trabajo las modificaciones introducidas a la sanción de esta Honorable Cámara relacionada con la ley de contrato de trabajo, el diputado que habla hizo reserva en el sentido de una disidencia parcial, disidencia que tiende a lograr, cuando se considere en particular el artículo pertinente, que la Cámara fije su posición en lo que respecta al texto del artículo 4º, inciso b), precisamente porque es el que alude exclusivamente a las personas que la ley quiere que no estén comprendidas en su ámbito.

También la disidencia parcial formulada en su oportunidad alude al artículo 18 con las modificaciones introducidas por el Senado y que la mayoría de la comisión ha aceptado.

En lo que hace a lo restante, debo manifestar, siquiera sea someramente, cuál es la postura en que nos ubicamos al tratar estas observaciones o modificaciones que el alto cuerpo ha introducido al contrato de trabajo sancionado por esta Cámara.

Antes de entrar en materia es menester señalar algunas circunstancias que hacen un poco a la dignidad de este cuerpo, y de los señores diputados que han tenido a su cargo el estudio de esta ley e, inclusive, el de las observaciones formuladas por el Senado.

Las contingencias parlamentarias por todos conocidas originaron en su momento la postergación del debate que sobre este asunto debía realizar la Honorable Cámara. El señor diputado Castellanos, miembro informante del despacho de la mayoría, ha apuntado bien que hemos pasado por encima de nuestros detractores; hemos hecho oídos sordos, incluso a algunos términos injuriosos que algunos sectores de opinión interesados en que nuestra legislación siga estancada o, en todo caso, sea regresiva, han vertido sobre los señores diputados.

A título personal, y en lo que a mi bloque respecta, señor presidente, debo expresar que, sobre la postergación del tratamiento de la ley

11.729, hoy contrato de trabajo, cabe una aco- tación. Con criterio que podrá parecer bueno o malo a quienes nos juzgan, decidimos en su oportunidad que era de previa y especial consideración la interpelación al señor ministro de Trabajo relacionada con la reglamentación de la ley 14.455. Esa sola circunstancia no daba motivos más que, sencillamente, para la espera de unos pocos días para el tratamiento de la ley 11.729.

Es injusto que se pretenda hacer recaer sobre este cuerpo y, más precisamente, sobre los diputados de extracción peronista, es decir, de extracción popular, la circunstancia de la demora en el tratamiento del asunto.

Sr. De Cara. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Risso. — Sí, señor diputado.

Sr. De Cara. — Entiendo que todos los señores diputados que se sientan en estas bancas son de extracción popular.

Sr. Risso. — Señor presidente: dejando de lado eso que no es, de ninguna manera, una hipersensibilidad de los diputados de nuestro bloque, y ubicando las cosas en su justo punto, vamos a examinar, someramente, las modificaciones introducidas por el Senado al despacho original de la Cámara.

Para ello es menester adoptar una sistemática en el análisis, que torne claro y coherente el planteo y las razones que determinaron, en su momento, la actitud asumida por cada uno de los señores legisladores integrantes de la comisión.

El Senado —no hay duda— retuvo algún tiempo este despacho y la principal excusa que abona la demora en la sanción de la alta Cámara es que, cuando le fue enviado el proyecto sancionado por Diputados, aquel cuerpo, como el nuestro, estaba al borde de la finalización del año parlamentario ordinario.

Aceptada dicha circunstancia, veamos qué ha producido ese cuerpo. A nuestro entender, las modificaciones son de dos tipos: unas, meramente formales, que no hacen al espíritu ni a los objetivos que la ley persigue en todo su contenido y que, en algunos casos, la comisión, en su despacho de mayoría —e, incluso, el diputado que habla—, por entender que hacen más coherente el pensamiento y aclaran algunas circunstancias que podrían prestarse a interpretaciones confusas y generar una jurisprudencia disímil, hemos aceptado, como modificaciones, repito, meramente formales. Pero hay otras que introduce, o pretende introducir, el Honorable Senado y que vamos a analizar también, modificaciones que, a nuestro entender, cambian el sentido y el espíritu que el legislador tuvo cuando se abocó al estudio de este cuerpo legal. Si las modificaciones de tipo formal son aceptables porque no cambian el sentido y el espíritu de la ley, el mismo argumento, inver-

tido, podemos señalarlo como razón por la que no aceptamos esas modificaciones de orden sustantivo.

En este aspecto de las modificaciones sustanciales, el Honorable Senado propone agregar al artículo 4º un inciso c) —el artículo 4º de la sanción de esta Cámara sólo tiene dos incisos— en cuya virtud, además de la exclusión del personal del servicio doméstico tutelado por el estatuto contenido en el decreto ley 326/56 se incorpora otra exclusión relacionada con los trabajadores rurales, las personas dedicadas a la actividad de tamberos medieros y los trabajadores sujetos a contratos de ajuste marítimo. Cuando examinemos esta cuestión en detalle, durante la discusión en particular, daremos las razones de nuestra posición. Ahora quiero manifestar, de paso, que esa exclusión no registra en la discusión parlamentaria del Honorable Senado ninguna razón de peso que la torne acogible. En la oportunidad señalada expondremos las razones por las que creemos que debe mantenerse la sanción originaria de la Cámara de Diputados, con el mismo criterio, el mismo sentido y el mismo ámbito de aplicación.

Otra de las reformas sustanciales del Honorable Senado consiste en el agregado de un artículo 22 nuevo, disposición que, de aceptarse la reforma, pasaría a ser el artículo 23 de la ley. Este artículo nuevo nos ha creado una seria preocupación que yo deseo plantear a la Cámara. El texto nos dice, en la brevedad de la cláusula que voy a leer, que «los beneficios previstos en los artículos 17 a 21 no son aplicables a los trabajadores comprendidos en la ley 12.713». Esto significa la exclusión de los trabajadores a domicilio, que son aquellos tutelados por el régimen de la ley 12.713, de los beneficios relativos a la protección contra las enfermedades y los accidentes, eventos todos que también pueden incidir sobre este tipo de trabajadores. Por imperio de esta disposición que proyecta el Senado, este sector del trabajo nacional quedaría excluido del tutelaje de distintas normas contenidas en la ley de contrato de trabajo. Esto implica sostener sin rubor que luego de la sanción de esta ley tal como viene del Honorable Senado, los trabajadores a domicilio no tendrán ya derecho a enfermarse o a accidentarse. Hago esta afirmación, que luego ampliaremos en la exposición en particular, porque tal es el espíritu que trasunta el artículo 22 nuevo que pretende introducir el Honorable Senado.

Admito que quizá desde el punto de vista estrictamente jurídico pudo haber en su momento razones fundadas para avalar la exclusión de este sector del asalariado argentino que queda sin tutela frente a la enfermedad y el accidente. Pero, a mi vez, quiero formular en forma sencilla, un planteo que no es tanto jurídico cuanto humano. La legislación laboral está preñada de humanidad, de sensibilidad y de consideraciones populares.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Rodolfo José Tecera del Franco.

Sr. Risso. — Frente a la imposibilidad de que el trabajador a domicilio pueda acogerse a los beneficios que esta ley sobre contrato de trabajo establece en los casos de enfermedad y de accidente, es preferible que al juez —ese es el principal argumento que se hace en contrario— se le plantee como problema de interpretación del texto legal la necesidad de ubicar a ese trabajador a domicilio frente a la contingencia de la enfermedad o del accidente, y no que nosotros, legisladores elegidos por el pueblo, votemos insensiblemente lo contrario; es decir, impedir que ante esos eventos desgraciados tengan protección estos asalariados.

Más adelante veremos, con mayor acopio de razones el porqué de esta posición que estamos sosteniendo y que tiende a la no aceptación del artículo 22 que el Senado somete a nuestra consideración.

Otro punto que considero fundamental, y que integra esta trilogía de las modificaciones sustantivas que pretende incorporar el Senado, está dado por la modificación del artículo 37 del proyecto original de esta Honorable Cámara. Es el famoso artículo relacionado con la huelga, o más concretamente con la imposibilidad que tendría el patrón, luego de sancionada la ley, de despedir al trabajador por adherir a una huelga decretada por asociación profesional reconocida. En la primera parte de su texto, el Senado parecería acoger la postulación de Diputados, y es precisamente al final cuando introduce los factores distorsionantes de lo que ha pretendido legislar esta Cámara, que ha sido el trasunto de una necesidad real de los problemas que vive el país por las situaciones de hecho que se plantean en oportunidad de decretarse una huelga.

Admitir la parte final de esta modificación al artículo 47 implicaría introducir un factor distorsionante en el texto original del artículo, como voy a explicarlo brevemente. Cuando el texto del Senado dice que: si el trabajador en el período de huelga cometiese actos que configuren una injuria para su empleador podrá ser despedido sin derecho a indemnización, están dando motivos a que alguna jurisprudencia intencionada produzca decisiones que den a este artículo otro sentido que el que tuvo el legislador en su momento.

Podría darse, por ejemplo, la circunstancia de que alguien sostuviera que un trabajador perteneciente a una asociación profesional que decretó la huelga, aun cuando fuere tachada de ilegítima o ilegal, pudiera ser despedido en la medida en que algún juez interpretase esta última parte del artículo con ese sentido. Injuria a los derechos del patrón, por ejemplo, en determinados momentos, puede ser la sola circunstancia de que una máquina, un instrumento de

trabajo, como es un horno, deje de funcionar porque el trabajador no ha concurrido a su ocupación por razones de huelga. Podría ocurrir que al trabajador se lo despidiera, no por adherir a la huelga, sino por la injuria que significa no haber asistido para mantener encendido ese horno.

No quiero incursionar más en estas cuestiones, que van a ser motivo de análisis más detallado, en su oportunidad, por parte de la Honorable Cámara. En consecuencia, dejo planteada las razones que determinaron en su momento la disidencia parcial que registra el orden del día 404, que suscribo.

Hago presente que a medida que se examinen los artículos, en el orden sucesivo establecido, señalaremos las razones por las que, como integrante de la comisión y en nombre del bloque que presido, hemos de sostener, con fundamentos, la negativa que hemos dado a las pretensiones modificatorias del Senado.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: antes de entrar al análisis de las razones que nos han movido a la firma de este despacho, quiero aprovechar la oportunidad para contestar algunas críticas que fuera del recinto sectores empresarios, algunas veces, y órganos periodísticos, otras, han formulado al proyecto. Frente a ellas, como firmante del despacho y como presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo no creo que sea prudente permanecer en silencio.

Se ha dicho que la sanción de este proyecto de ley promoverá el recrudecimiento de lo que llaman la «industria del despido». Conviene analizar el tema y recordar que si en alguna oportunidad se practicó esta industria del despido fue durante un corto período, al amparo de circunstancias políticas, económicas y sociales especialísimas. Pero en la actualidad quienes pueden practicar esta industria son precisamente los empleadores, quienes admiten en los ejemplos más usados por ellos mismos que a un trabajador con 25 años de antigüedad —es decir, que ha dado toda una vida a la empresa sin participar, por supuesto, en sus utilidades— se le puede despedir mediante el pago de una indemnización que, con aplicación de las disposiciones vigentes, sólo alcanza a 125 mil pesos. De este modo, se coloca a ese trabajador, que ha llegado a una edad avanzada, en la difícil situación, cuando no puede acogerse al beneficio jubilatorio, de tener que deambular en busca de un trabajo u ocupación, que seguramente no le será fácil hallar por razones de edad.

Por otra parte, la experiencia enseña que en las pocas oportunidades en que algunos sectores de trabajadores pueden haber practicado esta llamada industria del despido, los protagonistas han sido obreros o empleados con muy poca antigüedad, y respecto de estos trabajadores, precisamente, la disposición del proyecto que

Marzo 16 de 1966

estamos considerando no modifica la situación, pues es conocida la jurisprudencia en la materia.

La indemnización para trabajadores de antigüedad mínima, según la doctrina sustentada por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires en los casos de despido injustificado, no puede nunca ser inferior a dos meses de sueldo sin tope. Y si aplicamos la doctrina aceptada por la Cámara Nacional del Trabajo de la Capital Federal, la indemnización no puede ser inferior a un mes de sueldo, sin tope. En consecuencia, para este sector de trabajadores, que eventualmente puede ser el que se decida a practicar la llamada industria del despido, es indudable que esta ley no mejora su situación.

Los trabajadores que tienen alguna antigüedad, por el contrario, han demostrado a través del tiempo tener mucho mayor interés en mantener la estabilidad de su relación laboral que en provocar su despido para obtener el cobro de una indemnización, lo que los coloca en la situación de tener que volver a buscar una nueva ocupación.

También se ha dicho que se promoverá una nueva industria del despido prejubilatorio, argumentando que las disposiciones de esta ley alentarán a trabajadores que están cerca de obtener su jubilación ordinaria a provocar su despido para lograr en esta forma el pago de una cuantiosa indemnización. A esto corresponde contestar que parece que quienes formulen esta afirmación desconocen la experiencia y la jurisprudencia de nuestros tribunales del trabajo.

No es tan sencillo para un trabajador provocar su despido y luego justificar ante el tribunal que éste ha sido originado por una causa imputable al empleador. Si en alguna oportunidad los jueces pueden haber parecido benévolos al juzgar la prueba producida por el trabajador a los efectos de demostrar la responsabilidad del empleador en la rescisión de la relación laboral, esto seguramente ha estado influido por lo magro de las indemnizaciones. Pero estando asegurada la adecuación de las indemnizaciones a una realidad económico-social, al mismo tiempo que su movilidad, puede afirmarse que nuestros jueces laborales serán prudentes en la apreciación de los hechos para juzgar cuándo está justificada o no la causa del despido.

Por otra parte, el trabajador que está próximo a obtener su jubilación ordinaria íntegra, difícilmente pueda interesarse en provocar su despido pues sabe que luego tendrá que obtener otra ocupación para completar los recaudos necesarios a los efectos de obtener el beneficio jubilatorio. Y la situación se agrava si tenemos en cuenta que este trabajador, en razón de su edad, tendrá dificultades para encontrar otra ocupación.

Se ha afirmado, también, que la aplicación de las disposiciones de este proyecto traerá como consecuencia el resquebrajamiento de la disci-

plina en los establecimientos. Esta afirmación no está avalada con ningún argumento y, en cambio, parece ignorarse que por primera vez en una ley nacional se reconoce en forma expresa la facultad del empleador para dictar reglamentos y normas de disciplina siempre que no avancen, por supuesto, sobre disposiciones legales, reglamentarias o convencionales, y sobre los usos y las costumbres.

Se ha puesto el acento en que a través de esta sanción se elevarán considerablemente los costos de la producción y que, en consecuencia, se habrá de incidir desfavorablemente en el proceso inflacionario que vive el país. Es verdad que la concesión de nuevos beneficios a los trabajadores se traducirá en un aumento de los costos, pero éste no ha de ser significativo cuando los sectores empresarios que formulan la crítica no han podido exhibir el porcentaje de esa incidencia. El único sector empresario que se ha atrevido a señalar la incidencia ha sido la Cámara de la Construcción que la fijó en un porcentaje del orden del 4 al 5 por ciento.

Si tenemos en cuenta que es precisamente con respecto a ese sector de la actividad que las disposiciones del proyecto que estamos considerando tienen mayor incidencia, ya que se reconoce la indemnización denominada comúnmente «indemnización simple» al trabajador que sólo presta servicios en una obra y las vacaciones proporcionales al trabajador que no alcanza a prestar servicio durante la mitad de los días laborales del año, se llega a la conclusión de que si la incidencia con relación a esta industria —seguramente la más afectada por las disposiciones del proyecto— alcanza solamente al 4 o al 5 por ciento sobre los costos, la misma ha de ser muy poco significativa sobre los demás sectores dado de que ni siquiera la exhiben.

Se ha criticado con palabras muy duras e incluso alguna vez se ha rozado el debido respeto que se debe a la Cámara y a los señores legisladores, cuando algunos sectores se han referido a los aumentos de los topes indemnizatorios sin querer advertir que ellos son la consecuencia de la necesidad de adecuar las disposiciones legales vigentes a una realidad económica y social que nadie puede desconocer.

En ese terreno, podemos afirmar que los legisladores han sido prudentes en la redacción de las disposiciones que modifican a las vigentes en la actualidad. En 1934, cuando los sueldos de las categorías inferiores del trabajo se estimaban en 100 pesos, se fijó un tope para la indemnización por despido de 500 pesos, o sea una relación de uno a cinco. Ahora, en la indemnización de monto más alto para el caso de despido injustificado, el máximo por año de servicio puede ascender a 40.320 pesos, equivalente a tres salarios vitales mínimos para el trabajador sin cargas de familia, vigente cuando los sueldos de las categorías inferiores del trabajo pueden esti-

marse en 20.000 pesos, lo que significa una relación de 1 a 2, o poco más, distante a aquélla de 1 a 5.

Si tomáramos otro índice, del costo de la vida, y el legislador hubiera querido mantener un paralelismo entre él y las indemnizaciones, tendríamos que analizar las cifras que proporcionan las estadísticas de nivel de vida para la Capital Federal de la Dirección Nacional de Estadísticas, que sobre una base de 100 para 1960 nos da un índice de 2,169 para 1934 y uno de 283,8 para el año 1965, lo que significa que si hubiese querido mantener ese paralelismo, el tope habría que haberlo fijado en alrededor de 65.000 pesos.

Se ha alertado a la opinión pública en contra de la movilidad de los topes indemnizatorios, que resulta de relacionarlos con el salario vital mínimo y móvil, ya que periódicamente el Consejo Nacional del Salario procede a su actualización. Esa campaña ha sido hecha por los mismos sectores que en oportunidad de considerarse por esta Cámara el proyecto del Poder Ejecutivo sobre salario vital mínimo y móvil alertaron a la opinión pública e hicieron llegar estudios a todos los bloques que componen este cuerpo, anunciando las consecuencias desastrosas que iban a resultar para nuestra economía si se sancionaba la ley. El proyecto se sancionó, se aplicó y se aplica, y no se han producido los desastres anunciados sino que, por el contrario, se posibilita a muchos trabajadores que no pertenecen a un gremio fuerte, obtener un salario justo y adecuado a la realidad económica y social.

Además, esa movilidad pone a cubierto al trabajador. Estoy seguro que esos mismos sectores empresarios hubieran aceptado que el tope se fijara en una suma igual a los tres salarios mínimos vitales que rigen hoy, porque piensan que esa suma quedará desactualizada por el proceso inflacionario, que ellos piensan que es inevitable, porque no tienen fe en el país.

Sr. Christe. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Pena. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Christe.

Sr. Christe. — Estoy escuchando con mucha atención al señor diputado, aunque no comparto muchas de sus apreciaciones. Pero ya que el señor diputado habla de su fe en el futuro del país, le rogaría que me indicase más o menos cuándo calcula que se va a detener la inflación si se siguen sancionando leyes de esta naturaleza.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Si bien el señor diputado me formula una pregunta que se encuentra bastante fuera del tema que debatimos hoy, le constataré diciendo que estimo que la inflación se

detendrá —y yo creo que ya se va amenguando— en la medida en que nuestro país resuelva sus problemas de deuda externa y pueda ordenar su economía interior en la forma que este gobierno lo viene planificando.

Sr. Hardoy. — Pero el costo de la vida ha subido casi un 40 por ciento en un año.

Sr. Pena. — Esa cifra es inexacta, porque para aludir a aumentos reales del costo de la vida hay que referirse al costo promedio y, de ninguna manera, a costos extremos, es decir, tomados a principios y a fines del año.

Sr. Hardoy. — ¿Si me permite el señor diputado?...

Sr. Pena. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Hardoy.

Sr. Hardoy. — Una cosa es el procedimiento que se toma en cuenta para utilizar índices económicos en períodos largos, y otra muy distinta es la que resulta de los hechos, que demuestran que vivir en el mes de diciembre de 1965 costó exactamente —según informaciones de la Dirección de Estadística y Censo, que han llegado al Congreso y están a disposición de los señores diputados— 38,4 por ciento más que en diciembre del año anterior. En febrero de 1966, comparado con febrero de 1965, el aumento fue un poco menor —tuvimos más suerte—, ya que vivir costó solamente 36,4 por ciento más.

Y en todo esto no hay promedios que valgan. Esa es la realidad. Ninguna ama de casa, ninguna mujer de un obrero que va al mercado a satisfacer las necesidades quizá elementales de la familia, podrá obtener los mismos resultados hoy que hace un año, pues deberá pagar 36,4 por ciento más dinero, y eso si se conforma con la modesta canasta familiar y si aceptamos los cálculos ligeramente optimistas de las reparticiones oficiales.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Vuelvo a expresarle al señor diputado Hardoy que cuando queremos referirnos a un costo de vida a través de un año, tenemos que hacer mención al promedio anual y no a los extremos. Pero, también, deseo dejar señalado que no dudo de que haya en el país quien no pueda satisfacer todas sus necesidades; estamos tratando de ordenar eso, y al respecto deseo destacar que en los dos últimos años el salario real ha experimentado aumentos, que han sido del 5,6 por ciento en 1964 y del 3,1 en 1965, lo que ha significado un promedio del 4,4 por ciento anual. Se ha invertido así la tendencia que venía advirtiéndose en nuestra economía, ya que en los años anteriores los trabajadores habían ido perdiendo poder adquisitivo en sus salarios.

Y continúo con mi exposición. La movilidad a que venía refiriéndome antes es, seguramente,

la conquista más importante que han de lograr los trabajadores del país en cuanto al régimen indemnizatorio, que es un aspecto parcial de esta ley.

En efecto, no se ha de dar más el caso que se presenta en la actualidad, en que un trabajador con 25 años de antigüedad puede ser despedido —y uso ejemplos tomados de publicaciones conocidas por todos los señores diputados— mediante el pago de una indemnización de 125 mil pesos. En el caso del ejemplo, se trataba de un trabajador que ganaba 40 mil pesos mensuales. Después de 25 años de trabajo, arbitrariamente, sin causa justificada, el patrón tiene el derecho de despedirlo mediante el pago de poco más de tres sueldos.

Se ha dicho, además, que esta ley, en el caso de ser sancionada, ha de colocar en situación de incompetencia a las empresas antiguas en relación con las empresas nuevas, por cuanto los costos de las primeras van a ser influidos en mayor medida por las disposiciones proyectadas. Y para eso se han tomado como ejemplos casos extremos de trabajadores con mucha antigüedad, con altos salarios y que son despedidos siempre injustificadamente; no se ha planteado el caso del que es despedido por falta de trabajo, al que se le abona una indemnización con tope muy inferior, que en la actualidad, un salario vital, mínimo y móvil, alcanza a 13.440 pesos.

En esos análisis se ha incurrido en voluntarios olvidos. En primer lugar, no se ha señalado que las empresas antiguas han venido practicando en sus balances anuales reservas para cubrir las presuntas indemnizaciones que puedan corresponder por despidos a su personal, reservas que se deducen para el impuesto a los réditos y sobre las que no pagan gravámenes. Tales reservas contables son en realidad fondos que usa el empresario en el desenvolvimiento de su industria o comercio. En consecuencia, estas reservas se acrecientan y si se hubieran invertido en bienes de capital también éstos se habrían valorizado en proporción inversa a la pérdida de valor adquisitivo de nuestra moneda.

Es decir que estas reservas, que se vienen practicando y que se supone los empleadores han administrado bien y redituándoles utilidades, han proporcionado beneficios, no son sólo la cantidad que resulta de los balances. Es una suma muy superior porque habría que acrecentarla con las rentas. Por lo tanto esto nivela a las empresas con obreros de alguna antigüedad con respecto a aquellas que recién se inician y que tienen personal nuevo.

En los casos a que me refiero se han señalado siempre ejemplos de obreros con antigüedad de 25 o más años, ignorándose deliberadamente que el promedio de antigüedad del personal de las empresas argentinas oscila entre los ocho y los

diez años, lo que hace reducir sensiblemente el monto indemnizatorio.

Siempre se toma también el caso de despidos arbitrarios, es decir, aquéllos que dispone el empleador unilateralmente sin causa justificada, que no son precisamente los que deciden a los empresarios a prescindir de trabajadores con alguna antigüedad que le han prestado servicios satisfactoriamente. Generalmente en estos casos, cuando se produce la rescisión de la relación laboral por decisión del empleador, es por falta o disminución de trabajo y en tal supuesto la indemnización es muy inferior.

Por otra parte, no se explica claramente por qué un empresario que ha tenido a sus órdenes a un trabajador durante veinte o veinticinco años, quien ha dado lo mejor de su vida y de sus energías a la empresa, ha de despedirlo arbitrariamente.

Esta ley no pretende colocar a los trabajadores en la situación de poder reclamar una indemnización cuantiosa. Por el contrario, pretende asegurar la estabilidad de esa situación laboral y por eso establece indemnizaciones que están de acuerdo con nuestra realidad económica y social.

En un comentario periodístico que recuerdo en este momento y que puede desdibujar la imagen de esta ley en la opinión pública, tomando índices de aumento del costo de la vida y, por lo tanto, también del salario mínimo vital, del 30 por ciento anual, se hacía ascender el monto de la indemnización que un empresario tendría que abonar a un trabajador con treinta años de antigüedad en el año 1971 a 4.491.150 pesos.

Lo que no aclaraba esa publicación es que en tal supuesto el tope indemnizatorio —que se obtiene muy sencillamente al dividir la cantidad aludida por treinta— tendría que ascender a 149.705 pesos, lo que significaría que el salario vital mínimo para el trabajador sin cargas de familia tendría que ser del orden de los cincuenta mil pesos mensuales; en la actualidad sólo alcanza a 13.440 pesos. Esto significa que para el año 1971, que supone la publicación, un trabajador, con 30 años de antigüedad, solamente por la bonificación que le correspondería por los años de servicios prestados debería tener un sueldo de tres o cuatro veces el salario vital mínimo. En consecuencia, el trabajador de ese ejemplo podría llegar a percibir un salario mensual del orden de los doscientos mil pesos. Por supuesto, si el empresario arbitrariamente, después de treinta años de prestación de servicios, despide a un trabajador que gana doscientos mil pesos mensuales, tendrá que abonar una indemnización de cuatro millones de pesos. Yo no me asusto ni puedo preocuparme por esa situación.

Estas publicaciones, solicitadas, memorándum y memorias que se hacen llegar a muchos sectores del país están contribuyendo a crear una

imagen falsa de lo que resultará de la aplicación de las disposiciones de esta ley. Los órganos periodísticos que pretenden formar la opinión pública precisamente, por eso deben tener más prudencia y responsabilidad en las informaciones. La opinión pública tiene derecho a exigirselas y a ser informada con veracidad. Del análisis que estoy realizando no resulta que estas publicaciones hayan contribuido a crear una imagen real sobre las consecuencias de la vigencia de esta ley.

Pido disculpas a la Cámara por haber tomado parte de su tiempo para contestar algunas críticas injustas y antojadizas que se han formulado a este proyecto de ley. No he hablado en mi carácter de autor del proyecto ni de presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo; lo he hecho como diputado porque creo que con tales críticas se ha rozado a todos los integrantes de esta Cámara y del Honorable Senado, quienes, con discrepancias o sin ellas, han apoyado la sanción de esta ley, y seguramente en esta sesión contribuirán también con su voto a la aprobación del despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo sobre el proyecto en revisión remitido por el Senado.

Entrando ya en el tema, diré que la comisión ha considerado, interpretando el artículo 71 de la Constitución Nacional conforme a los antecedentes parlamentarios conocidos, que estaba en condiciones de aceptar algunas de las modificaciones introducidas a la sanción originaria de esta Cámara y rechazar otras. Con este criterio se ha despachado el proyecto.

El Senado no ha modificado lo esencial de la sanción de la Cámara de Diputados. Puede decirse que entre ambas sanciones existe un plano general de coincidencias fundamentales. Como señalara recientemente el señor diputado Risso, el Senado ha introducido algunas reformas meramente de carácter formal, otras que mejoran la redacción de nuestra sanción y algunas más que, si bien han sido rechazadas por la Comisión de Legislación del Trabajo, no deben considerarse totalmente infortunadas porque habrán de servir, después de las aclaraciones que formularemos en la discusión en particular, de pauta interpretativa.

Señalo que si bien los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo pertenecientes a la Unión Cívica Radical del Pueblo subscribimos este despacho en disidencia parcial sin instrumentarla, ello se debió, como lo conocen los integrantes de la comisión, a la circunstancia de no haber tenido tiempo, antes de realizar la reunión de la comisión en que se elaboró el despacho, de consultar con el bloque de UCR del Pueblo sobre dos problemas respecto a los cuales los integrantes de la comisión teníamos dudas sobre cuál sería la posición del resto de nuestra bancada.

Estos problemas eran las exclusiones que el Senado había incorporado al artículo 49 de la

sanción de Diputados, y un artículo nuevo que introdujo aquella Cámara, y que lleva el número 22. En la discusión en particular nos referiremos a los mismos, pero puedo anunciar que en este momento, después de consultar a nuestro bloque, no tenemos ninguna disidencia con el despacho de la mayoría, es decir que la mecánica de esta disidencia parcial tuvo solamente un objetivo: no demorar el despacho de un proyecto cuando todos los trabajadores tienen fundamental interés en su aprobación, porque satisface reclamaciones legítimas y antiguas que, desgraciadamente, no habían podido concretar hasta ahora.

Aclaro, entonces, que en estos momentos no tenemos ninguna disidencia que formular con relación al despacho de la mayoría. Dejando para la discusión en particular las razones que nos han movido a aceptar o desechar las modificaciones introducidas por el Senado, diré que la Cámara alta, al redactar el artículo 37 de la ley, que se refiere a la huelga, ha agregado un segundo párrafo que la comisión no ha aceptado, por una razón muy simple: porque ha considerado que se confunden dos planos distintos del derecho laboral. El primer párrafo, que se refiere a la huelga, se desenvuelve en el plano del derecho colectivo, y el segundo párrafo, agregado por el Senado, que la comisión no ha aceptado, dice: «Si el trabajador en el período de huelga cometiese actos que configuran una injuria hacia su empleador, podrá ser despedido sin derecho a indemnización.» Evidentemente, este agregado lo consideramos innecesario, por cuanto el empleador siempre tendrá derecho a rescindir el contrato de trabajo con un trabajador que incurre en una injuria individual independientemente del hecho de la huelga, y esto está legislado en el artículo 39 en detalle.

Como puede apreciarse, la labor de la Cámara será relativamente simple. El Senado —vuelvo a repetir— no ha introducido modificaciones en lo esencial.

Sr. Romano. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Pena. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Romano.

Sr. Romano. — Es verdad que gran parte del proyecto sancionado originariamente por diputados no ha sido modificado substancialmente por el Senado, sino, más bien, en aspectos de forma. Pero hay una o dos que son modificaciones de fondo y la Comisión de Legislación del Trabajo, en su despacho de mayoría, insiste en su sanción.

Una de las modificaciones excluía, tácitamente, a todos los trabajadores rurales del ámbito de aplicación de la ley y otra es, precisamente, el problema que acaba de enunciar el señor diputado.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Es exacto lo que dice el señor diputado Romano, pero nuestro bloque ha decidido insistir en la sanción originaria del artículo 49, aprobada por Diputados. En cuanto al artículo 37, también ha desechado el agregado propuesto por el Senado no por considerar que el mismo altera substancialmente el artículo, sino porque confundía dos planos distintos del derecho laboral: el plano de los derechos colectivos y el plano de los derechos individuales, vinculados al contrato individual de trabajo.

Como los demás representantes de bloques y miembros informantes han dejado para la discusión en particular la exposición de las razones que los han llevado en cada caso a aceptar o desechar las modificaciones introducidas por el Senado, adoptaré el mismo criterio y sólo volveré a decir que aliento la esperanza de que con las aclaraciones que se formulen en este debate, el Honorable Senado, sin perjuicio de dejar constancia de su posición en cada una de las reformas por él introducidas, acepte la sanción que la Honorable Cámara dé en esta sesión, a efectos de que los trabajadores argentinos puedan por fin lograr ver satisfechas sus legítimas aspiraciones en cuanto a la adecuación a nuestra realidad económico-social de las normas que reglan el contrato de trabajo. Nada más.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado García Solá.

Sr. García Solá. — La ausencia de nuestro representante en la Comisión de Legislación del Trabajo, el señor diputado Díaz, motivada por una verdadera razón de fuerza mayor —está prácticamente cercado por las aguas— obliga al diputado que habla a fijar la posición del bloque frente al proyecto en debate.

Constreñidos por la exacta interpretación de la norma constitucional a aceptar o rechazar las modificaciones introducidas al despacho por el Honorable Senado, vamos a propiciar el rechazo de la mayoría de ellas, y el mantenimiento de la primitiva sanción de esta Cámara.

En efecto, creemos que en su gran mayoría estas innovaciones al proyecto son meramente formales. En cuanto a las que podrían juzgarse importantes —la del artículo 49, en cuanto excluye a los contratados marítimos y a los trabajadores rurales; la del artículo 20, en cuanto admite la posibilidad de disminución del salario en un 25 por ciento con posterioridad al reintegro del trabajador interrumpida la prestación del servicio por enfermedad; la del artículo nuevo, en cuanto excluye a los trabajadores a domicilio de los beneficios de licencia por enfermedad, percepción del salario durante tres meses e indemnización con posterioridad al período de enfermedad, y la del artículo 37, que trata sobre la incidencia de la huelga en

la suerte del contrato individual de trabajo—, creemos que estas modificaciones encierran graves errores de concepto, que impiden su admisión en esta revisión a que está abocada la Honorable Cámara. Aceptamos, en cambio, el artículo 26 de la sanción del Senado, en cuanto nos parece acertado admitir una expresión de voluntad de partes para el otorgamiento de la licencia, no obstante tratarse de una ley de orden público.

Por supuesto, nos reservamos para la discusión en particular la posibilidad de ampliar estos conceptos.

Finalmente, queremos agregar dos palabras sobre lo que llamaríamos la posibilidad de vigencia real de esta ley en el ámbito económico-social de la República. Creemos honradamente que este proyecto significa un esfuerzo ponderable, tanto de sus propiciadores como de la Comisión de Legislación del Trabajo. Indudablemente, esto es algo más que una modificación a la ley 11.729, a los artículos 157, siguientes y concordantes del Código de Comercio. En verdad, por este proyecto se regula íntegramente uno de los tres grandes capítulos del derecho social. Se regula y se norma toda la dinámica del contrato individual de trabajo, desde su definición hasta su extinción, en todo su desarrollo.

Este gran capítulo del derecho social, por cierto, está indudable e íntimamente ligado con los otros dos capítulos y fundamentalmente con el segundo, es decir, el derecho sindical del trabajo, que comprende la organización gremial, los conflictos colectivos de trabajo y toda la suerte de incidencias que tiene sobre el contrato individual.

Por supuesto, deseamos la vigencia real de esta ley, pero nos creemos en la obligación de advertir que, más allá del propósito del legislador, más allá del espíritu de que estará insuflada esta sanción y de sus finalidades, para la vigencia real de normas de este tipo se requieren circunstancias fácticas, determinado marco económico que les otorgue, precisamente, esa posibilidad.

Esta es, como todas las leyes del derecho social, una ley eminente y esencialmente distributiva. No aspira al despido, no obstante que lo regula. Aspira, en verdad, a la estabilidad, casi con el concepto con el que la definía Deveali, como la posibilidad de que el trabajador mantenga durante toda su vida el empleo, con el consiguiente derecho a la percepción del salario.

En cuanto previene el despido, la última instancia tuitiva de esta ley es la estabilidad en el empleo, aún tratándose, como en una ley de este tipo, de una estabilidad relativa.

Pero para que esta ley tenga, repito, vigencia real, se precisa algo más que la voluntad del legislador. Es necesaria una determinada diná-

mica económica. Será imposible, será vano y declamatorio tratar de orquestar un orden distributivo y social sobre una economía de estancamiento. Sólo en el marco de una economía en desarrollo pleno, integrada, lanzada, las leyes sociales encontrarán la base de sustentación económica inexcusable para su vigencia real.

Además, necesitan otra base de sustentación, que es la existencia de una organización gremial fuerte, coherente, unida, que asegure en los hechos, en la militancia, en su combatividad, la vigencia real de ésta y de todas las leyes protectoras del trabajador.

Específicamente en este campo afirmamos, finalmente, que esta ley, en cuanto protege en última instancia la estabilidad, pretende un efecto económico que es el pleno empleo para la plena producción, característica del desarrollo económico.

Estas consecuencias últimas a que aspiran leyes de este tipo sólo serán logradas con una economía en desarrollo, en expansión. Serán frustradas, no obstante los propósitos del legislador, cuando la dinámica económica está detenida, anulada y, en definitiva, cuando se desliza por el plano del absoluto estancamiento, como ocurre en estos momentos.

Sr. Risso. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Para una aclaración, tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — A propósito de las últimas palabras vertidas por el señor diputado García Solá, quiero manifestar que personalmente disiento con el concepto de que esta ley de contrato de trabajo tiende a garantizar la estabilidad del trabajador. Entiendo que sí es una pretensión de esta ley dar un cierto amparo jurídico al trabajador por vía de la indemnización que el patrón tendrá que pagar en el supuesto que produzca el hecho del despido. Pero creo que no se puede hablar de estabilidad *latu sensu* en la medida en que se da al patrón la posibilidad de despedir a sus obreros mediante el pago de la indemnización, con lo que precisamente se está diciendo lo contrario: se establece el derecho a despedir, en todo caso, y no la estabilidad, como afirma el señor diputado.

Sr. García Solá. — ¿Me permite, señor presidente, para una aclaración?

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado García Solá.

Sr. García Solá. — Al decir que la finalidad última de esta ley es proteger la estabilidad —concepto que ratifico—, he usado la terminología que admite toda la doctrina laboral, que clasifica a la estabilidad en dos grados, la absoluta y la relativa. La primera es la que prohíbe el despido, salvo causas taxativamente enumeradas por la ley; tales, por ejemplo, la

situación de los bancarios y la de los empleados de compañías de seguros. A la segunda se la define como aquella que no prohíbe el despido sino que lo previene mediante una indemnización resarcitoria y compatible con el perjuicio que al trabajador irrogara la rescisión unilateral del vínculo contractual. En ese sentido he utilizado el término estabilidad.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado De Cara.

Sr. De Cara. — Por razones circunstanciales, el sector demócrata progresista no concurrió al acto de la firma del despacho que la Honorable Cámara está considerando; pero, desde ahora, adelanto que nuestro sector votará el despacho de mayoría con disidencias parciales.

Como ya se ha dicho, el Honorable Senado no ha introducido, a la sanción de esta Cámara, reformas de tipo substancial. En términos generales, podría decirse que, excepto en algunos casos, las modificaciones son de forma, y que, por lo general, tienden a mejorar el proyecto. Esta circunstancia fue señalada por el señor senador Fassi en el Senado, y también lo hizo el señor miembro informante al considerar esta iniciativa que debemos tratar en segunda revisión.

Por lo expuesto, nuestro sector aceptará el despacho de mayoría, y votará los artículos reformados 1º, 2º, 4º (incisos a) y b)), 11, 13, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 35, 39 (inciso 2º, apartado b), 39 (inciso 3º, apartado a), 39 (inciso 6º), así como los artículos 46 y 55.

Las reformas introducidas por el Honorable Senado a los artículos 1º, 2º, 11, 13, 23, 24, 35 y 55, por tratarse de modificaciones de carácter formal, nos eximen de toda consideración en particular. Pero hay otros artículos en los cuales el Honorable Senado ha incorporado reformas que estimamos de relevancia, por lo que nos permitiremos hacer algunas breves consideraciones. En esta situación se encuentra la reforma introducida en el artículo 4º, que nosotros entendemos de importancia por cuanto excluye del ámbito de la regulación de esta ley a los trabajadores rurales y a los que tienen contratos de ajuste marítimo. Estas relaciones laborales se hallan regladas por estatutos particulares, y si bien, en la actualidad, las remuneraciones que este sector percibe están por debajo de la realidad, tales trabajadores no pueden ser incluidos en la regulación de la ley que tratamos, por cuanto ejercen actividades de características muy particulares. Por estas razones, brevemente expuestas, y por las que posteriormente daremos, votaremos afirmativamente las reformas introducidas por la otra Cámara en el artículo 4º.

Igualmente, aceptaremos la reforma incorporada como artículo 2 nuevo, relativa a los trabajadores a domicilio, quienes no gozarán de los beneficios correspondientes a las enfermedades inculpables y los accidentes del tra-

bajo. Este es un tema de importancia que, por consiguiente, debe ser analizado por separado. No negamos la posibilidad de que estos trabajadores tengan salvaguardada su salud; pero creemos que ello debe hacerse fuera de la regulación del contrato de trabajo que estudiamos, por tratarse de circunstancias muy particulares, que requieren un análisis a fondo.

Además, vamos a votar el artículo 27 porque en él apreciamos un hecho favorable. En efecto, el Senado ha agregado lo siguiente: «A tal efecto serán computados como días trabajados los períodos de interrupción de la prestación de servicios, originados por accidentes o enfermedades inculpables», que nos parece muy razonable.

Vamos a votar, asimismo, la modificación introducida por el Senado en el artículo 39, inciso 2º, b), por la que se faculta al juez para apreciar la magnitud de la injuria en los casos de despido, como vamos a votar el artículo 47, pues se mejora el texto anterior al ampliarlo e incluir el servicio militar y la licencia por maternidad.

Con este sentido votaremos las reformas introducidas por el Honorable Senado, que consideramos substanciales. En la discusión en particular ampliaremos los motivos determinantes de nuestra posición. Nuestro bloque se complace en señalar el beneplácito que tiene al votar esta ley que mejora los derechos sociales y del trabajador, contribuyendo, a no dudarlo, al bienestar general.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Ocampo.

Sr. Ocampo. — Señor presidente: con nuestra firma hemos concurrido en apoyo del despacho de la mayoría de la Comisión de Legislación del Trabajo.

Está de más que repita los conceptos ya expresados por los demás miembros de la comisión con respecto a la labor seria, continua y exhaustiva llevada a cabo a propósito de este tema.

Cuando se trató en la Cámara el proyecto originario nosotros dejamos sentada nuestra posición de por qué lo apoyábamos. Consideramos que esta reforma a la ley 11.729 más que una reforma era actualizar y sistematizar diversas instituciones de derecho del trabajo que reglan las condiciones del contrato laboral, y que en la actualidad aparecen regidas por distintos cuerpos o disposiciones dispersas, e incorporar a la legislación positiva otras ya aceptadas en forma unánime por la jurisprudencia.

En esta oportunidad nos vemos compelidos a referirnos a las modificaciones introducidas por el Senado. Cuando se trató en esta Cámara el proyecto en debate, nuestro bloque sostuvo, respecto de algunas de sus disposiciones, profundas divergencias, especialmente en lo que se refiere al régimen de las vacaciones. Sobre el particular sostuvimos que la antigüedad para otorgar

las vacaciones anuales debía determinarse desde el instante mismo en que la persona comienza a trabajar, en lugar de hacerlo de conformidad con la antigüedad que el trabajador tiene con el empleador que otorga la licencia. Desgraciadamente, la Cámara no aceptó nuestro temperamento propuesto por el socialismo argentino.

También sostuvimos la necesidad de que se estableciera definitivamente por la ley la estabilidad absoluta del trabajador, de manera que no pudiera romperse el contrato de trabajo en forma unilateral abonando al despedido una indemnización. Tampoco la Cámara lo aceptó. Reitero lo que en esa oportunidad dijimos: con el trabajador que ya cuenta con unos años de antigüedad —diez años, establecíamos— el empleador no puede romper unilateralmente el contrato de trabajo si no median causas justificadas y perfectamente establecidas en un juicio; y en caso de que el despido hubiera sido arbitrario, la parte patronal estaba en la obligación de reintegrarlo al trabajo y en caso de no hacerlo abonarle los jornales y sueldos con los incrementos propios en razón del costo de la vida y del aumento del salario, hasta que el trabajador por el transcurso del tiempo obtuviera su jubilación.

Desgraciadamente la mayoría de la Cámara de Diputados no aceptó la tesis de los representantes socialistas argentinos. Pero como ahora, por el trámite constitucional de la sanción de las leyes debemos referirnos exclusivamente a las modificaciones del Senado, como ya lo dije, sin poder introducir modificaciones algunas al texto sancionado por Diputados, vamos a insistir en él, aceptando exclusivamente las modificaciones que son de mera forma, pero no aquellas que desvirtúan o anulan la sanción de la Cámara de Diputados.

Creemos que esta discusión en general no es el momento para entrar a analizar cada uno de los artículos de esta ley, cosa que haremos en el momento oportuno. Pero como consideramos necesario y urgente la inmediata sanción de esta ley para terminar de una vez con la angustia de la clase trabajadora, pues por las magras indemnizaciones que ahora pagan los patrones se están produciendo despidos masivos, con la consiguiente angustia de la clase trabajadora, nosotros no nos vamos a extender en esta exposición y nos limitaremos por ahora a solicitar la inmediata sanción del despacho de la mayoría para tranquilidad del trabajador.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Fernández.

Sr. Fernández. — Señor presidente: el proyecto que esta noche considera la Honorable Cámara, en segunda revisión, es uno de los más importantes que ha tenido a estudio este cuerpo.

Yo lamento que las modificaciones introducidas por el Senado tengan el sentido regresivo que todos los señores diputados integrantes de

la comisión, en mayoría, han señalado. Todas las modificaciones substanciales introducidas por el Senado —vuelvo a afirmarlo y lo voy a probar— tienden a perjudicar los intereses legítimos de los trabajadores.

El artículo 4º de la sanción del Senado, que excluye a los contratos de ajuste marítimo, es un ejemplo. ¿Qué pretende el Senado con esta modificación? Pretende que estos únicos trabajadores de nuestra patria continúen protegidos —esto entre comillas— por las viejas disposiciones del Código de Comercio de 1889, artículo 993, código que es en lo substancial la reproducción del viejo Código de Comercio de la provincia de Buenos Aires de 1859, que fue luego instituido como código nacional en 1862. Estos trabajadores marítimos están protegidos por este artículo 993 del código de 1889, que entró en vigencia el 1º de mayo de 1890. El artículo 993 del código, que me voy a permitir leer porque nos va a ubicar debidamente en el problema y va a justificar la franqueza de mis palabras al haber calificado de regresivas las modificaciones introducidas por el Honorable Senado, dice así: «Todo oficial u hombre de la tripulación que probare haber sido despedido sin causa legítima, tendrá derecho a ser indemnizado por el capitán.

»Esa indemnización, ya sea que estén ajustados por mes o por viaje, consistirá en el tercio de los sueldos que el despedido habría verosímelmente ganado durante el viaje, si se lo despide antes de salir del puerto de la matrícula; en el importe de los sueldos que habría percibido desde la despedida hasta el fin del viaje, y gastos de retorno, si ha sido despedido en el curso del viaje. En tales casos el capitán no tiene derecho a exigir del dueño del buque las indemnizaciones que fuere obligado a pagar, a no ser que hubiere obrado con su expresa autorización.»

La jurisprudencia ha tratado de atenuar un poco esta enorme injusticia en que se ha colocado a los trabajadores marítimos. Pero la jurisprudencia no ha llegado a decir, porque no ha podido hacerlo, que estos trabajadores en su totalidad están comprendidos en las disposiciones de la ley 11.729, que ha introducido las modificaciones por todos conocidas al Código de Comercio. Es así que el tratadista Malvagni, en su obra *Derecho laboral de la navegación*, página 304, sostiene este criterio. Es decir, que si bien la jurisprudencia ha buscado una salida, ha tenido que limitar la protección a los trabajadores marítimos que actúan dentro del área de los puertos, pero no a los trabajadores que realizan ajustes para hacer viajes fluviales o marítimos.

Es así que el mencionado tratadista sostiene que «esta ley, que ha modificado los artículos 154 al 160 del Código de Comercio, fue aplicable primeramente, con exclusividad, a los

empleados de comercio, como correspondía tratándose de una simple modificación a las citadas disposiciones. Diversas tentativas que se hicieron ante los tribunales para obtener su aplicación a los tripulantes fueron rechazadas fundados en que éstos tenían su estatuto propio en el título VI, libro III, del Código de Comercio, que prevé el correspondiente régimen de despido». Y yo me he referido precisamente a ese bendito artículo 993 que es la protección que tienen los trabajadores marítimos. Protección que ya lleva una vigencia de 106 años.

El mismo tratadista manifiesta que «posteriormente, el decreto ley 33.302 del 20 de diciembre de 1945 (aprobado por la ley 12.921) ha sometido al imperio de aquella ley a todos los empleadores, por un lado, y empleados y obreros por el otro (artículos 66 y 67). Con tal motivo, y dada la amplitud de este decreto, se plantearon nuevamente, esta vez ante los tribunales del trabajo, los casos de despido de tripulantes que pretendían estar amparados por la ley 11.729». Por tratarse de personal especialmente portuario, no siendo gente de mar, los tribunales resolvieron que correspondían los beneficios solicitados.

En cambio, la aplicación de la ley fue negada a los tripulantes de embarcaciones fluviales que navegan entre provincias, y a las tripulaciones de los buques de ultramar con los mismos fundamentos que se habían aducido en los fallos que se citan.

El decreto 33.302/45, excelente decreto que hizo justicia a una gran masa de trabajadores, que estaba excluida de los beneficios de la ley 11.729, sostiene Malvagni, que a pesar de su amplitud no ha podido substituir al régimen de despido previsto en el Código de Comercio por la ley 11.729, porque implicaría derogar una cantidad de disposiciones de aquél, dislocando la armonía de las normas.

Esto es lo que hacemos ahora: derogamos estas normas que tienen 106 años, que no fueron comprendidas en el decreto ley 33.302/45. Este Congreso va a tener el honor y la satisfacción de haber hecho justicia para un sector importante de la clase trabajadora argentina.

No me explico cómo el Honorable Senado ha podido introducir esta modificación en el inciso c) del artículo 4º, texto que expresamente dice: «Las disposiciones de esta ley no serán aplicables a los trabajadores sujetos a contrato de ajuste marítimo.» La Honorable Cámara va a decidir hoy que estos trabajadores están comprendidos en el contrato de trabajo.

Los peones del campo son también excluidos de los beneficios de la ley, lo que es regresivo, enorme, por cuanto se vuelve al régimen del decreto ley 28.169/44, que fue modificado por el decreto ley 33.302/45, cuyo artículo 80 deroga las disposiciones que se oponen a su texto. Por eso, con muy buen criterio, la jurisprudencia ha

dicho que el decreto ley 28.169/44 no era ya ley de la Nación.

¿Qué va a suceder ahora si nosotros aceptamos la modificación que nos manda el Senado, excluyendo a los trabajadores comprendidos en el decreto ley 28.169/44? Que va a recobrar vida el Estatuto del Peón y los beneficios que gozan actualmente estos trabajadores, se van a esfumar, se les van a ir de las manos.

Tenemos, entre otros, el caso de las vacaciones. En el decreto ley 28.169/44, que se pretende resucitar, se dice que los trabajadores de más de un año de antigüedad y no más de cinco gozarán de un período anual de vacaciones pagas de ocho días corridos. Nosotros queremos que la ley en debate comprenda a los peones de nuestro campo, a esos abnegados trabajadores, para que aquellos que tengan una antigüedad entre seis meses y cinco años puedan gozar de diez días hábiles de vacaciones pagas anuales.

Dije, señor presidente, que la jurisprudencia interpreta bien lo que acabo de expresar. Para no fatigar a la Honorable Cámara, voy a leer sólo algunos fallos. «En caso de despido de un peón de campo, corresponde aplicar las disposiciones de la ley 12.921 (decreto ley 33.302/45), y no las del decreto ley 28.169/44, llamado «Estatuto del Peón», por ser éste anterior y haber quedado sus disposiciones opuestas a la ley mencionada, y derogadas por el artículo 80 de la misma.» (Cámara de Apelaciones del Trabajo, sala III, 29 de noviembre de 1947, juicio «Fuentes, Ramón Miguel contra Sopena, Ramón y otros, tomo II, página 580.)

«Ha sido propósito del legislador —dice otro caso jurisprudencial— que, con las únicas excepciones contenidas en el artículo 2º, inciso 1º, del decreto 33.302/45, todos los trabajadores del país que realicen tareas en función de dependencia disfruten de los beneficios que establece el aludido decreto. Siendo cronológicamente posterior el decreto 33.302/45 al Estatuto del Peón (decreto 28.169/44) las disposiciones de éste, en cuanto se opongan a las del primero, han quedado expresamente derogadas por así disponerlo el artículo 80» (Cámara de Apelaciones del Trabajo, sala III, 25 de abril de 1948. Zubiría, Luis Ricardo contra Quesada Pacheco, María Lucila U. A. de, tomo III, página 177).

Vuelvo a insistir, señor presidente, que, de aceptarse esta modificación, los peones tendrían que invocar como protección únicamente el decreto ley que ha sido derogado. Me refiero al 28.169/44, derogado por el 33.302/45. Es un salto hacia atrás. Digo y repito, hasta el cansancio, que esto es una enormidad, que es regresivo y que no lo puede aceptar una Cámara popular como la que integran los diputados de la Nación.

Otra de las modificaciones es la referida al decreto 3.750/46. ¿Quiénes son los favorecidos por este decreto? Son los tamberos medieros. El

tambero mediero, en mi concepto, es un subordinado, un trabajador con relación de dependencia, y lo voy a probar.

Dice el decreto ley 3.750, del 5 de enero de 1946, ratificado por la ley 12.921, lo siguiente: «Capítulo VI. Rescisión del contrato. La violación por parte del propietario de las disposiciones del presente decreto ley da derecho al tambero mediero a rescindir el contrato. En este caso deberá procederse a la liquidación de la participación que al tambero mediero corresponda y de las retribuciones del artículo 11 hasta el día de la entrega del tambo. El propietario deberá abonar además una indemnización equivalente al 50 por ciento mensual de lo percibido por el tambero mediero en los últimos 12 meses, previa deducción de los salarios de los peones, multiplicado por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses. Para tener derecho a esta indemnización se requiere una antigüedad mínima de un año. Sólo se computará para la indemnización el tiempo que transcurra a partir de la publicación de la presente ley.»

Y en el capítulo III, Derechos del propietario —y aquí es donde sostengo que aparece la relación de dependencia, la subordinación, lo que tipifica la relación laboral, o sea el contrato de trabajo—, el artículo 20 dice: «El tambero mediero estará a las órdenes directas del propietario o de la persona en quien delegue éste sus funciones, pudiendo intervenir uno u otro indistintamente.»

Aquí está, señor presidente, la subordinación o dependencia.

El artículo 21, que es concordante, dice que «corresponde al patrón fijar el horario de trabajo y la forma de explotación».

Finalmente, el artículo 22, que redondea esta figura jurídica que denominamos contrato de trabajo, dice que «La leche será entregada a quien ordene el patrono, siempre que se asegure al tambero mediero el precio mínimo fijado oficialmente.»

Como he dicho, el Senado quiere modificar esta situación y excluir de la ley a estos trabajadores del campo que, como he manifestado, son personas que están en relación de dependencia, encuadradas en un contrato de trabajo.

Antes de seguir adelante, quiero señalar que hay en el proyecto de ley tres artículos que yo llamo claves y que nos aclaran todos los problemas que puedan presentarse: son los artículos 1º, 4º y 5º.

En el artículo 1º se define el contrato de trabajo y los artículos 4º y 5º sirven para interpretar el concepto y el ámbito de aplicación. El informe producido por el señor diputado Pena es suficientemente explicatorio del alcance de estos tres preceptos.

En efecto, en la sesión del 20 de octubre de 1965 dijo lo siguiente: «Desde entonces esa ley, que no es una ley general de contratos de tra-

bajo, ha servido en la práctica de esquema general para todas las obligaciones que emergen de la relación laboral. Era necesaria su adecuación a una nueva realidad económico-social. Todos los sectores de esta Cámara así lo han manifestado a través de la presentación de diversos proyectos. Lamentablemente, la mayor parte de esos proyectos sólo propiciaban modificaciones parciales. Los diputados que subscribimos el proyecto que ha servido de base al despacho hemos entendido que era necesaria una sistematización de todas las disposiciones relativas al contrato de trabajo, salvo aquellas normas que pueden considerarse exclusivamente reglamentarias, como la de jornada, por ejemplo.

«En la redacción del proyecto hemos cuidado adoptar las mejores interpretaciones de la doctrina y de la jurisprudencia nacional y, además la experiencia extranjera.»

Más adelante, expresó: «Comienza en su artículo 1º por definir el contrato individual de trabajo, recogiendo la enseñanza de la doctrina nacional y extranjera y siguiendo, fundamentalmente, los lineamientos de la legislación española de 1932.

»Corriendo los riesgos que ello implica, se define el contrato de trabajo en la forma más amplia y comprensiva posible.»

Dijo luego: «En el artículo 4º se establece con precisión el ámbito de aplicación de la ley...»

Hecha esta aclaración que creo servirá a los fines de una mejor interpretación de la ley porque, insisto, en estos tres preceptos contenidos en los artículos 1º, 4º y 5º están sus pensamientos centrales, directrices, voy a referirme ahora a una nueva modificación que ha sido mencionada por algunos señores diputados con mucho acierto. Me refiero al artículo 22 nuevo del Senado.

Este artículo 22 nuevo, como lo ha señalado muy bien el señor diputado Risso, viene a retacear los derechos de los trabajadores a domicilio.

Yo tengo la enorme satisfacción de haber sido el legislador que propuso la inclusión de esos trabajadores en los beneficios de esta ley. Sos-tuve que, si bien es cierto que existe una legislación que los protege —ley 12.713—, también es cierto que ella está muy pasada de moda y que hay que actualizarla. Se dijo que existía un despacho sobre la materia y que pronto vendría la modificación. Pero bien sabemos nosotros las dificultades que existen para obtener la sanción de una ley por más buena voluntad que tengan todos los legisladores porque el trámite es pesado y muchas veces dificultoso. Mientras tanto, estos trabajadores habrían de quedar desprotegidos o mal protegidos, y por eso es que esta Cámara los incluyó en los beneficios de la ley. Pero el Senado retaceó esos beneficios y, como dijo bien el diputado Risso, estos trabajadores no tendrán derecho a enfermarse ni

a accidentarse, ni podrán recibir la indemnización por despido cuando haya transcurrido el año que corre desde los tres o seis meses de la licencia otorgada conforme a la ley por enfermedad o accidente inculpable.

A los trabajadores de la fábrica o del taller, el patrono tendrá que conservarles el puesto, pero no tendrá por qué preocuparse por los trabajadores a domicilio, porque no tendrá que darles la licencia de tres o seis meses ni reservarles el puesto por un año, y si ese hombre o esa mujer al terminar el año luego de transcurridos tres o seis meses, según correspondiere, no está en condiciones de trabajar, quedan sin ninguna clase de indemnización cosa que no ocurre en el caso de los demás trabajadores. Esto es muy importante y demuestra el sentido empresarista con que se ha procedido a hacer estas modificaciones.

Tengo sobre mi banca una nota que me ha hecho llegar un sindicato que agrupa a estos trabajadores. Voy a leer uno de los párrafos contenidos en esta nota que me ha remitido el Sindicato de Trabajadores Talleristas a Domicilio, fundado en el año 1929 y con personería gremial nacional 320. Dice así: «Buenos Aires, marzo 10 de 1966. Al señor presidente del bloque de la Unión Cívica Radical del Pueblo, doctor Raúl Fernández. S/D. De nuestra mayor consideración: Este honorable cuerpo se encuentra frente a la inminencia de considerar las reformas de la ley 11.729. La sanción dada por el Honorable Senado establece en su artículo 22 que los beneficios previstos en los artículos 17 al 21 no son aplicables a los trabajadores comprendidos en la ley 12.713. Consideramos que se trata de una inadecuada e injusta exclusión cuyas consecuencias resultarán tan lesivas para los trabajadores a domicilio como para la clase trabajadora en general. Desprotegido un sector tan importante, que recibirá por propia gravitación mayores tareas en detrimento de los obreros internos, caerán los salarios y se provocará una desafortunada competencia en favor de la patronal. Los trabajadores a domicilio mantienen con sus dadores de trabajo una relación de dependencia y de subordinación con sus patronos similar a la que vincula a los trabajadores en general».

—Ocupa la Presidencia de la Honorable Cámara, el señor presidente don Arturo Mor Roig.

Sr. Fernández. — «Mucha expresiones doctrinarias e infinidad de decisiones de los diversos tribunales de justicia del país así lo han entendido reiteradamente, aun cuando a veces han surgido fallos indecisos y contradictorios con esa tesis. Excluirlos ahora en forma tan tajante implicaría colocar a millares de trabajadores en un estado de absoluta inestabilidad en el trabajo. Toda la estructura de la ley

12.713, cuyo mayor valor radica en la fijación de tarifas mínimas, desaparecerá y estos obreros se verán obligados a complicarse con sus patronos quienes les impondrán salarios inferiores a los mínimos, so pena de ser despedidos sin indemnización alguna.»

Por eso me opongo a que se acepte este artículo que ha sido introducido por el Senado en forma aparentemente inocente, pero considero —para decirlo con la palabra clara con que suelo expresarme, sin ninguna clase de eufemismo ni de cálculos políticos— que tiende única y exclusivamente a favorecer a la clase empresaria.

Respecto del artículo 20, relativo a la conservación del empleo, opino que debe sancionarse como lo fue por la Cámara de Diputados, porque contiene una justa solución al problema del dependiente que no puede reincorporarse a su puesto al vencer el plazo de espera a que se refiere el artículo 155 del Código de Comercio, por encontrarse imposibilitado físicamente para el trabajo. Por otra parte, ésta es la solución dada por la jurisprudencia. A través de una aplicación analógica de lo establecido en el artículo 157, inciso 8º del mismo código, la reforma que se propone implica un salto atrás y es perjudicial a los legítimos intereses de los trabajadores, beneficiando también a los patronos.

Señalo que ésta es una de las modificaciones más reaccionarias de las introducidas por el Honorable Senado a la iniciativa aprobada por esta Cámara.

En cuanto al artículo 24, debe mantenerse la sanción de la Honorable Cámara de Diputados. La institución de las vacaciones persigue un fin higiénico y de preservación de la salud del asalariado, como todos sabemos, razón por la cual no pueden ser reducidas para favorecer intereses capitalistas. El término de las vacaciones debe ser de días hábiles; computarlo por días corridos significa reducirlas al incluir en el término de ellas, lo que por otras disposiciones legales ya tienen los trabajadores.

Artículo 30. Habría que aprobar en mi concepto el artículo 31 de la sanción del Senado y aclarar, a los fines de su posterior interpretación, que el plazo del preaviso legal no puede coincidir con el de las vacaciones pues las finalidades sociales que ambos institutos persiguen, excluyen la posibilidad de que se superpongan.

Por otra parte, la circunstancia de que la enfermedad o accidente inculpable ocurra durante el período de vacaciones no es obstáculo para el goce de los salarios por enfermedad inculpable, puesto que el contrato de trabajo se encuentre vigente.

Finalmente, llegamos al artículo 37. No me satisface plenamente este artículo tal como fue aprobado por esta Cámara, pero lo prefiero al sancionado por el Senado. El artículo dice que:

«El empleador, aun mediando declaración administrativa de ilegalidad, no podrá despedir a los trabajadores por adherir a una huelga, si ésta fue decretada por una asociación profesional reconocida.» Y no me satisface la sanción del Senado porque ella deja abierta la puerta para que por vía reglamentaria se disponga que la declaración de ilegalidad de una huelga puede ser causal de despido. Nosotros decimos que tal declaración no constituye causal de despido, pero el Senado omite decirlo; no sé si será demasiado suspicaz, pero tal vez se pueda establecer, por vía reglamentaria, que así sea. Como observación personal debo decir que no creo que pueda declararse la ilegalidad de una huelga, ni administrativa ni judicialmente, porque si no el derecho de huelga queda afectado, lesionado, deteriorado, enervado; es uno de esos derechos que prácticamente no admite ninguna clase de reglamentación, como no la admite el derecho a la libertad de prensa: cuando la libertad de prensa se reglamenta, la libertad de prensa desaparece. Es por eso que creo que debemos mantener este artículo 37 tal cual ha sido aprobado por la Honorable Cámara.

Estas son las observaciones de orden general que hago a este proyecto de ley. Creo que la Cámara debe insistir en su primera sanción. Este proyecto de ley, iniciativa de legisladores de la Unión Cívica Radical del Pueblo de esta Cámara, si bien no es perfecto por lo menos contempla los legítimos y apremiantes intereses de la clase trabajadora. Este proyecto, por otra parte, está acreditando la vocación popular y el sentido obrerista de este partido, partido que no ha surgido a la vida política argentina para defender los intereses de la oligarquía capitalista, sino los legítimos intereses de todos los argentinos. Este no es un partido de clase, y no siéndolo nunca ha descuidado la defensa de los trabajadores, que son, juntamente con los demás sectores de la sociedad, los forjadores de la grandeza argentina.

Yo me siento muy satisfecho con la sanción de esta Cámara. Creo que éste es uno de los trabajos más serios y positivos de los realizados, aprobado con el consentimiento de casi todos los sectores populares. Espero que esta Cámara se mantenga en los lineamientos generales de esta definición en materia de política laboral, definición que por otra parte está estampada en la plataforma partidaria y en las bases de la acción política de la Unión Cívica Radical del Pueblo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Christe.

Sr. Christe. — Señor presidente: mi intervención en este debate, un tanto accidental debido a que el diputado que iba a informar no ha podido llegar a la Cámara hasta este momento, se va a circunscribir a algunas breves consideraciones de orden general, con lo cual espero

ahorrar a la Cámara parte del tiempo que necesita para este debate y para el tratamiento de otros asuntos que aguardan consideración.

Debo significar, señor presidente, que tengo por los trabajadores una profunda simpatía, como que pertenezco a una familia de trabajadores y como que he trabajado desde los dieciséis años hasta hoy, sin turnos y sin horarios, como corresponde a quien trabaja sobre todo por el gusto que le encuentra al trabajo.

Los trabajadores merecen mi más decidido apoyo. Pero me temo que a veces, en esta puja por servir y proteger tanto a los trabajadores, de buena fe se los esté perjudicando. Yo creo sinceramente que la estabilidad del trabajador es premisa indispensable en un país bien organizado. Pero por encima de ella debe haber una prioridad: la de que el trabajador que tenga posibilidad de hacerlo, pueda trabajar.

Nos encontramos con que en esta Argentina de hoy, donde todo está por hacerse, los jóvenes con capacidad de trabajo deambulan por las calles sin conseguir una tarea que les permita vivir. Esta mañana, en mi ciudad de Santa Fe, recibí la visita de una señora que me decía, muy quejosa: «Yo no sé a qué tanto esfuerzo y tanto afán de mi hijo por estudiar, si no consigue trabajo.» Esta es una verdad, y yo la certifico, por lo menos en lo que respecta a mi provincia.

Hay mucha gente sin trabajo, y esta falta de trabajo se debe en gran parte a que los empresarios tienen miedo de ampliar sus fábricas y mucha gente de iniciativa no encara empresa alguna por miedo a tantas leyes, papelería y complicados trámites. Se están cerrando muchas fábricas en el interior del país, y esto debe movernos, a quienes tenemos alguna responsabilidad en el gobierno, a dar un enfoque distinto a la política económica; este enfoque no puede ser otro que el de proyectar la expansión económica desde la periferia hacia el interior. Hay una cantidad de localidades donde en un momento dado comenzaron a instalarse fábricas que ahora deben cerrarse, al no encontrar mercado por falta de población, ya que es sabido que el interior se está despoblando y, correlativamente, está aumentando el proletariado de las grandes ciudades, como la de Buenos Aires, que vive hacinado, sin perspectivas y desmoralizado.

Estas consideraciones no tienen nada que ver con la exquisita sensibilidad que pueden poner los señores diputados cuando defienden este proyecto de ley. Nosotros comprendemos el significado de esta legislación, y en ese sentido nuestro bloque la va a apoyar con el concepto de que debe contemplar, desde luego, la distinta situación económica por la que en este momento atraviesan los trabajadores, de manera de adecuar las indemnizaciones al monto de los sa-

larios y al valor de la moneda. Pero es necesario que no vayamos mucho más allá, porque por ese camino no haremos más que dañar a los trabajadores argentinos.

Otra de las consideraciones que deseo hacer en este momento y que habrá de determinar nuestra intervención en la discusión en particular, es aquella que se relaciona con la necesidad de que esta ley sea clara. Un señor diputado dijo hace unos instantes que los jueces son lo suficientemente prudentes como para hacer que este tipo de leyes se aplique de modo de contemplar también debidamente los intereses empresarios cuando estén en oposición con los de los trabajadores. El señor diputado que así opina piensa que difícilmente pueda ocurrir que un juez sancione una injusticia en este aspecto. Pero esto no es del todo exacto, y así lo puedo afirmar porque soy abogado y he actuado en el fuero laboral. Con el criterio de que las leyes del trabajo deben interpretarse preferentemente a favor de los obreros, muchas veces los jueces cometen injusticias muy grandes.

Con respecto a esta última cuestión, el artículo 37 de la ley, que se refiere al despido por falta o disminución de trabajo, puede dar lugar a serias injusticias por su redacción. Como dije hace unos instantes, en el interior de la República se están cerrando muchas fábricas ante la falta de mercado o porque la gran industria de la Capital trata de hacerlas desaparecer mediante un cierto tipo de competencia desleal. Esto último ha ocurrido, por ejemplo, con las fábricas de determinados productos alimenticios que se instalaron en gran cantidad en el interior; industrias importantes de la Capital empezaron a vender la mercadería a menor precio, y aquellos establecimientos no pudieron soportar la competencia. Recuerdo un caso en que un juez sentó la tesis de que el patrón debía demostrar que la falta de mercado no se debía a su culpa, cuando el obrero estaba señalando que ello ocurría por desorganización o porque la fábrica no estaba en las condiciones debidas y no se podía colocar el producto. Situaciones como ésta, de imposible probanza, hacen que en muchos casos los jueces, aun animados de la mejor buena voluntad, deban ser injustos porque la ley no es suficientemente clara. Yo pienso que este artículo 37 se encuentra en esa situación. En el debate en particular me permitiré hacer algunas consideraciones más amplias sobre este aspecto.

Reitero que nuestro bloque votará afirmativamente el despacho en general, y que en el tratamiento en particular hará algunas observaciones en procura del mejoramiento de la ley, para que ella sirva cabalmente a los intereses de los obreros, considerados éstos no como la contraparte del empresario, sino, sencillamente, como el término de una ecuación que debe ser armónica para beneficio de la República.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pizarro.

Sr. Pizarro. — No pensaba intervenir en este debate, por cuanto las razones por las que subscribimos uno de los despachos son suficientemente conocidas; pero de unas palabras del señor diputado Fernández, que calificó al proyecto como de contenido o esencia radical, me veo obligado, por razones de necesidad, a no guardar silencio.

Así, cuando se trató por primera vez este asunto en la Honorable Cámara, entre los antecedentes del orden del día 211 figuraron dos iniciativas de este bloque, caratuladas como de los señores diputados René y otros, entradas en 1964, y del diputado Vedia, también de 1964.

Es decir que ésta ha sido también una inquietud de la democracia cristiana, velando por la defensa de los intereses de los sectores populares argentinos.

Esta es la aclaración que quería formular a la Honorable Cámara.

Sr. Fernández. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Pizarro. — He terminado, señor diputado.

Sr. Fernández. — Yo no he negado lo que afirma el señor diputado. He dicho que había varias iniciativas de distintos señores diputados, pero que el proyecto que estamos considerando fue presentado por los legisladores radicales de este bloque.

Sr. Pizarro. — Lo ha sido en base a muchas iniciativas presentadas. Entre ellas, puedo mencionar las de los señores diputados Bogliano y otros, Maglietti, Niembro, Fabrizio y Ghioldi, y Pena y otros. En el orden del día 211 del año pasado están registradas.

Queda suficientemente aclarado el punto, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Habiéndose agotado la nómina de oradores, se va a llamar para votar en general.

—Se llama para votar.

—Luego de unos instantes:

Sr. Pizarro. — Señor presidente: para no perder más tiempo, solicito que se pase lista.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se va a pasar lista.

—Se pasa lista.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Hay quórum estricto, señores diputados.

Se va a votar en general el despacho de la mayoría.

Como no funciona el sistema de votación mecánica, se votará por signos.

—Resultado afirmativa.

Sr. Hardoy. — Dejo constancia de que nosotros nos pronunciamos a favor de nuestro propio despacho.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración en particular.

Se pondrán a consideración los artículos que contienen modificaciones respecto de la sanción del Honorable Senado.

En consideración el artículo 1º.

Sr. Secretario (Oliver). — Respecto del artículo 1º, el despacho de la mayoría de la comisión aconseja aceptar la modificación introducida por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Castellanos.

Sr. Castellanos. — Diré tan sólo unas pocas palabras para expresar que la modificación introducida por el Honorable Senado al cambiar la ubicación de las palabras «en relación de dependencia» no altera el concepto primigenio que se tuvo al redactar la definición incorporada en este artículo. Así lo ha estimado la comisión, y lo ha consignado en el despacho de la mayoría. Por estas razones se acepta la corrección establecida.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar, en particular, el despacho de la comisión.

—Resultado afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — Respecto del artículo 2º, el despacho de la mayoría de la comisión aconseja aceptar la modificación introducida por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Resultado afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 3º no presenta modificaciones. En el artículo 4º la mayoría de la comisión aconseja desechar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la mayoría de la comisión.

Sr. Castellanos. — La mayoría de la comisión ha rechazado las modificaciones introducidas por el Honorable Senado, en virtud de las breves consideraciones que paso a exponer.

En primer lugar, con respecto al inciso a), la comisión estima que la introducción de las palabras «poderes del Estado nacional, provincial y municipal» podría incluso llegar a aceptarse, pero que ello no es posible por la redacción confusa del inciso, ya que en él se habla del «Estado» y dentro del derecho público no podemos admitir que se considere al poder municipal como Estado municipal.

En cuanto al inciso b), lo rechazamos en virtud de las consideraciones de carácter jurídico que expuso el señor diputado Fernández, ya que no contempla la situación del tambero mediero ni la de los trabajadores rurales, reiterando así una postura netamente favorable para

los intereses de la clase terrateniente que no se aviene con la realidad económica y social del país.

En tercer término, se rechazan también las modificaciones al inciso c) porque excluye a los trabajadores marítimos contemplados en el libro III del Código de Comercio, además de las consideraciones que explicó el señor diputado Fernández. Incluso, de no rechazarlas, tales trabajadores no tendrían la protección que la ley establece con respecto a los beneficios por ella acordados.

De esta manera se rechazan las modificaciones introducidas al artículo 4º por el Honorable Senado, quedando subsistente el artículo con el texto aprobado originariamente por esta Cámara.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Tiene la palabra el señor miembro informante de la minoría.

Sr. Hardoy.— He escuchado con suma atención las exposiciones que se han hecho alrededor de este artículo 4º y de las reformas introducidas por el Honorable Senado. En general, las razones de los que defienden la sanción original de esta Cámara han sido largamente expuestas por el señor diputado Fernández en un discurso apasionado y de una profunda sinceridad que respeto pero que no puedo compartir.

Nadie pretende maltratar a la clase trabajadora ni privarla de los derechos que legítimamente le corresponden, ni de los beneficios que la condición económica del país puede darle; pero lo que es evidente es que no se puede hacer una legislación general que comprenda a todos los trabajadores del país sin excepción.

Cada vez es más diversificado el trabajo y a medida que se vaya progresando en nuestro país, a medida que nos vayamos industrializando y a medida que la revolución tecnológica haga sentir su influencia, esto será cada vez más evidente. Además, esto explica la existencia de estatutos especiales y la necesidad de un reglamento adecuado que esté relacionado en lo posible con cada tipo de actividad. Es muy distinto el trabajo que se realiza en las calderas de un barco con el que hace un tambero o un empleado de comercio. Se deben tener en cuenta las condiciones económicas, las condiciones en que hay que realizar la labor y las circunstancias especiales que se relacionan con la magnitud de la empresa, ya que todo esto crea una serie de situaciones prácticas que no pueden ser resueltas así, tan simplemente, aplicando un mismo texto a todo el mundo.

Estas situaciones explican que en la Argentina, al igual que en todos los países más evolucionados se determine la necesidad de la sanción de estatutos especiales. Sin embargo, aquí parece que la tendencia fuera hacia su supresión.

El trabajo de un peón de campo no puede ser comparado con el que se efectúa, por ejemplo, en un establecimiento textil de Avellaneda. No podemos aplicar las mismas normas, y si lo hacemos hemos de fracasar. Ante una situación de esta naturaleza resultaría perjudicado el campo o la industria. Por ello, entiendo que lo inteligente sería redactar el estatuto especial que cada clase de trabajo requiere y no producir este tipo de sanción.

Concretamente, señor presidente, con respecto al inciso a), entiendo que la reforma del Honorable Senado carece de mayor importancia.

Esta ley tiene la mala disposición consagrada en el artículo 5º, donde el trabajador afectado puede construir la clase de norma que le venga, eligiendo la que emana de su estatuto especial o la de la ley 11.729, que ahora reformamos. Ya se demostró en su oportunidad que esta situación va a traer un verdadero caos jurídico y que importa destruir el equilibrio económico de los estatutos especiales. Esto es irremediable pero, por lo menos, no agravemos el error que estamos cometiendo con esta nueva sanción.

Estoy de acuerdo con el hecho de que los trabajadores rurales necesitan protección, es posible que el Estatuto del Tambero tenga que ser modificado y admito que los trabajadores marítimos merecen consideración, pero no por este procedimiento. No debemos olvidar que los barcos argentinos son los más caros del mundo, son mucho más caros que los de los competidores en el comercio naviero. Este es un hecho que nadie puede ignorar y ahora se va a agravar, teniendo como consecuencia un aumento en los déficit. Es posible que algunos digan que esto no tiene mayor importancia, porque gran parte de esta actividad la desarrolla el Estado. Pero, en definitiva, la situación se cubre con el mayor déficit presupuestario que vamos a tener que sancionar dentro de pocos días. Lo cierto del caso es que todo se va a traducir en el aumento del costo de la vida y en el fracaso de la política económica del gobierno.

Por todas estas razones, me permito llamar a la reflexión a los señores diputados para que se acepte la reforma del Honorable Senado y, por lo menos, aspiro salvar la responsabilidad de nuestro sector ante la opinión pública que nos está mirando.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Tiene la palabra el señor diputado Raúl Fernández.

Sr. Fernández.— Señor presidente: pocas palabras voy a agregar a las ya dichas hace un momento, al discutirse el proyecto en general.

Deseo contestar al señor diputado Hardoy, expresando que es cierto que hacen falta estatutos especiales para adecuarlos a la realidad de cada actividad, pero no me podrá decir el señor diputado que los trabajadores marítimos

tienen que regirse por esta anticuada disposición legal que figura en el libro III, título VI, del Código de Comercio.

Sr. Hardoy. — El señor diputado escuchó lo contrario. Que su sector presente un proyecto de ley protegiendo a los trabajadores marítimos.

Sr. Fernández. — No tenemos esa ley; lo único que tenemos es el código de 1859, es decir, de hace 106 años. Eso es lo que actualmente protege a los trabajadores marítimos. Ese libro III del Código de Comercio es anticuado, como lo sostienen los tratadistas, entre ellos Malagarriaga, y habla de personal que en la actualidad ya no existe en la realidad marítima. Así, se habla del sobrecargo, que ya no existe porque ha sido substituido por el comisario de a bordo. Se trata de disposiciones inspiradas en aquellas viejas ordenanzas del Consulado del Mar y del Código de Francia de 1807. La Cámara podrá apreciar cuáles son las disposiciones en vigencia para proteger a los trabajadores marítimos. Que demuestre el señor diputado que el artículo 993 no tiene ese origen y esa antigüedad.

Con respecto a los trabajadores del campo, señalo que la Comisión de Legislación del Trabajo tiene firmado por unanimidad el dictamen inserto en el orden del día 204, impreso el 24 de septiembre de 1965 y con término vencido el 5 de octubre del mismo año. En el informe del dictamen se dice que se incorpora a los trabajadores agropecuarios al régimen de la ley 11.729 y sus modificatorias. Es decir, lo que sería luego la ley nacional del trabajador agropecuario, que esta Cámara debe aprobar sin más demora.

Sr. Hardoy. — Si el señor diputado me permite, le advierto que pedí y obtuve que ese despacho volviera a comisión. Tengo el deber de reconocer que el dictamen se firmó en forma apresurada y el temperamento lo adopté por tener disidencias profundas.

No propongo que se mantenga el vetusto Código de Comercio, pero creo que cambiarlo por la ley 11.729 no es la buena solución, sino que ésta sería que el Congreso dé el estatuto pertinente.

Sr. Fernández. — No hace falta, en este caso, ningún estatuto especial pues nos estamos refiriendo a episodios comunes a todos los trabajadores, y el artículo 1º es bien amplio y claro.

Volviendo a los trabajadores rurales debo hacer presente a la Cámara que la Comisión de Legislación del Trabajo redactó un magnífico proyecto sobre el tema, por iniciativa, precisamente, de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, que insisto que debe ser sancionado cuanto antes por esta Cámara porque dará satisfacción a un reclamo del campo argentino. Además, existe el antecedente de la ley 15.231, sancionada en 1959 por este Congreso y que el Poder Ejecutivo vetó por razones que no hacen al fondo de su contenido.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado De Cara.

Sr. De Cara. — Durante la consideración en general del proyecto en revisión que debatimos, señalé que el sector demócrata progresista votaría la reforma introducida por el Senado al artículo 49.

Las argumentaciones efectuadas por el señor diputado Hardoy, que comparto, me eximen de insistir sobre el particular. Sin embargo, quiero señalar que nosotros entendemos que esta materia debe ser reglada por los estatutos particulares y, en el caso de que ellos no se ajusten a la realidad que vive el país, deben ser reformados pero no incluidos en la presente ley. No podemos transformar esta sanción en una carroza a la que se incorpore toda la legislación del país, que en este momento no tiene sentido social. En caso contrario, por vía de analogía se podría incluir en la ley hasta a los bomberos, lo que no es razonable, ni adecuado, ni consulta tampoco la técnica jurídica.

Por estas breves razones, dejo fundado el voto demócrata progresista en favor de la reforma introducida por el Senado de la Nación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ocampo.

Sr. Ocampo. — Señor presidente: nosotros vamos a insistir en la sanción de la Cámara de Diputados. Rechazamos enérgicamente la modificación introducida por el Senado, que modifica substancialmente los propósitos de esta ley, evitando considerablemente los beneficios, con el evidente propósito de responder a los reclamos de diversos sectores, especialmente del comercio y de la industria en defensa de los intereses patronales. Hay que tener en cuenta que esta ley rige no sólo en lo referente a estabilidad, indemnizaciones y salarios sino también regula las demás condiciones de las relaciones laborales.

La sanción del Senado además de excluir a los trabajadores públicos (empleados nacionales, provinciales y municipales) y del servicio doméstico, extiende esas exclusiones a los trabajadores rurales, medieros tamberos y expresamente a los trabajadores marítimos, que, como dijo el diputado Fernández, gozaban, en virtud del decreto 33.302/45, de algunos de los beneficios de la ley 11.729. De aceptar la modificación del Senado los obreros marítimos quedarán completamente desamparados porque por esta ley, artículo 58 no modificado por el Senado, expresamente se deroga el decreto 33.302/45, con lo cual estos trabajadores quedan sujetos exclusivamente a las disposiciones del vetusto Código de Comercio, como también señaló con exactitud el señor diputado Fernández.

Nosotros no encontramos fundamentos para excluir a una enorme cantidad de trabajadores de los beneficios que acuerda la ley 11.729. El argumento de que deben ser regidos por es-

tatutos especiales no es suficiente como para que dejemos de protegerlos momentáneamente mediante esta ley. Cuando la Cámara lo considere oportuno, deberá sancionar dichos estatutos, pero mientras tanto ello no ocurra no podemos dejar desamparados a los sectores que he mencionado.

Por los motivos expuestos, nuestro sector rechaza terminantemente las modificaciones introducidas por el Honorable Senado, y mantiene la sanción originaria de Diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: son dos exclusiones de tipo general que el Senado ha incluido en el artículo 4º, originariamente sancionado por esta Cámara: una referida a los trabajadores rurales, y la otra al contrato de ajuste marítimo.

Nos ha parecido injusta la exclusión de los trabajadores rurales por cuanto, si bien es cierto que durante bastante tiempo este sector laboral vino siendo excluido de los beneficios de gran parte de la legislación del trabajo —sin que la naturaleza de las tareas, la modalidad de la prestación de servicios o la capacidad de la industria agropecuaria justificaran de manera alguna esa exclusión—, esa tendencia se ha invertido, doctrinariamente desde hace tiempo, pero en forma legislativa recién desde 1964. Concretamente, al incluir expresamente la ley del salario mínimo vital y móvil a los trabajadores rurales entre sus beneficiarios, lo que posibilitó la elevación de sus salarios reales en un 21,5 por ciento como promedio anual de los dos últimos años.

Por otra parte, corresponde recordar que el Estatuto del Peón —decreto ley 28.169/44— reconoció a los trabajadores el derecho a vacaciones anuales, si bien sólo un período reducido de 8 días, que después fue aumentado a diez días si la antigüedad en el trabajo era inferior a cinco años, y a quince días si la antigüedad era mayor, en virtud del decreto 34.147-1949, interpretando las disposiciones del decreto 33.302/45. Además se les reconoce una indemnización en el supuesto del despido injustificado, que el decreto 28.169 la estableció en una suma equivalente a medio mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor de seis meses y que fue aumentada por el decreto 34.147/49 a un mes de sueldo promedio, en el supuesto de despido arbitrario, y a medio mes en el supuesto del despido producido o falta o disminución de trabajo.

Es decir que desde entonces estos trabajadores rurales gozan de una indemnización y, si bien no han sido equiparados totalmente, se los ha colocado en una situación bastante análoga a la del resto de los trabajadores empleados en la industria y el comercio.

Por otra parte, debo recalcar que esa indemnización no tiene tope, lo que determina un

beneficio con relación a las indemnizaciones que perciben los trabajadores de la industria y el comercio, que sí lo tienen.

Además, este criterio ya ha sido enunciado por la Comisión de Legislación del Trabajo en el despacho contenido en el orden del día a que se refirió el señor diputado Fernández y que se relaciona con la ley general de trabajo agropecuario que, por las razones de todos conocidas, no ha sido considerada por esta Cámara.

Quiero dejar constancia que a título personal entiendo que la relación que liga al tambero mediero, conforme a la jurisprudencia más uniforme en el país, no configura un típico contrato de trabajo, por lo tanto considero que ha sido incluida erróneamente en esta disposición por el Senado y que, aplicando estrictamente las normas de la ley que estamos tratando, tampoco debiera ser incluido en su ámbito de aplicación.

La otra exclusión que proyecta el Senado es la del contrato de ajuste marítimo. Se han expuesto, para justificarla, razones de competencia internacional, lo que en alguna medida nos va a obligar a pasar rápidamente revista a lo que establecen las legislaciones de los países que pueden entrar en competencia con la Argentina en materia de tráfico marítimo.

El Código de Trabajo Marítimo francés fija una indemnización de un mes si el despido se produce antes de la partida del buque y la mitad de lo que hubiera ganado si es despedido en viaje. La ley aplicable en Gran Bretaña desde 1894, establece como mínimo una indemnización de un mes si el trabajador es despedido antes de comenzar el viaje, y lo que fijen los tribunales de la materia si es despedido después de iniciado. La legislación de los Estados Unidos fija una indemnización de un mes. La ley alemana del 26 de julio de 1957, de un mes. Son dos meses conforme a las leyes escandinavas. La ley italiana determina una indemnización de cuarenta y cinco días de salario si es despedido antes de la salida del buque, y todo lo que hubiera ganado si el despido se produce después de ese momento.

El artículo 993 de nuestro Código de Comercio establece que si los trabajadores son despedidos sin justa causa antes de la partida del buque percibirán un tercio de los salarios que hubieran ganado durante todo el viaje o durante todo el contrato de ajuste, y en el caso de ser despedido después de haber salido del puerto de matrícula del buque, un importe igual a lo que hubieran ganado durante el viaje, o durante todo el contrato de ajuste, más una indemnización por gastos de retorno.

De esta rápida enumeración surge que las disposiciones de esta ley no han de gravar de manera alguna a los armadores marítimos argentinos, por cuanto las diferencias con las legislaciones a que he aludido son bastante poco significativas.

Además debería tenerse presente que en el artículo 41 se prevé una indemnización del tercio de los salarios percibidos para aquellos trabajadores que no han alcanzado una prestación mayor de tres meses, caso en el que se encuentran normalmente los contratos de ajuste.

Por otro lado, en el artículo 50 se prevé la situación en que se coloca a los trabajadores temporarios, que es otra de las características típicas de estos contratos de ajuste: en los períodos de interrupción el contrato se mantiene latente y vuelve a adquirir vigencia cuando se concierne otro contrato de ajuste.

En definitiva, estas razones, de las que surge que los armadores argentinos no se van a encontrar fuera de competencia con respecto a armadores de otros países, nos han llevado a la decisión de no aceptar esta exclusión proyectada por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Señor presidente: al exponer durante el tratamiento en general de este proyecto, dije que una de las razones que nos habían determinado a fijar una disidencia parcial se refería precisamente a este artículo 49. Felizmente, de boca del señor miembro informante, y por las palabras del señor diputado Castellanos, hemos escuchado la posición, que presumo será si no de la unanimidad por lo menos de la mayoría de esta Cámara, de sostener el texto original sancionado por este cuerpo. Interpretación auténtica.

Adelanto, en nombre de mi bloque y en el mío propio, el apoyo a tal proposición. El señor diputado Fernández, con gran acopio de citas doctrinarias y jurisprudenciales, ha dado las razones que determinan no tener en cuenta la proposición formulada por el Senado. Si algo faltaba, la palabra del señor diputado Pena creo que ha dejado por demás aclarado este punto. En lo que se refiere a la postura sostenida por el señor miembro informante de la minoría, diputado Hardoy, señalo que lo seguí atentamente cuando fundaba su oposición al despacho de la mayoría, y pensaba que si un médico lo debiera definir somáticamente al señor diputado, seguramente lo calificaría de brevilíneo asténico. Pero por su expresión yo me atrevería a calificar al señor diputado Hardoy como pesimista consuetudinario —por supuesto, con el debido respeto—, porque de toda su exposición lo único que he alcanzado a sacar en claro es esa suerte de temor, de miedo, que enuncia el señor diputado en el sentido de que la sanción de la ley tal como lo propone el despacho de la mayoría de la comisión y lo habrá de sostener la mayoría de la Cámara traerá aparejados algunos problemas a corto plazo, aunque no sabe cuáles.

Al respecto, voy a recordar una posición asumida también cuando se discutió en este mismo

recinto la vieja ley 11.729. También entonces se manifestó el temor de que esta legislación perjudicara la economía de la industria y el comercio, y se decía que incluso atentaría contra el propio trabajador porque —como lo ha sostenido el señor diputado Christe en un pensamiento que no sé cómo lo ha hilvanado— los inversores, comerciantes e industriales no estarían dispuestos a invertir capitales; es decir, originaría un desaliento de la inversión porque nadie se atrevería a ampliar sus fábricas.

Yo no consigo establecer, ni lo pude deducir de las palabras del propio señor diputado Christe, que sostiene esta postura muy similar a la del señor diputado Hardoy...

Sr. Hardoy. — Será otro pesimista.

Sr. Risso. — ... dónde está la íntima conexión que existe entre esta ley y la recesión económica que pareciera indicar que hay en el país. En todo caso, esto será una cuestión de economía, y al respecto me voy a hacer eco de las palabras del señor diputado García Solá, cuando decía que no solamente hay que tener en cuenta el aspecto puramente jurídico de la ley, sino que también hay que tratar de que ella esté enmarcada —creo que éstos eran los términos precisos que utilizó el señor diputado— en un medio económico que le sea propicio, que la torne aplicable, es decir, que permita su viabilidad o su aplicabilidad.

Sr. Hardoy. — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. Risso. — Con todo gusto, señor diputado.

Sr. Hardoy. — No sé bien si soy tan pesimista o tan consuetudinario, pero lo que surge claramente de las palabras del señor diputado, que respeto, es que por lo menos el partido a que pertenezco tenía bastantes ilusiones cuando sancionó la ley en el año 1934, que ahora estamos tratando vanamente de mejorar. Además, algún señor diputado informante de la mayoría también nos hizo la demostración de cómo entonces los obreros y los empleados estaban en razón de los valores del dinero y de la situación económica del país mucho más protegidos que ahora.

Permítame también decirle, señor diputado, que sin duda ha de tener alguna ilusión, como por ejemplo la de conseguir el quórum para votar el dictamen. Nosotros con la presencia de casi todos los miembros de nuestro bloque, estamos dando el aporte que podemos para sancionar la ley, mientras que muchos sectores, como precisamente el que pertenece al señor diputado así como también el del MID, que tienen tanto interés en la sanción de esta ley, exhiben sus bancas vacías y a lo mejor no se podrá votar esta noche. Sin embargo, tenemos la ilusión de que se votará y hacemos lo posible para que ello ocurra.

Sr. Risso. — Continúo, señor presidente.

Sigo insistiendo en que el señor diputado Hardoy es pesimista. Habla de esta ley «que estamos tratando vanamente de reformar». No creo

que esas palabras sean las atinadas, porque ya hay un pronunciamiento que la Cámara ha podido apreciar a través de los distintos sectores que la integran en la votación en general.

Con esto se tiende a regular de una vez por todas y con un sentido orgánico el contrato individual de trabajo, cualquiera que sea la actividad del trabajador.

En el artículo 4º se habla de las exclusiones, materia en la que debemos ser muy restrictivos. Oportunamente, cuando examinamos el texto original en este recinto, estos temas estuvieron en debate. Recuerdo que también se trató la comprensión en el ámbito de esta ley del trabajador a domicilio. En esta ocasión, el Senado, con sentido regresivo —y empleo de las palabras vertidas por el señor diputado Fernández, que me parecen muy atinadas—, ha pretendido crear exclusiones, es decir, desamparar a vastos sectores de trabajadores argentinos. Para ser concreto, me refiero a los amparados en el decreto 28.169/44 es decir el trabajador rural.

Como bien lo ha dicho el señor diputado Pena, con acopio de citas y jurisprudencia, no es una «vana pretensión» —como lo quiere el señor diputado Hardoy— que en este momento pretendamos nosotros, los diputados de esta Cámara, que estén amparados por el texto de esta ley los trabajadores rurales.

Tenemos la obligación de proteger a esos trabajadores que en este momento crucial que vive el país son los que más aportan para que la Nación pueda seguir atendiendo sus compromisos internos e internacionales. Debemos mantener por lo menos una protección que no es reciente, sino que viene desde hace mucho, que se inició precisamente con ese decreto 28.169/44, que refirmó posteriormente el decreto 33.302/45 así como otras disposiciones legales que ha citado el señor diputado Pena, y protección que le han acordado, me atrevería a decir, la casi totalidad de las decisiones jurisprudenciales del país.

Los jueces se han ocupado de considerar este caso específico del trabajador rural, y siempre han tratado a esos trabajadores como amparados en el viejo texto de la ley 11.729. Si ahora estamos —no vanamente— tratando de reactualizar, de darle vigencia conforme a los hechos y a las circunstancias por las que atraviesa el país y, sobre todo, la clase obrera argentina, ese texto legal, no debemos perder de mira que esos trabajadores estaban comprendidos en su ámbito. Admitir la postura del Senado es regresar, volver a tiempos felizmente ya superados.

Señor presidente: entiendo que respecto de este punto la Honorable Cámara no tiene más que una sola expresión, que es mayoritaria y que han enunciado los distintos bloques: rechazar esa exclusión postulada por el Senado.

Me voy a referir a otro punto que fue el que me preocupó cuando formulé la disidencia parcial. El sentido que va a tener para la aplicación de la ley el decreto 3.570/46, es decir el que tutela al tambero mediero. En el caso que la decisión de esta Cámara sea rechazando la postulación del Senado, me atrevería a decir, con las palabras que empleó el señor miembro informante del dictamen de la mayoría, que los trabajadores tamberos medieros están incluidos en el ámbito de la ley, en lo que ella protege. Es decir que, concretamente, en eso disiento con la postura —personal, como aclaró, felizmente— del señor diputado Pena.

Es cierto que hay una legislación en el país que se ha inclinado —sobre todo, tiempo ha— por entender que no se trata de un contrato típicamente laboral. Yo diría que no es un contrato laboral puro *sui generis*. Es cierta la observación que hizo el señor diputado Pena. Pero del propio texto del decreto 3.570/46, como bien lo expresó el señor diputado Fernández, surge la viabilidad de que este trabajador, el tambero mediero, esté comprendido entre las personas que protege el proyecto que consideramos.

No digo esto caprichosamente, ni con el afán de congraciarme con los tamberos medieros. Hay razones de sobra que abonan mi afirmación y a ellas me voy a remitir. Del propio texto del decreto surgen esas razones. Allí, en el estatuto, se habla del patrono, de preaviso y de indemnización por despido. Incluso, lo que es muy interesante tener en cuenta, se menciona como autoridad de aplicación a la entonces Secretaría de Trabajo y Previsión reemplazada posteriormente por el actual Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Por si eso fuera poco hace contados minutos me han apuntado —esto está, naturalmente, sujeto a verificación— que las cajas de jubilaciones, inclusive, no reconocen al tambero mediero como patrono.

Es decir que la exclusión del tambero mediero de la protección de esta ley radicaría pura y exclusivamente en que algún artículo señala que él puede hacer trabajar a los miembros de su familia o a peones con pago a su cargo, situación similar a la del trabajador a domicilio.

Esa sola circunstancia no permite desvirtuar la existencia del contrato de trabajo, ya que en todo lo demás el patrono es el que aporta las vacas, los tinglados, las viviendas y locales donde se trabaja, y los instrumentos para las labores. El patrono es prácticamente, con cabal sentido, el empresario en el trabajo del tambero mediero. Este ni siquiera puede disponer el lugar de remisión del producto, ya que es el patrono quien fija el destino. Además, el patrono le fija horario y le da directivas.

Creo —y entiendo que la Honorable Cámara me acompaña en este sentido— que éstas son razones más que suficientes para que comprendamos que estamos en presencia de un contrato de

Marzo 12 de 1966

trabajo que debe ser reglado por la ley en examen. Si bien existe alguna deformación en el aspecto del pago a los peones, que se deja librado al tambero mediero en lugar de soportarlo exclusivamente el patrono del campo, no creo que esa sola circunstancia sea de entidad suficiente como para suponer —como lo hace el Senado— que esos trabajadores deben estar excluidos del régimen del contrato del trabajo.

Para terminar, entiendo que las razones que han abonado las exposiciones de los señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra, relacionadas con la exclusión de los trabajadores sujetos a contrato de ajuste marítimo, por tratarse de viejas y anquilosadas disposiciones —que se pretende hacer gravitar—, tampoco tienen vigencia.

En consecuencia, nuestro bloque sostiene lisa y llanamente el rechazo de la postulación del Senado y el mantenimiento en todos sus extremos del artículo 4º tal como fue oportunamente votado por esta Cámara y con la interpretación auténtica del señor miembro informante del despacho de mayoría.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a llamar para votar.

—Mientras se llama para votar:

Sr. Ocampo. — ¿Cuántos diputados hay en la casa, señor presidente?

Sr. Presidente (Mor Roig). — Hay quórum estricto de 97 señores diputados en la casa.

Sr. Ocampo. — Es inconcebible que tratándose una ley de esta importancia los representantes del pueblo no estén presentes para votarla.

Pido que se pase lista. El pueblo debe saber quiénes son los diputados que están ausentes en un debate de fundamental importancia como éste.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se procederá a pasar lista.

—Se pasa lista.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Al pase de lista registraron su presencia en el recinto 98 señores diputados.

Se va a votar el despacho de la comisión que aconseja desechar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al artículo 4º.

—Resultado afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — En el artículo 5º no hay modificaciones.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Fabrizioio.

Sr. Fabrizioio. — Deseo referirme al artículo 5º porque, aun cuando no presenta modificaciones del Honorable Senado, me parece interesante, respondiendo a algunas inquietudes, hacer un pedido de aclaración a la comisión a los efectos de que la explicación sirva para la interpretación posterior.

Expresa el artículo 5º que en los casos de actividades regidas por estatutos especiales, la aplicación de la ley estará referida a instituciones o beneficios no previstos en aquéllos, o cuando consagren beneficios superiores a los establecidos en los estatutos especiales.

Solicito a la comisión que aclare si la preeminencia de esta ley sobre los estatutos especiales es con respecto a la integridad de la ley o en los casos especiales que tratan artículos parciales de la ley.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: como lo ha aclarado el señor diputado Fabrizioio, este artículo no ha sido modificado por el Honorable Senado y, por lo tanto, no deberíamos entrar a considerarlo. Al solo efecto de satisfacer la inquietud del señor diputado diré que ésta es una ley general sobre contrato de trabajo y que la disposición de este artículo 5º tiende a lo siguiente: si el trabajador puede obtener beneficios mayores o mejores a través de esta ley, respecto de los que figuren contemplados en estatutos especiales, se aplicarán las disposiciones de esta ley. Igualmente, cuando aquellos estatutos no los contemplen, se aplicarán las disposiciones de esta ley. Es decir que esta ley no substituye a los estatutos especiales, sino que los complementa.

Nada más.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 6º no ha sido modificado por el Honorable Senado. En cambio, el artículo 7º ha sido modificado y la comisión aconseja desechar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Hardoy.

Sr. Hardoy. — Señor presidente: según la sanción originaria de esta Honorable Cámara el artículo 7º contiene una referencia a los usos y costumbres, que no pueden ser modificados por el empleador. Considero inconveniente esta disposición y en su oportunidad la critiqué porque abre amplio campo a la incertidumbre y a la duda.

Si el empresario cumple con las disposiciones reglamentarias y convencionales, si acata las leyes, si obedece a las autoridades y a la disciplina pactada en los convenios colectivos, esta introducción de los usos y costumbres, que no podrían ser variados por el empleador, será algo que originará consecuencias muy inconvenientes. Repito que es añadir incertidumbres, dudas y dificultades en el normal desenvolvimiento de las relaciones laborales. Por ello, mi sector va a votar para que acepte la enmienda introducida por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Castellanos.

Sr. Castellanos. — Señor presidente: precisamente por la exclusión de esos términos «usos y costumbres», efectuada por el Honorable

Senado, es que la comisión mantiene el texto aprobado inicialmente por esta Cámara. La fundamentación principal es que los usos y costumbres constituyen la fuente principal del derecho laboral, conjuntamente con las convenciones colectivas, las convenciones internacionales, etcétera.

En otro orden de consideraciones, los usos y costumbres servirán de elemento a esta Honorable Cámara para evitar las críticas que oportunamente se efectuaron, toda vez que a las facultades judiciales que tiene el patrón, que son las de sancionar o la de despedir, y a las facultades de dirección, se le agregaban también las legislativas que eran las de dictar el reglamento.

La comisión, al establecer la referencia a los usos y costumbres, dejó abierta la vía para realizar en base a esta ley, proyectos posteriores de mayor aliento, cuando las condiciones económicas, políticas y sociales del país sean más oportunas, lo que se dará precisamente cuando los obreros tengan que discutir con los patrones los reglamentos de fábrica para tener, juntamente con la dirección de la empresa una mayor participación en la dirección y en la orientación de la fábrica, para un estudio sobre cogestión, instituto que deberá hacerse con participación principalísima de los trabajadores.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Tiene la palabra el señor diputado Ocampo.

Sr. Ocampo.— Señor presidente: consideramos que éste es uno de los errores, tal vez el más grave, cometido por el Honorable Senado, pues al suprimirse entre las fuentes del derecho los usos y costumbres, se elimina algo que está perfectamente aceptado y reconocido en todos los cuerpos legales.

La supresión de «o los usos y costumbres» en el artículo 7º equivale a negarle la calidad de fuente del derecho; por otra parte, sería injusto que al cabo de cierto tiempo de prestación de servicios en determinadas condiciones de trabajo, por el solo hecho de no haberse estipulado por escrito las modalidades en que debe prestarse el servicio, el patrón pueda arbitrariamente modificarlas y dejar así, sin efecto las ventajas obtenidas por la clase trabajadora en su justa e incesante lucha por mejorar su condición.

Estas circunstancias nos llevan a mantener la sanción de la Cámara de Diputados y a rechazar la del Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Tiene la palabra el señor diputado García Solá.

Sr. García Solá.— Nosotros vamos a votar por el texto del artículo con la redacción que sancionó primitivamente la Cámara de Diputados, vale decir, sin aceptar la modificación que ha efectuado el Senado.

Nos fundamos en lo siguiente. Creemos que el artículo es muy claro. Establece como regla

la facultad del empleador, derivada de su capacidad para dirigir la empresa, para establecer las condiciones de trabajo o de prestación de los servicios, en cuanto no se opongan a leyes, a convenciones de partes o a los usos y costumbres. Los usos y costumbres están incorporados legítimamente a los derechos que puede exigir el trabajador dependiente frente al empleador en cuanto a la prestación de su servicio.

En este sentido, el artículo no hace sino recoger una reiterada jurisprudencia referida al *jus variandi*, al que lo considera injurioso cuando el patrón lo ejerce con exceso, es decir, excediendo las disposiciones de las normas colectivas o legales o afectando la dignidad material o moral de los trabajadores. Es decir, se refieren a valores no establecidos ni en las normas legales ni en las normas convencionales pero que, indudablemente, causan agravio y autorizan al trabajador, en esa hipótesis, a considerarse despedido. El artículo, en cuanto se encuadra dentro de esta doctrina, nos parece justificado y votaremos por el despacho de la mayoría.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a llamar para votar.

—Mientras se llama para votar.

Sr. Hardoy.— Pido la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Tiene la palabra el señor diputado Hardoy.

Sr. Hardoy.— Señor presidente: es posible que en este momento haya quórum en el recinto, pero lo cierto del caso es que cada vez resulta más difícil obtenerlo. Es muy probable, por lo tanto, que corramos el riesgo de que ante una votación la sesión tenga que levantarse, lo cual perjudicaría el trámite de esta ley que tanto ansían todos los sectores de la Cámara. En consecuencia, me parece que sería más prudente obtener el asentimiento general a los efectos de pasar a cuarto intermedio hasta mañana en lugar de esperar hasta las 24 horas.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Era propósito de la Presidencia hacer esta indicación al cuerpo ante la situación que se planteaba con las sucesivas votaciones y a los efectos de evitar que se malogre el esfuerzo de la Cámara. Por lo tanto, si hubiera asentimiento, la Presidencia, de acuerdo a lo resuelto anteriormente, invitaría al cuerpo a pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 16 horas.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Mor Roig).— La Presidencia invita a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 22 y 45.